C O R T E S

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CECILIO VALVERDE MAZUELAS

Sesión Plenaria núm. 77

celebrada el jueves, 9 de octubre de 1980

ORDEN DEL DIA (continuación)

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados (continuación):

- **De la Comisión de Justicia e Interior en relación con el proyecto de Ley Orgánica de la Reforma del Código de Justicia Militar («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, serie II, número 109, de 3 de octubre de 1980).**

Toma en consideración de proposiciones de ley del Senado:

- **De la proposición de ley sobre modificación de los artículos 5.º y 6.º y Disposición adicional (nueva) del Real Decreto-ley 11/1978, de 27 de abril («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, serie III, número 11, de 6 de mayo de 1980).**
-

SUMARIO

Se abre la sesión a las diez y veinte minutos de la mañana.

Continúa el orden del día.

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados (continuación):

	<u>Página</u>
— De la Comisión de Justicia e Interior en relación con el proyecto de Ley Orgánica de la Reforma del Código de Justicia Militar	3810
<i>El señor Ministro de Defensa (Rodríguez Sahagún) hace la presentación del proyecto de ley.</i>	
<i>El señor Martín Villa defiende el dictamen de la Comisión.</i>	
<i>En el debate de totalidad, usan de la palabra los señores Bosque Hita y Nadal Company.</i>	
<i>Seguidamente interviene de nuevo el señor Ministro de Defensa (Rodríguez Sahagún) y a continuación lo hacen los señores Ojeda Escobar y señor Ministro de Defensa (Rodríguez Sahagún).</i>	
<i>Acto seguido interviene el señor Irizar Ortega y de nuevo el señor Ministro de Defensa (Rodríguez Sahagún).</i>	
<i>A continuación usa de la palabra el señor Villar Arregui.</i>	
<i>Se entra en el debate del articulado.</i>	

	<u>Página</u>
Encabezamiento del artículo 1.º y 2.º del Código	3827

El señor Presidente manifiesta que el encabezamiento del artículo 1.º y el texto propuesto para el artículo 2.º no han sido objeto de votos particulares.

La Cámara los aprueba por asentimiento.

	<u>Página</u>
Artículo 6.º del Código	3827

El señor Irizar Ortega defiende los votos particulares números 1, 2 y 4 presentados por el Grupo Socialista.—A continuación inter-

vienen los señores Ojeda Escobar y Sánchez Torres. — Seguidamente el señor Nadal Company defiende el voto particular formulado por el Grupo Catalunya, Democracia i Socialisme, en relación con la enmienda número 3, relativa al número tercero del artículo 6.º.—Usan de la palabra a continuación el señor Irizar Ortega y el señor Sánchez Torres.

Sometido a votación el voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 1, que afecta al número 1 del artículo 6.º, fue rechazado por 53 votos a favor y 77 en contra.

Puesto a votación el voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 2, del artículo 6.º, fue rechazado por 53 votos a favor y 77 en contra.

Sometido a votación el voto particular del Grupo Catalunya, Democracia i Socialisme, enmienda número 3, al número 3 del artículo 6.º, fue rechazado por 53 votos a favor y 77 en contra.

Puesto a votación el voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 4, al número 4 del artículo 6.º, fue rechazado por 53 votos a favor y 77 en contra.

Sometido a votación el voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 4, relativa al número 7 del artículo 6.º, fue rechazado por 53 votos a favor y 77 en contra.

A pregunta del señor Presidente, y por no haberse presentado votos particulares al párrafo inicial y a los números 5, 6 y 8, fueron aprobados por asentimiento de la Cámara, conforme al texto del dictamen de la Comisión.

Puestos a votación los números 1, 2, 3, 4 y 7 del artículo 6.º, del texto del dictamen, fueron aprobados por 77 votos a favor, 51 en contra y dos abstenciones.

Seguidamente el señor Nadal Company defiende la enmienda número 7 presentada por el Grupo Catalunya, Democracia i Socialisme, que solicita la introducción de un nuevo apartado al artículo 6.º

A continuación interviene el señor Sánchez Reus.

Sometido a votación el voto particular, fue rechazado por 48 votos a favor y 74 en contra.

El señor Presidente manifiesta que queda aprobado el artículo 6.º, conforme al dictamen de la Comisión.

Página

Artículo 7.º del Código 3837

El señor Irizar Ortega defiende el voto particular, enmienda número 5, presentado por el Grupo Socialista al número 2 del artículo 7.º

A continuación usan de la palabra los señores Ojeda Escobar y Sánchez Torres.

Sometido a votación el voto particular del Grupo Socialista, fue rechazado por 50 votos a favor y 74 en contra.

Puesto a votación el texto del dictamen referente al párrafo inicial y a los números 1, 3, 4 y 5 del artículo 7.º, fueron aprobados por asentimiento de la Cámara.

Sometido a votación el número 2 del artículo 7.º, fue aprobado por 74 votos a favor, 47 en contra y tres abstenciones.

Página

Artículo 9.º del Código 3839

El señor Nadal Company defiende el voto particular presentado por el Grupo de Catalunya, Democracia i Socialisme, enmienda número 6, que afecta al número 2 del artículo.

A continuación usa de la palabra el señor Sánchez Reus.

Sometido a votación el voto particular, fue rechazado por 44 votos a favor, 62 en contra y tres abstenciones.

Por asentimiento fueron aprobados el párrafo inicial y los números 1, 3, 4 y 5 del artículo 9.º, conforme al dictamen de la Comisión.

Sometido a votación el número 2 del artículo 9.º, según el dictamen de la Comisión, fue aprobado por 65 votos a favor y 45 en contra.

Página

Artículo 13 del Código 3840

El señor Irizar Ortega defiende el voto particular del Grupo Socialista, enmienda nú-

mero 8, que pretende la supresión del artículo.

A continuación intervienen el señor Ojeda Escobar, el señor Sánchez Torres y el señor Presidente.

Seguidamente el señor Nadal Company defiende las enmiendas números 9, 10, 11 y 12, formuladas por el Grupo Catalunya, Democracia i Socialisme.

A continuación usa de la palabra el señor Sánchez Torres.

Sometido a votación el voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 4, fue rechazado por 51 votos a favor, 70 en contra y tres abstenciones.

Puesto a votación el voto particular del Grupo Catalunya, Democracia i Socialisme, enmienda número 9, fue rechazado por 51 votos a favor, 70 en contra y tres abstenciones.

Sometido a votación el voto particular del mismo Grupo, enmienda número 11, fue rechazado por 51 votos a favor, 70 en contra y tres abstenciones.

Asimismo fue rechazado el voto particular del mismo Grupo, enmienda número 10, por 51 votos a favor, 70 en contra y tres abstenciones.

La enmienda número 12 del mismo Grupo fue también rechazada por 54 votos a favor y 70 en contra.

Puesto a votación el texto propuesto para el artículo 13, fue aprobado por 70 votos a favor, 51 en contra y tres abstenciones.

Seguidamente el señor Nadal Company defiende el voto particular número 13, del Grupo Catalunya, Democracia i Socialisme, que propone una nueva redacción para el artículo 14.

Interviene a continuación el señor Sánchez Reus.

Sometido a votación, fue rechazado por 53 votos a favor y 65 en contra.

Página

Artículo 16 del Código 3847

El señor Nadal Company defiende las enmiendas números 14 y 17, retirando la número 15, presentadas por el Grupo Catalunya, Democracia i Socialisme.

A continuación intervienen los señores Ojeda Escobar y Sánchez Reus.

Seguidamente el señor Nadal Company defiende el voto particular que se corresponde con la enmienda número 17.—Usa de la palabra a continuación el señor Sánchez Reus.

Interviene acto seguido el señor Irizar Ortega, quien defiende el voto particular del Grupo Socialista, que se corresponde con la enmienda número 16.

A continuación usa de la palabra el señor Sánchez Reus.

Sometido a votación el voto particular del Grupo Catalunya, Democracia i Socialisme, que se corresponde con la enmienda número 14, referida al apartado 1, fue rechazado por 54 votos a favor y 68 en contra.

Puesto a votación el voto particular del mismo Grupo Parlamentario, correspondiente a la enmienda número 17, fue rechazado por 51 votos a favor, 69 en contra y tres abstenciones.

Fue rechazado el voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 16, por 54 votos a favor y 69 en contra.

Sometido a votación el texto propuesto por la Comisión, fue aprobado por 69 votos a favor, 51 en contra y dos abstenciones.

Página

Artículos 21 y 46 del Código 3851

No habiendo sido objeto de votos particulares, fueron aprobados, conforme al texto propuesto, por asentimiento de la Cámara.

Página

Artículo 52 del Código 3851

El señor Nadal Company defiende el voto particular formulado por el Grupo Parlamentario Catalunya, Democracia i Socialisme, que se corresponde con la enmienda número 18.

A continuación interviene el señor Martín Villa.

Sometido a votación el voto particular, fue rechazado por 51 votos a favor y 72 en contra.

Sometido a votación el texto propuesto por la Comisión, fue aprobado por asentimiento de la Cámara.

Página

Artículos 61, 84, 85 y 86 del Código 3853

El señor Ojeda Escobar retira la enmienda que el Grupo Socialista Andaluz tiene presentada al artículo 85.

A pregunta del señor Presidente, fueron aprobados por asentimiento los textos propuestos por la Comisión para dichos artículos. Se suspende la sesión a las dos y diez minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.

El señor Presidente informa a la Cámara que se han presentado sendos escritos por los portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Cámara que afectan a diversos artículos, aún no debatidos, de los que se irá dando cuenta a medida de que se trate de cada uno de ellos.

Página

Artículo 87 del Código 3853

El señor Presidente manifiesta que a este artículo estaban reservados dos votos particulares, uno del Grupo Socialista Andaluz y otro del Grupo Catalunya, Democracia i Socialisme, pero que cabe deducir, por los escritos presentados, que ambos votos particulares han sido retirados.—En consecuencia lee a la Cámara la redacción que tendría dicho artículo, en consideración a las propuestas formuladas.

A continuación intervienen los señores Bosque Hita, Ojeda Escobar, Martín Villa y de nuevo el señor Presidente.

Seguidamente el señor Ojeda Escobar renuncia a la enmienda número 21 y usan de la palabra el señor Martín Villa y el señor Presidente.

A continuación se somete a votación el nuevo texto para el artículo 87 en los términos resultantes de la lectura efectuada, siendo aprobado por 99 votos a favor y uno en contra.

	<u>Página</u>
Artículo 89 del Código	3856

El señor Nadal Company retira el voto particular presentado.

El señor Presidente da lectura al texto que se propone para el artículo 89.

A pregunta del señor Presidente la Cámara aprueba por asentimiento el texto a que se ha dado lectura, incorporándolo al dictamen de la Comisión.

Seguidamente el señor Ojeda Escobar defiende el voto particular presentado por el Grupo Socialista Andaluz, correspondiente a la enmienda número 22.

A continuación usan de la palabra los señores Irizar Ortega y Martín Villa.

Se somete a votación el voto particular, siendo rechazado por 41 votos a favor y 63 en contra.

El señor Nadal Company interviene para defender la enmienda número 23, que pretende introducir una modificación en el artículo 95 del Código.

Intervienen los señores Ojeda Escobar y Villar Arregui y seguidamente lo hace el señor Presidente.

A continuación de nuevo usa de la palabra el señor Ojeda Escobar para una cuestión de orden al que contesta el señor Presidente. Acto seguido intervienen los señores Villar Arregui, Nadal Company y Ojeda Escobar. Por último, el señor Presidente manifiesta que queda retirado el voto particular.

	<u>Página</u>
Artículo 101 del Código	3861

No habiendo sido objeto de votos particulares, a pregunta del señor Presidente, fue aprobado por asentimiento el texto del dictamen de la Comisión.

	<u>Página</u>
Artículo 107 del Código	3861

El señor Irizar Ortega defiende el voto particular formulado por el Grupo Socialista, que se corresponde con la enmienda número 25.

A continuación usa de la palabra el señor Sánchez Reus.

Sometido a votación el voto particular, fue rechazado por 39 votos a favor y 59 en contra.

Puesto a votación el texto del dictamen de la Comisión, fue aprobado por 59 votos a favor y 41 en contra.

A continuación el señor Ojeda Escobar defiende la enmienda número 27, que postula la redacción del artículo 116 del Código.

Interviene el señor Martín Villa.

Sometido a votación, fue rechazado el voto particular por 39 votos a favor y 58 en contra.

A continuación el señor Ojeda Escobar interviene sobre la enmienda número 27, que propone nueva redacción para el artículo 118 del Código, para manifestar que queda retirada.

	<u>Página</u>
Artículo 123 del Código	3864

El señor Presidente manifiesta que a este artículo había reservado un voto particular del Grupo Socialista Andaluz, que ha sido retirado, pero habrá que entender válido el voto particular que consiste en la supresión del vocablo «togado», según el escrito remitido por los señores portavoces.

El señor Ojeda Escobar interviene para manifestar que habría que incluir entre los párrafos a suspender del artículo 129 el que se refiere «a los tenientes fiscales militares».

Usa de la palabra el señor Martín Villa y a continuación el señor Presidente, quien manifiesta que se da por incluido como si se hubiera presentado oportunamente, ya que dicha inclusión viene motivada por las que ya han sido aceptadas por la Cámara.

El artículo 123 queda aprobado por asentimiento de la Cámara con el texto del dictamen de la Comisión y con la supresión del vocablo «togado».

	<u>Página</u>
Artículo 124 del Código	3865

El señor Presidente manifiesta que este artículo queda incluido en el escrito que viene a

modificar el dictamen de la Comisión, consistiendo esa modificación en sustituir la expresión «los Fiscales serán» por «el Fiscal será», y los vocablos «tomarán asiento» por «tomara asiento».

La Cámara aprueba por asentimiento dicho artículo en los términos indicados.

Página

Artículo 125 del Código 3865

La Cámara con la sustitución de la expresión «cuando los Fiscales asistan» por «cuando el Fiscal asista», aprueba el texto del dictamen de la Comisión.

Página

Artículo 126 del Código 3865

El señor Presidente manifiesta que dicho artículo, en su párrafo primero, sufrirá la siguiente modificación: «En los asuntos que hayan de verse en el Pleno se dará audiencia al Fiscal», y quedará suprimido el resto de sus párrafos.—En consecuencia, en el artículo 5.º en que se relacionan las supresiones, habrán de incluirse todos los párrafos del artículo 126, salvo el primero.

La Cámara así lo aprueba por asentimiento.

Página

Artículo 127 del Código 3865

El señor Presidente manifiesta que a este artículo había presentado un voto particular el Grupo Parlamentario de Catalunya, Democracia i Socialisme, pero el escrito entregado a la Mesa sustituye y anula el voto particular.

El señor Secretario da lectura a la nueva redacción que se propone para este artículo 127.

La Cámara aprueba por asentimiento dicho nuevo texto.

Página

Artículos 136, 137, 140, 141, 154, 155, 156, 157, 164, 165, 171, 172, 185, 186, 187, 189, 190, 194, 197, 209, 218, 223, 224, 231, 245, 256, 258, 262, 286, 312, 314 y 316 del Código 3866

A pregunta del señor Presidente, y no habiendo sido objeto de votos particulares, se aprueban conforme al dictamen de la Comisión, si bien en el artículo 171, en el número 3, en que se establecen las sanciones por vía disciplinaria a los abogados defensores, donde dice «advertencia, apercibimiento, multa de 250 a 1.000 pesetas», debe decir: «De 10.000 a 500.000 pesetas».

Página

Artículo 317 del Código 3866

El señor Nadal Company defiende el voto particular en correspondencia con la enmienda número 32 del Grupo Catalunya, Democracia i Socialisme.

Interviene a continuación el señor Sánchez Reus.

Sometido a votación el voto particular, fue rechazado por 31 votos a favor y 57 en contra.

Puesto a votación el dictamen de la Comisión, fue aprobado por asentimiento de la Cámara.

Página

Artículo 328 del Código 3867

No teniendo votos particulares, a pregunta del señor Presidente, fue aprobado por asentimiento de la Cámara, conforme al dictamen de la Comisión.

A continuación el señor Irizar Ortega defiende el voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 33, que postula la modificación del artículo 387.

Interviene a continuación el señor Sánchez Reus.

Sometido a votación, fue rechazado el voto particular por 31 votos a favor y 58 en contra.

Página

Artículo 405 del Código 3868

Se aprueba el texto propuesto por la Comisión por asentimiento de la Cámara.

Seguidamente el señor Irizar Ortega defiende el voto particular, que postula la modi-

ficación del artículo 408, conforme a la enmienda número 34.

A continuación interviene el señor Sánchez Reus.

Sometido a votación, se rechaza el voto particular por 33 votos a favor y 55 en contra.

Página

Artículos 415, 416 y 424 del Código.. 3869

No habiendo sido objeto de votos particulares, se aprueban por asentimiento de la Cámara, conforme al dictamen de la Comisión.

Página

Artículo 437 del Código 3869

El señor Irizar Ortega defiende el voto particular formulado por el Grupo Socialista, que se corresponde con la enmienda número 35.

A continuación interviene el señor Sánchez Torres.

El señor Nadal Company defiende el voto particular del Grupo Parlamentario Catalunya, Democracia i Socialisme, que se corresponde con la enmienda número 36.

Seguidamente usa de la palabra el señor Sánchez Torres.

Sometido a votación el voto particular del Grupo Socialista, fue rechazado por 31 votos a favor, 58 en contra y cuatro abstenciones.

Puesto a votación el voto particular del Grupo Catalunya, Democracia i Socialisme, fue asimismo rechazado por 35 votos a favor y 61 en contra.

Seguidamente fue aprobado por asentimiento de la Cámara el texto propuesto por la Comisión.

Página

Artículos 440 y 442 del Código 3871

No habiéndose presentado votos particulares, por asentimiento de la Cámara se aprueban dichos artículos conforme al dictamen de la Comisión.

Página

Artículo 443 del Código 3871

El señor Irizar Ortega defiende el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, que se corresponde con la enmienda número 38.

A continuación usan de la palabra los señores Ojeda Escobar y Martín Villa.

Puesto a votación el voto particular, fue rechazado por 36 votos a favor y 49 en contra.

Por asentimiento de la Cámara se aprueban todos los números y letras del artículo 443, excepto la letra a) del número 2, que, sometida a votación, fue aprobada por 48 votos a favor y 36 en contra.

Página

Artículos 452, 491, 492 y 569 del Código 3873

No habiendo sido objeto de votos particulares, fueron aprobados por asentimiento conforme al texto del dictamen de la Comisión.

Página

Artículo 580 del Código 3873

El señor Irizar Ortega defiende el voto particular que se corresponde con la enmienda número 39.

A continuación interviene el señor Villar Arregui.

Sometido a votación el voto particular del Grupo Socialista, fue rechazado por 36 votos a favor y 48 en contra.

A pregunta del señor Presidente fueron aprobados por asentimiento de la Cámara los puntos que comprende el texto del dictamen de la Comisión, salvo el 3 y el 10.

Sometido a votación el texto del punto 3, fue aprobado por 55 votos a favor y 34 abstenciones.

Puesto a votación el punto 10, fue aprobado asimismo, por 55 votos a favor y 34 en contra.

Página

Artículos 581, 582, 584, 595, 605, 701, 728, 729 y 736 del Código 3876

El señor Presidente informa a la Cámara que hay que hacer la rectificación de una erra-

ta en el 729 en que el punto octavo no es tal, sino que es algo que tiene que ver con todo lo demás del artículo.

Sometido a votación el artículo 581, conforme al texto del dictamen, fue aprobado por 55 votos a favor y 36 en contra.

A pregunta del señor Presidente fueron aprobados por asentimiento los textos del dictamen de la Comisión de los artículos 582, 584, 595, 605, 701, 728, 729 y 736.

A continuación el señor Nadal Company defiende el voto particular del Grupo Parlamentario Catalunya, Democracia i Socialisme, que se corresponde con la enmienda 40, y que postula redacción nueva para el artículo 766.

A continuación usan de la palabra el señor Prat García y el señor Villar Arregui.

Sometido a votación el voto particular, fue rechazado por 32 votos a favor y 57 en contra.

Página

Artículos 767, 777, 793, 809, 816, 823, 871, 906, 927, 976 y 979 del Código. 3878

El señor Presidente indica que dichos artículos no han sido objeto de votos particulares, añadiendo que el artículo 777 figura entre los que en tiempo y forma han sido rectificadas parcialmente mediante la fórmula acordada.

Fueron aprobados por asentimiento de la Cámara, conforme al dictamen de la Comisión.

A continuación el señor Irizar Ortega defiende el voto particular del Grupo Socialista, que se corresponde con la enmienda número 42, que propone redacción distinta para el artículo 1.007.

A continuación interviene el señor Martín Villa.

Sometido a votación, fue rechazado por 28 votos a favor y 52 en contra.

Página

Artículo 1.011 del Código 3879

El señor Irizar Ortega defiende el voto particular del Grupo Socialista, que se corresponde con la enmienda número 43.

A continuación interviene el señor Martín Villa.

Sometido a votación el voto particular, fue rechazado por 29 votos a favor y 49 en contra.

Puesto a votación el texto propuesto por el dictamen de la Comisión para el artículo 1.011, fue aprobado por 49 votos a favor y 29 en contra.

Página

Artículos 1.º bis, 2.º y 3.º del dictamen 3880

No teniendo votos particulares, fueron aprobados por asentimiento de la Cámara.

Página

Artículo 4.º del dictamen 3880

El señor Nadal Company defiende el voto particular, que se corresponde con la enmienda número 44.

A continuación interviene el señor Sánchez Reus.

Sometido a votación el voto particular, fue rechazado por 27 votos a favor, 53 en contra y una abstención.

Puesto a votación el texto del dictamen, fue aprobado por 53 votos a favor y 28 abstenciones.

Página

Artículo 5.º del dictamen 3881

El señor Ojeda Escobar defiende la enmienda número 45.

A continuación interviene el señor Martín Villa.

El señor Irizar Ortega defiende las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista.

A continuación usa de la palabra el señor Villar Arregui.

Seguidamente interviene el señor Sánchez Torres.

Usa de la palabra acto seguido el señor Nadal Company para defender la enmienda número 49.

Interviene después el señor Villar Arregui.

A continuación el señor Prat García interviene para defender el voto particular que se corresponde con la enmienda número 52 y el formulado por el Grupo Catalunya, De-

mocracia i Socialisme, enmienda número 53.

Acto seguido usan de la palabra los señores Nadal Company y Villar Arregui.

A pregunta del señor Presidente, fue aprobado el voto particular del Grupo Socialista Andaluz, que se corresponde con la enmienda número 45, quedando incorporado al texto del dictamen.

Puesto a votación el voto particular del Grupo Socialista, que se corresponde con la enmienda número 46, fue rechazado por 30 votos a favor y 58 en contra.

Sometido a votación el voto particular del Grupo Socialista, que se corresponde con la enmienda número 48, fue rechazado por 30 votos a favor, 57 en contra y una abstención.

Asimismo fue rechazado el voto particular del Grupo Catalunya, Democracia i Socialisme, que se corresponde con la enmienda número 49, por 30 votos a favor y 58 en contra.

También fue rechazado el voto particular del Grupo Socialista, que se corresponde con la enmienda número 50, por 30 votos a favor y 58 en contra.

Fue rechazado el voto particular del Grupo Socialista, que se corresponde con la enmienda número 51, por 30 votos a favor y 58 en contra.

Sometido a votación el voto particular conjunto del Grupo Socialista, correspondiente a la enmienda número 52, y Grupo Catalunya, Democracia i Socialisme, enmienda número 53, referidos ambos a los Tribunales de Honor, fueron rechazados por 30 votos a favor y 58 en contra.

A continuación el señor Nadal Company interviene para una cuestión de orden al que contesta el señor Presidente.

Efectuada la votación del texto del artículo 5.º, según el dictamen de la Comisión, fue aprobado por 58 votos a favor y 32 abstenciones.

Página

Artículos 6.º a 13 del dictamen 3892

No teniendo votos particulares, a pregunta del señor Presidente, fueron aprobados por asentimiento.

Se suspende la sesión.

Se reanuda la sesión.

El señor Prat García defiende la enmienda número 56 del Grupo Socialista, que postula la introducción de un artículo 13 bis.

A continuación usa de la palabra el señor Martín Villa.

Se somete a votación la enmienda número 56 del Grupo Socialista, que es rechazada por 26 votos a favor y 45 en contra.

El señor Nadal Company defiende el voto particular que se corresponde con la enmienda número 55 del Grupo Parlamentario Catalunya, Democracia i Socialisme.

A continuación interviene el señor Martín Villa.

Sometido a votación el voto particular, fue rechazado por 23 votos a favor, 47 en contra y dos abstenciones.

Seguidamente el señor Ojeda Escobar defiende la enmienda número 54 presentada por el Grupo Socialista Andaluz.

Interviene a continuación el señor Sánchez Torres.

Sometido a votación, fue rechazado el voto particular del Grupo Socialista por 26 votos a favor y 48 en contra.

Página

Disposiciones adicional y transitorias primera, segunda, tercera, cuarta y quinta del dictamen... .. 3895

Retirado el voto particular presentado por el Grupo Catalunya, Democracia i Socialisme, a la Disposición adicional, y no habiendo sido presentado votos particulares a las Disposiciones transitorias citadas, a pregunta del señor Presidente, fueron aprobadas por asentimiento.

El señor Subirats Piñana retira el voto particular presentado por el Grupo Catalunya, Democracia i Socialisme, que postula una Disposición transitoria nueva, que sería la quinta bis.

A continuación el señor Laborda Martín retira el voto particular presentado por el Grupo Socialista, que pretende la inclusión de una Disposición transitoria nueva.

Acto seguido usa de la palabra el señor Ministro de Defensa (Rodríguez Sahagún).

Página

Disposición transitoria sexta del dictamen 3899

A pregunta del señor Presidente, por no existir votos particulares, es aprobada por asentimiento de la Cámara.

Página

Disposición final primera del dictamen 3899

El señor Laborda Martín retira el voto particular presentado por el Grupo Socialista. A pregunta de la Presidencia, fue aprobada por asentimiento de la Cámara.

Página

Disposiciones finales segunda y tercera nueva del dictamen 3899

No habiendo sido objeto de votos particulares, fueron aprobadas por asentimiento de la Cámara.

El señor Presidente manifiesta que finalizado el debate, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas propuestas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en los términos que procedan.

A continuación usa de la palabra el señor Ministro de Defensa (Rodríguez Sahagún).

Toma en consideración de la proposición de ley del Senado:

Página

— **Sobre modificación de los artículos 5.º y 6.º y Disposición adicional (nueva) del Real Decreto-ley 11/1978, de 27 de abril** 3900

El señor Ojeda Escobar explica a la Cámara el dictamen de la Comisión.

A continuación, y en turno de portavoces, usa de la palabra nuevamente el señor Ojeda Escobar y los señores Arévalo Santiago y Villodres García.

La Cámara, a pregunta del señor Presidente, aprueba por unanimidad la toma en consideración de esta proposición de ley.

El señor Presidente indica que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89, 2, de la Constitución, la referida proposición de ley será remitida al Congreso de los Diputados para su tramitación ulterior.

El señor Presidente informa a la Cámara que la próxima semana no habrá sesión plenaria, y que los señores Senadores serán convocados para el Pleno que se iniciará en la tarde del martes día 21.

Se levanta la sesión.

Eran las nueve y cuarenta minutos de la noche.

—————

Se abre la sesión a las diez y veinte minutos de la mañana.

DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (continuación):

— **DE LA COMISION DE JUSTICIA E INTERIOR EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE LA REFORMA DEL CODIGO DE JUSTICIA MILITAR**

El señor PRESIDENTE: Comenzamos la sesión con el conocimiento por el Pleno del dictamen de la Comisión de Justicia e Interior en relación con el proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código de Justicia Militar, publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» de fecha 3 de octubre de 1980. El señor Ministro de Defensa tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Rodríguez Sahagún): Señor Presidente, señoras y señores Senadores, una vez más me corresponde el honor y la satisfacción de comparecer ante el Pleno de esta Cámara para presentar a Sus Señorías un proyecto de ley que considero de gran trascendencia e importancia. Me refiero a la ley de reforma parcial —con perdón del Senador Ojeda, que espero que al menos por una vez haga excepción del

disgusto que ayer nos manifestaba en relación con las reformas parciales, en base a los argumentos que voy a tratar de esbozar—, de reforma parcial, digo, del Código de Justicia Militar.

Me explicaré. Cuando me hice cargo del Departamento de Defensa, el Gobierno tenía presentado a las Cortes Generales un proyecto de reforma del Código de Justicia Militar sumamente extenso, amplio, en profundidad, elaborado en cumplimiento de los Pactos de la Moncloa, antes de la aprobación de la Constitución y antes también del envío del proyecto del Código Penal.

Como Ministro, se me presentaba una doble alternativa: o bien escogíamos el seguir adelante con ese proyecto de reforma largo, extenso y profundo, que habría representado en su estudio, tramitación, debate y eventual aprobación un larguísimo período de tiempo, o bien escogíamos reducir esa reforma en los momentos actuales a los aspectos más fundamentales de la misma y, específicamente, al fortalecimiento de las garantías procesales y a cumplir el mandato constitucional establecido en el artículo 117, 5, de nuestra norma fundamental, en el sentido militar, la jurisdicción militar, al ámbito estrictamente castrense, dejando para más adelante la realización de esa gran reforma, la realización de la reforma global del Código de Justicia Militar.

Señorías, la conflictividad que ya entonces existía en estos temas me llevó a presentar al acuerdo de los principales partidos políticos con representación parlamentaria el elegir este segundo camino: reducir la reforma tan sólo a los aspectos fundamentales de la misma, de manera que más adelante se considerara globalmente la reforma del Código de Justicia Militar, en un tratamiento de reposo, en un tratamiento de coordinación con el nuevo Código Penal y tratando de hacer una pieza jurídica a la que dedicáramos todo el tiempo que fuera necesario. Fue un acuerdo de principio que se hizo con los representantes de los respectivos Grupos Parlamentarios, y en esa línea se empezó a trabajar en un marco de flexibilidad. La realidad es que después, y a petición de diversos Grupos Parlamentarios, hemos accedido a introducir toda una serie de variaciones. Pero quiero dejar muy claro que el planteamiento acordado era una

reforma reducida a estos dos aspectos fundamentales, primordialmente preocupados por la conflictividad que pudiera derivarse de los temas de la libertad de expresión.

En esa línea, en lo que se refiere a la libertad de expresión, quiero insistir en que esta reforma avanza sustancialmente en los términos que establece el mandato constitucional, de manera tal que las injurias a los Ejércitos y a las instituciones, a partir de la aprobación de este proyecto, pasan a ser competencia de la jurisdicción ordinaria, salvo en los casos en que el autor de las mismas sea militar o que éstas se produzcan ante el mando, en presencia de sus tropas o en recinto militar.

En esa misma línea de cumplir ese mandato constitucional, en la competencia por razón del delito dejan de ser delito militar los atentados y desacatos a la autoridad militar; los ultrajes y ofensas a la bandera y al himno nacional, salvo que se trate de unidades y edificios militares o éstas tengan lugar con ocasión de desfile o parada militar; la falsificación de documentos militares; los hechos ocurridos con ocasión de suministros a los Ejércitos, salvo que nos encontráramos en tiempos de guerra o estados de sitio; los hechos realizados por el personal civil al servicio de la Administración militar, salvo que afecten al buen régimen y servicio de las Fuerzas Armadas. Y un largo etcétera del que hago gracias a Sus Señorías en aras a la brevedad.

Por razón del lugar, dejan de ser de competencia militar las aguas del mar y el espacio aéreo, salvo que los hechos afecten a la seguridad militar o a la soberanía nacional; incluso los hechos ocurridos en cuarteles y edificios militares sólo tendrán la consideración de tales si afectan efectivamente a la disciplina o buen régimen al servicio de las Fuerzas Armadas.

Por razón de la persona, se amplían sustancialmente las llamadas causas de desacuerdo del artículo 16, hasta el extremo de que los delitos comunes cometidos por militares pasan a ser competencia de la jurisdicción ordinaria, salvo que se dé también la misma circunstancia de que afecten al régimen y disciplina de las Fuerzas Armadas.

En el caso de concurrencia de jurisdicción

nes, la atractiva pasa a ser también de la jurisdicción ordinaria en lugar de la militar, como ocurre en los momentos actuales.

En cuanto al fortalecimiento de garantías procesales, recuerdo a Sus Señorías que en el proyecto se establece la intervención del Juez togado militar en todas las causas militares, que se establece la intervención del Fiscal Jurídico Militar en toda la jurisdicción militar; que se establece asimismo el derecho a designar defensor letrado, incluso en turno de oficio, y desde el momento mismo de la detención.

En cuanto a recursos, se establece la casación, para el caso de sentencias de que impongan penas superiores a tres años o que comporten la exclusión del servicio, y otras muchas cosas que representan que se pueda decir con absoluta claridad que ésta es, sí, una reforma parcial por lo urgente, pero al mismo tiempo una reforma trascendental, por su contenido; sin ninguna duda, la reforma más importante y trascendental de nuestra historia en lo que se refiere a la Justicia Militar.

Decía, Señorías, ayer el Senador Villar Arregui, que a veces hay que elegir entre lo urgente y lo importante y que, a veces, hay que dar prioridad a lo primero. Pues bien, es que yo creo que aquí, además, lo urgente es lo importante, porque lo urgente y lo importante era inmediatamente, oportunamente en el tiempo, dar cumplimiento y adecuar la normativa vigente al mandato constitucional. Lo urgente es lo importante, porque la propia dinámica de los acontecimientos demostró después que la preocupación que el Ministro y todos sentíamos era verdad. Y yo creo, Señorías, que a los acontecimientos no se les puede decir: «Señores, aguantes ustedes sentados, siéntense allí, en la tribuna, mientras nosotros desarrollamos, con toda la pausa necesaria, nuestra tarea, mientras nosotros hacemos una gran pieza jurídica». Y no se les puede decir porque los acontecimientos son tercios, y los acontecimientos son sordos, los acontecimientos se producen y la dinámica de los acontecimientos está ahí; y prueba de que está ahí y de que todos somos conscientes de ella y de la importancia de urgir esta reforma, reduciéndola, por tanto, a los aspectos fundamentales, es que, dentro del Congreso, y a iniciativa del propio Grupo Parla-

mentario del Gobierno y para la eficacia de esta reforma, se dispuso que se diera inmediato traslado, en el momento en que entrara en vigor, de todas las actuaciones pendientes a la Jurisdicción ordinaria, que pasaran a corresponder a ella. Prueba de que la dinámica de los acontecimientos está ahí, Señorías, es que la fina sensibilidad de Sus Señorías ha sabido recogerla y ha establecido la supresión de la «vacatio legis».

Yo creo, Señorías, que quizá, quizá, a la postre, cabe recordar en estos momentos aquella frase que el Cardenal Mazzarino dice al Embajador inglés cuando le pregunta a quién sirve, al servicio de quién está, y el Cardenal le contesta: «Señor, estoy al servicio de los acontecimientos».

Yo creo que hemos acertado en el tratamiento; creo que se ha demostrado una gran flexibilidad al incorporar otras mejoras y creo que podemos tener la garantía de que ahora nos ponemos en el compromiso que asume el Gobierno de elaborar un nuevo proyecto del Código de Justicia Militar en el plazo de un año con la garantía de que, junto a esta reforma parcial, urgente, trascendental e importante, dispondremos de esa pieza jurídica que yo sé que a todas Sus Señorías interesa y que todas Sus Señorías desean; una pieza jurídica de la que, para hacer honor a su compromiso, el Gobierno viene trabajando ya, aun antes de que esta reforma haya sido aprobada, habiendo constituido ya un grupo de trabajo que, dirigido por el General Director de la Escuela de Estudios Jurídicos Militares, viene preparando lo que después va a ser el trabajo de la Comisión y para el que, además, yo voy a ser sincero, espero la colaboración de esta Cámara; un grupo de trabajo destinado a preparar las bases —Dios quiera que la iniciativa del señor Villar Arregui aquí pueda ser recogida—, pero en todo caso, destinado a preparar las bases, no en esta ocasión en el sentido de esa ley de bases, que me parecería fundamental, sino en el sentido de la plataforma, de los cimientos de ese nuevo Código de Justicia Militar, en línea con los más modernos códigos del mundo, y de ahí que estemos considerando distintas alternativas, la posibilidad de si es sólo una ley o si hacemos leyes distintas; en todo caso, separar los aspectos disci-

plinarios, en un Reglamento, de los aspectos penales. Todos sabemos que el Código actual es largo, extenso, a veces su uso se hace difícil y farragoso; quizá convenga hacer leyes distintas, una para la organización y competencia de los Tribunales, otra parte que recoja las leyes penales militares y, finalmente, otra para los aspectos de procedimiento. Digo quizá porque, evidentemente, eso será hablado también con los representantes de los otros Grupos Parlamentarios; pero sí en línea con lo que han hecho los países que más modernamente han tocado la cuestión, como Bélgica, Suiza, Dinamarca, Brasil, que han ido por ese camino. Y todo ello de cara a lograr una elaboración más escalonada de la normativa, de cara a lograr un marco de flexibilidad para ulteriores reformas, porque, no nos engañemos, hay que acomodarse a las necesidades sociales, y van a ser necesarias, por muy gran pieza jurídica que hagamos, nuevas reformas en el futuro. Y de cara, sobre todo, a separar aspectos que son sustancialmente distintos, tanto en lo que se refiere a lo doctrinal como en lo que se refiere a organización. Pero no vamos a prejuzgar cuáles son las decisiones que en el futuro unos y otros adoptemos. Simplemente, Señorías, termino, porque no quiero abusar de su paciencia. Resumiendo: que aquí se pretendió, por acuerdo de los principales partidos políticos con representación parlamentaria, hacer sólo una reforma parcial reducida a los aspectos fundamentales; que aquí esa reforma parcial se ha hecho, y podemos estar muy satisfechos de la misma, ya que resuelve la problemática grave que existe en estos momentos y va a contribuir al buen funcionamiento de las Fuerzas Armadas y de la Justicia Militar en la sociedad democrática que entre todos estamos construyendo. Ha habido una flexibilidad en el tratamiento del tema y se han incorporado muchas modificaciones; pero ya que otras muchas quizá puedan ser recogidas en la elaboración de este nuevo Código, la coherencia debe hacer que nos limitemos y centremos a lo que fue el acuerdo del principio.

Señorías, quiero agradecer sinceramente la colaboración recibida por este Senado en los trabajos, y al mismo tiempo pedir su apoyo para la aprobación inmediata, en esa fina sensibilidad que tienen Sus Señorías, del proyec-

to que hoy se somete a su consideración. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Como es sabido, se han formulado diversos votos particulares a este proyecto de ley. Señor Presidente de la Comisión de Justicia e Interior, tenga la amabilidad de comunicar a la Presidencia si se designó por la Comisión defensor exponente del dictamen.

El señor VILLAR ARREGUI: Sí, señor Presidente, se designó al Senador Martín Villa.

El señor PRESIDENTE: El señor Martín Villa tiene la palabra para esos efectos.

El señor MARTIN VILLA (don Emilio): Con su venia, señor Presidente, Señorías, señores Ministros, cumplo gustoso el honroso encargo de la Comisión de ser, como se debe en este trámite, simple notario de los hechos, para lo que paradójicamente fui designado, cuando resulta que en la Ponencia existían dos Notarios profesionales; sin embargo, a estos efectos se me designó.

Tres tipos de documentos estuvieron sobre la mesa de la Ponencia y de la Comisión: el Código vigente, los documentos traídos por las reformas introducidas por el Congreso de los Diputados y las enmiendas reproducidas y a veces introducidas de nuevo por los Senadores, tanto de los Grupos de la oposición como del Grupo que apoya al Gobierno.

Las palabras del señor Ministro quizá hacen las mías necesariamente breves. La Ponencia tuvo ocasión de compulsar las diferencias existentes entre el Código vigente hasta ahora y las modificaciones introducidas por el Congreso.

Voy a ver si tengo poder de síntesis. En primer lugar, el proyecto enviado por el Gobierno, considerado por el Congreso y estudiado por la Ponencia y por la Comisión, estaba tránsito de lo transitorio. Era una reforma parcial y transitoria, y todos coincidíamos en que no era la reforma que técnicamente convenía, pero sí la que las circunstancias aconsejaban.

Se ha extendido el señor Ministro en consideraciones al respecto y yo me limito a dar las impresiones que la comparación de estos

dos documentos suscitó en la Ponencia y en la Comisión.

Se notaba también, por la comparación de los documentos de trabajo —voy a ir sintetizando— avances en cuanto a la tecnificación de los instrumentos de la Administración de Justicia Militar. Y aquí se ha hecho referencia, también esta mañana, a la introducción de los Jueces togados, de los Fiscales togados, del recurso de casación en determinados supuestos de separación de servicios o cuando las penas superan a tres años en la duración, etc.

Se nota, por último, y sobre todo, que acotaba el proyecto, el documento enviado por el Congreso, de manera sensible y positiva el campo de actuación de la Jurisdicción Militar. Ahí están todas las causas de desafuero, de apartamiento del conocimiento de los Tribunales militares, que se contempla en los supuestos a que se refiere el artículo 16.

Antes esto, ¿qué es lo que la Ponencia y la Comisión hicieron? Noventa y seis enmiendas sumaban las presentadas por esta Cámara; 60 de los distintos Grupos del Partido Socialista; algunas, bastantes, reproducción de las que ya se habían presentado en el Congreso; algunas, las menos, nuevas; cuatro, que fueron admitidas de plano y, después, algunas más.

A las mejoras técnicas e incluso a algunas variaciones sustanciales del proyecto tendían las enmiendas propuestas por el Senador Bosque Hita, las propuestas por el Grupo Parlamentario Centrista y, a título individual, por algunos Senadores centristas.

¿En qué medida las enmiendas han influido sobre el proyecto? Esta es la cuarta consideración que quiero poner ante el conocimiento de Sus Señorías en este relato de los hechos. Hay tres que me parece se deben notar por su importancia. La modificación de los artículos 87 y siguientes, en enmienda transaccional que hemos acordado por ser congruente con la modificación enviada por el Congreso. Se intenta que todos los Fiscales, incluso, y sobre todo, aquellos que lo son del Consejo Supremo de Justicia Militar, tengan el carácter de togados, por dar mayor conocimiento técnico a la figura del Fiscal y justamente por entender que el Ministerio Fiscal, en cualquier jurisdicción, tiene como

prenotando fundamental el de la unidad, la reducción de los dos Fiscales hasta ahora existentes, el Fiscal togado y el Fiscal militar, a un único Fiscal jefe, el Fiscal que representa la unidad del Ministerio Fiscal ante el Consejo de Justicia Militar.

Otra reforma de singular importancia, porque, como conocen Sus Señorías, este proyecto de ley no se refiere solamente a la modificación del Consejo Supremo de Justicia Militar, sino que abarca también a determinados supuestos, por extensión al Código Penal común, al Código sustantivo común, es la nueva redacción del artículo 154 del mismo Código común de penar, en cuanto que venía con una inconsecuencia técnica que ha sido limitada y modificada en Comisión por esta Cámara.

Por último, y dadas las circunstancias, la tercera de las modificaciones que a este Senador le parecen sustanciales, comprendida además, «némine discrepante», por todos los Senadores de todos los Grupos Políticos, dadas las circunstancias, repito, es la supresión de la «vacatio legis», que el Código comience a regir al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Así las cosas, quizá el tercer punto de este relato tiende a explicar el común denominador de las discrepancias. Me explicaré. ¿Qué filosofía impregnaba las enmiendas del Grupo de la oposición, o de los Grupos de la oposición? y ¿qué filosofía acordaba mantener el texto como venía del Congreso, desde el punto de vista del partido que apoyaba al Gobierno?

Había, fundamentalmente, un criterio dispar en cuanto a la competencia para juzgar o administrar justicia, a través de los Tribunales militares. El concepto, y me parece que se ha repetido, del Código hasta ahora vigente, parte de una triple fuente de competencias: por razón del delito; por razón del lugar y por razón de la persona.

El Grupo Socialista mantenía que únicamente por razón del delito valían las competencias para que los Tribunales conociesen. Este es el común denominador de casi todas las primeras enmiendas de los Grupos Socialistas. El Grupo Centrista sostuvo en Ponencia y en Comisión, que no era el momento de abandonar la técnica de delimitación de las

competencias del Código de Justicia Militar, que debía respetarse, y dejarlo para una depuración técnica, dado el carácter provisorio de la reforma, que debería respetar esta triple fuente de competencias. Acotadas, constreñidas, según los términos, sobre todo del artículo 16, en todas sus causas y en algunas más, pero en principio, como era el sistema que mantenía el viejo Código, el Código hasta ahora vigente, debería respetarse, y debería respetarse dada la personalidad y la provisionalidad de la reforma; sostener, por ahora, la misma técnica, para no desmembrar el Código, para que el Código vigente que estábamos examinando parcialmente no se nos cayera como un edificio sin cimientos si le privábamos de su base, si le privábamos de su apoyatura.

Esta fue la discrepancia fundamental que, sobre todo en Ponencia, afloró. Después había algunas enmiendas de aspectos parciales y aspectos reglamentarios.

También quizá existía una diferencia de concepto entre los Grupos de la oposición y el Grupo Centrista. Muchas de las enmiendas de los Grupos de la oposición se basaban en considerar la Justicia Militar no como una jurisdicción especial, sino como una especialidad de la jurisdicción; y de ahí vienen todas aquellas enmiendas que entroncaban o pretendían entroncar al Consejo Supremo de Justicia Militar con el Fiscal del Reino o con el Tribunal Supremo. La filosofía del Grupo Centrista sostenía, por el contrario, que la interpretación auténtica, tanto de la Constitución como del Código en sí, era de verdad la existencia de una jurisdicción especial, no de una especialidad de la jurisdicción. Esto fue motivo de amplios debates y ahí están las enmiendas y ahí están las contestaciones de los ponentes del Grupo Centrista.

Por último, debíamos terminar con lo que empezamos. La reforma es parcial; se nos anuncia en breve el envío a las Cámaras de un nuevo Código de Justicia Militar. Quizá ni siquiera el nombre sea adecuado y a lo mejor alguna meditación, alguna reflexión tenemos que hacer sobre si debiera ser Código de la Jurisdicción Militar, que ya denotaría por dónde debiera ir la reforma, y que esperaran las Cámaras que sea posible tener, por-

que no en vano esta reforma parcial ha carecido del rigor técnico que tendrá la otra.

Hagamos un Código de la Jurisdicción Militar que en su parte sustantiva exprese y describa sólo los supuestos en que verdaderamente ha de incidir la conducta de las personas para tipificar el delito exclusivamente militar, con contornos bien definidos. Hagamos una parte procesal del Código de la Jurisdicción Militar con un sistema flexible de recursos que no excluya lo típico de la jurisdicción militar y que al mismo tiempo fortalezca la garantía de la seguridad jurídica. Excluyamos del Código todos aquellos supuestos reglamentarios que no deben tener el rango de ley o, al menos, el rango de la importancia de esta ley.

Todos éstos son deseos de futuro expresados aquí por el señor Ministro y yo creo que compartidos unánimemente, con la distinta visión que podamos tener de las cosas, pero compartidos unánimemente por la Cámara.

Creo que he terminado la exposición de los hechos. Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias, señores Ministros, muchas gracias, señoras y señores Senadores.

El señor PRESIDENTE: Dentro de lo que podemos llamar propiamente debate de totalidad, procede turno a favor, turno en contra y turno de portavoces que lo soliciten.

Para consumir un turno a favor tiene la palabra el señor Bosque Hita.

El señor BOSQUE HITA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, señores Ministros, muy brevemente voy a consumir un turno a favor que, de alguna manera, también significa unas consideraciones de reparo a algunos aspectos de lo que en estos momentos estamos sometiendo a la consideración de la Cámara.

Creo que se ha hecho una buena labor por parte de las dos Cámaras, especialmente las modificaciones que se han introducido al proyecto por parte de la nuestra, que son sustancialmente importantes. Lamento que se hayan quedado en unos determinados límites exclusivamente, pero creo que hemos dado un paso adelante, porque con esta reforma del Código de Justicia Militar hemos obtenido el instrumento preciso para resolver pro-

blemas graves que en estos momentos de alguna manera están alterando la opinión pública e incluso a algunos medios de comunicación en relación con una serie de delitos que hasta el momento legalmente caían dentro del ámbito de la jurisdicción militar y como tales, legalmente, estaban siendo juzgados de manera adecuada, pero que de alguna manera en la nueva situación española se hacía necesario una nueva reconsideración de situaciones y posiciones.

Los pasos que en este aspecto se han dado, la urgencia con que se ha pretendido obtener el documento legal suficiente como para poder dar un tratamiento adecuado a estos problemas, creo que tiene que congratularnos a todos, y esta es la razón fundamental por la cual, en este momento, he querido utilizar el turno a favor, porque realmente hay que estar a favor de cuanto significa lo que hemos hecho.

No utilicé el turno de portavoces porque me parecía que lo importante en estos momentos es que todos estemos, de alguna manera, centrados en el apoyo al documento que va a regir, por un período breve —creemos todos—, la administración de la justicia militar. Pero sí tengo que hacer algunas consideraciones de reserva, que no van a significar más que mi voto en contra en el momento preciso en los artículos correspondientes y no otra cosa, porque con la totalidad del contenido del documento estoy absolutamente de acuerdo.

Creo que es importante que se diga por qué si la reforma era parcial, para hacer frente a unas necesidades inmediatas, hemos dado pasos más importantes que éstos, hemos dado pasos significativos en otros aspectos, lo cual puede ser incluso hasta una apertura de camino hacia lo que ha de ser el nuevo Código de Justicia Militar, lo que ha de ser ese texto que en ese plazo indicado nos ha de llegar, también, para que sea tratado por las Cámaras. En este aspecto, entiendo que tengo razones por las cuales manifestar alguna disconformidad con escasas partes del contenido del documento.

Ha habido en las palabras del representante de la Comisión un «lapsus», porque, efectivamente, se trató el problema al que ha hecho alusión, pero realmente no se ha

contenido después en el dictamen de la Comisión. Por tanto, la reforma que él anunciaba —siento corregir las palabras del señor Martín Villa— no es real, no se ha recogido. La desaparición de la fiscalía militar no se ha producido, por lo menos no viene en ningún documento presentado ante esta Cámara. El dictamen de la Comisión dice perfectamente que se conservan los dos Fiscales, y que el Fiscal militar y el Fiscal togado tienen sus competencias correspondientes. En este sentido, no se ha recogido ningún otro documento distinto. Tengo entre mis papeles un acuerdo de todos los Grupos Parlamentarios, por el cual se modifica un error que se había producido —yo creo que no era error— en el texto del artículo 87, y no tengo conocimiento de que se haya elaborado ningún otro documento por la totalidad de los portavoces de los Grupos Parlamentarios. Por tanto, estimo que el dictamen de la Comisión, tal y como está redactado, es válido.

Las observaciones que yo quería hacer al contenido del proyecto son las siguientes. En primer lugar, parece que, al haber rebasado la pura contemplación de los aspectos que en estos momentos el Código de Justicia Militar presentaba como conflictivos ante la opinión pública, y haberse dado pasos más importantes en este aspecto, podían haberse dado algunos que hubieran mejorado sustancialmente esta reforma, a mi modo de ver. El primero de ellos es que el reparto entre Ejércitos hubiera sido un reparto más adecuado por las circunstancias de modernidad que estamos viviendo en estos momentos. Y el Código de Justicia Militar fue redactado en unos momentos en que había una preponderancia importante de un Ejército sobre los otros.

El segundo de ellos es que, puesto que hemos llegado a dar pasos tan importantes, como es el de establecer el recurso de casación y algunas otras funciones que van a reforzar el trabajo de los Consejeros togados del Consejo Supremo de Justicia, lógicamente debía haberse ampliado el número de Consejeros togados. Porque seis Consejeros togados para hacer frente a las nuevas necesidades de esta institución, el Consejo Supremo de Justicia, parece ser que son escasos. Quizá sea por la brevedad de tiempo en que han de

funcionar, puesto que en este plazo de un año vamos a tener un nuevo Código.

La tercera de las observaciones, que me preocupa personalmente, es la de que se haya hecho desaparecer, y no en el proyecto inicial, sino a lo largo de enmiendas, nada más y nada menos que el procedimiento de urgencia por el cual se juzgaban los delitos flagrantes que, además, podían dañar gravemente la disciplina y la moral de las Fuerzas Armadas.

Estas son preocupaciones que yo quiero dejar sobre la mesa y en las cuales, al llegar al punto correspondiente, personalmente daré mi voto en contra al proyecto.

En lo demás estoy a favor por completo y me congratulo a mí mismo por haber colaborado, de alguna manera, a hacer posible este documento que se presenta hoy a la consideración de la Cámara.

El señor PRESIDENTE: En turno de portavoces, en primer lugar, corresponde oír al Senador Nadal Company, por el Grupo Parlamentario Catalunya, Democracia i Socialisme.

El señor NADAL COMPANYY: Señoras y señores Senadores, me voy a permitir un breve exordio en gracia a la agilización del tema y con el fin de no entrar en futuras polémicas sobre aspectos de la cuestión, que pueden quedar planteados desde este momento, con el fin de fijar posiciones.

El ciudadano Bonaparte —no sé si siendo General o siendo Cónsul vitalicio—, solía decir que el soldado es primero ciudadano y luego militar. Esto era en los tiempos heroicos del puente de Arcole. Más tarde, naturalmente, en el Imperio, Austerlitz, Jena, etcétera, los grandes triunfos imperiales hicieron olvidar al genial Emperador aquel arranque democrático de enraizamiento entre pueblo y ejército. Es que en aquellos tiempos aún sonaban en los oídos los ruidos del tambor de Valmy. Aquellas tropas harapientas habían humillado a los más arrogantes militares, a los más brillantes ejércitos de las monarquías europeas.

De esto se deduce una extraordinaria enseñanza: un ejército es fuerte, es importante, en tanto tenga el soporte popular. Ejército y pueblo deben formar una entrañable

unidad, una compenetración absoluta porque, en definitiva, el ejército recoge del pueblo su propia fuerza y afirma su razón de ser. Esto es así; éste es el espíritu militar; éste es el auténtico espíritu militar, cuando el espíritu militar supone patriotismo y servicio al país que defiende.

Nosotros hemos escuchado con muchísima atención al Ministro del Ejército. Nos han parecido muy importantes sus palabras. Hemos tomado muy en cuenta su intención. El Código Civil dice que la buena fe se presume, la mala fe hay que probarla. En términos castrenses, el valor se supone.

Esta extraordinaria intención, este valor que caracteriza el empeño de Su Señoría al introducir en esta reforma lo necesario para ponerla al día, verdaderamente es de agradecer, como también es de agradecer nuestra aportación, porque es una aportación sincera. Nosotros lo que queremos es que este Ejército viva el pueblo y el pueblo viva el Ejército. Por consiguiente, a través de nuestras sucesivas intervenciones en ningún momento se debe interpretar un larvado antimilitarismo o una subyacente aversión a la institución militar. Todo lo contrario. En la vida moderna, en la vida futura, desgraciadamente, las guerras no digo que se ganen, pero sí que suelen perderse en la retaguardia, de suerte que una desconexión entre vanguardia y retaguardia supone el hundimiento de los países. De ahí que el interés de las fuerzas beligerantes en las últimas competiciones europeas (hablo en plan bélico), se haya centrado sobre las retaguardias. El castigo constante de las retaguardias, no solamente en los objetivos militares, sino en los objetivos civiles, es precisamente para desmoralizar estas retaguardias, para cansar estas retaguardias, para desconectarlas de las fuerzas combatientes.

No hace falta ser un experto militar para llegar a esta conclusión. Yo he pensado muchas veces que tres o cuatro meses o una temporada de parapeto enseñan muchísimo. Esto se lo dije a un militar una vez y me dio la razón. Y es que es así. Hoy día las guerras, los problemas militares, los vivimos todos. Han pasado ya esos tiempos heroicos de las lejanas guerras, de las guerras coloniales. Desgraciadamente, son otros tiempos.

Por esto, yo quisiera que quedara bien entendido que en nosotros no hay el menor ánimo de molestar en lo más mínimo, de irritar en lo más mínimo la institución. Nosotros lo que queremos es desacralizar el tema; nosotros lo que queremos es normalizar el tema, tratar el tema con la misma normalidad con que se tratan todos los temas.

Defiende la patria, no hay duda, el Ejército; se defiende la patria en una cátedra; también se defiende la patria en una humilde escuela de pueblo o en un quirófano. En todos los lugares se defiende la patria. Por consiguiente, el monopolio de la defensa de la patria no es un monopolio del Ejército, es un monopolio de todos.

Hechas estas aclaraciones, creo que podemos entrar en el tema relajados y sin ninguna preocupación (nuestra intención es ésta), por si molestamos. Nosotros vamos a tratar el tema con toda normalidad. Esa es la forma espontánea que caracteriza a los demócratas y a la democracia.

Entonces, entrando ya en el tema, el ilustre jurista que ha defendido la ley nos ha dicho que todo esto que nosotros queremos introducir podrá ser objeto de estudio y de incorporación cuando se promulgue el nuevo Código de Justicia Militar, y nos dice que esto va a ser en un plazo máximo de un año. Yo, ayer, al amigo Porta le dije que me gustaba mucho su optimismo. Me gusta mucho su optimismo y ojala sea así. Pero, por si nos equivocamos, nosotros queremos aprovechar la oportunidad para salvar una serie de baches que la ley presenta y para introducir algunas de estas modificaciones, ya que, en definitiva, esta oportunidad la han aprovechado Sus Señorías en el Congreso y en el Senado, y también el señor Bosque Hita, que ahora ha defendido la ley.

Por consiguiente, no deben ustedes entender que en esto hay obstaculización. En esto hay una necesidad de clarificación, sobre todo, en temas muy particulares, como son los temas de competencia, que quedan de una manera muy confusa. Estos temas merecen clarificación, porque si no clarificamos ahora los temas de las competencias, se van a producir una serie de *d e s e n c a n t o s* respecto de esta reforma que van a crear un clamor popular que a nosotros, representantes de las

clases populares, nos va a ser muy difícil mantener en la necesaria quietud.

Pensemos que entre los Pactos de la Moncloa y la Constitución medió un tiempo, pero es que la Constitución ha declarado una serie de derechos, y estos derechos declarados en la Constitución no quedan recogidos en la reforma. Nuestra intención ha sido introducir en esta reforma los textos derivados de la Constitución, con el fin de sincronizar la reforma a la Constitución, y que, en ningún caso, alguien pueda decir: «Pero si la Constitución me da estos derechos, ¿cómo es que ahora me encuentro en conflicto con una jurisdicción, con la jurisdicción militar, conflicto que se decía en la Constitución que quedaba resuelto de esta o de la otra manera?»

Esto, señores, es importante, y por esto nosotros hemos tratado de introducir una serie de modificaciones que voy a tratar luego con la más extraordinaria sobriedad —porque creo que lo más importante está dicho ahora—, y mis compañeros lo complementarán. Sin embargo, no quiero extenderme en el tema; que sirva este exordio para mis futuras intervenciones, a las que, como he dicho antes, procuraré imprimir la máxima sobriedad y brevedad, en gracia a todos ustedes y al cansancio que ello pueda suponer para nuestros ilustres representantes del Gobierno ante el Senado, el señor Ministro de Defensa (esta vez le cito correctamente) y el ilustre militar que está entre nosotros.

El señor PRESIDENTE: El señor Ministro de Defensa tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Rodríguez Sahagún): Señor Presidente, señoras y señores Senadores, muy brevemente para agradecer las manifestaciones explícitas que el Senador Nadal ha hecho en relación con conceptos ya expuestos reiteradamente aquí por el Ministro de que la Defensa no es sólo cosa de militares, sino que nos concierne a todos los españoles. Agradecer esas expresiones y manifestaciones de sentimiento patriótico, que todos compartimos, y aclarar que en ningún momento, por parte del Ministro ni por parte de ninguno de los otros intervinientes, se ha puesto en duda la intencionalidad, ni se ha hecho ninguna referencia

en este planteamiento a obstruccionismo. Creo que es todo lo contrario; he agradecido expresamente la colaboración que he recibido en las dos Cámaras.

He dicho que se ha llevado adelante este proyecto en ese planteamiento. He querido dejar claro que quedaba reducida la reforma a los aspectos fundamentales: fortalecimiento de las garantías procesales y cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 117 de la Constitución; que ha habido, sin embargo, un marco de flexibilidad, por el cual se han incorporado otras modificaciones, pero parecía que lo coherente era dejar la mayor parte de esas posibles modificaciones para el momento de la elaboración de la pieza global, del nuevo Código de Justicia Militar.

Mi intervención —esto también es la introducción— es simplemente para una cosa: ni el Ministro ni el señor Martín Villa han dicho que en ese nuevo Código quedarán recogidas todas las modificaciones; ni mucho menos. Algunas no serán recogidas jamás, y ahí está lo bueno, porque diferimos en algunos criterios. Hemos dicho, tanto el Senador Martín Villa como el Ministro, que el lugar para contemplar algunas de esas modificaciones será el nuevo Código.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista Andaluz tiene la palabra el señor Ojeda.

El señor OJEDA ESCOBAR: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, voy a empezar planteando una cuestión que yo llamaría de orden u observación, si el Presidente me lo permite, porque es un hecho que se produjo ayer, se ha vuelto a producir hoy y lamento que en estos momentos no esté en la sala el señor Martín Villa, porque esta observación, en parte, le afecta.

Me refiero, concretamente, a que los miembros de la Comisión que son designados para presentar el proyecto de ley deben ser, como ha dicho el señor Martín Villa, notarios, fedatarios que expongan los hechos, que den fe del «iter» legislativo que ha seguido el proyecto de ley en esta Cámara, pero, por favor (por lo menos ésa es mi opinión y creo que es concordante con una instrucción o norma

interpretativa del Presidente de la Cámara), no se puede entrar en la filosofía, porque en ese caso los Grupos de la oposición siempre estaríamos en franca minoría, ya que la norma o la regla general es que los presentadores de los proyectos de ley sean siempre miembros del Grupo mayoritario en esta Cámara, sobre la prima que ya tienen de ser los últimos en hablar —consecuencia lógica de ser el Grupo mayoritario—, se les daría una nueva ventaja.

Pero esta observación, o esta cuestión de orden, no implica ni puede suponer, por supuesto, y SS. SS. me conocen, una declaración de guerra ni que se rompa el clima de cordialidad dentro del mantenimiento de las posiciones legítimas que un Grupo y otro mantienen respecto a este proyecto de ley e incluso respecto a cuestiones de política general. Creo que la razón del Parlamento está precisamente en eso, en utilizar la dialéctica de las palabras, en utilizar argumentaciones y razonamientos para tratar de convencer al adversario y sacar conclusiones lúcidas.

El proyecto de ley que hoy se somete a nuestra consideración creo que es un proyecto de ley importante, que es un proyecto de ley de gran trascendencia en estos momentos. Mantengo la discrepancia manifestada ayer respecto a la Ley de Delitos Menos Graves, Dolosos y Flagrantes, y aun admitiendo que no sea la vía más acertada, reconozco con el señor Ministro que a veces los acontecimientos y los hechos se precipitan y hacen que tengamos que ir a remolque de los acontecimientos.

Quisiera recordar al señor Ministro, aunque en aquella ocasión él no era responsable, que este proyecto de ley que hoy debatimos es consecuencia nada más y nada menos que de los Pactos de la Moncloa. Me interesa resaltar y destacar que su origen está en los Pactos de la Moncloa, y los Pactos de la Moncloa se acordaron entre el 8 y el 27 de octubre del año 1977. Concretamente, el punto VII de los Acuerdos sobre el programa de actuación jurídica y política dice: «Código de Justicia Militar. Reconsideración de sus límites en relación con la competencia de la jurisdicción militar.» Primero, por razón de delito; y se desarrollan. En segundo lugar, por

razón del lugar. Por razón de la persona. Cuarto, sometimiento a los Tribunales ordinarios de las Fuerzas de Orden Público, cuando actúen en el mantenimiento del mismo. Y quinto, fortalecimiento de las garantías procesales y de defensa en los procedimientos de la jurisdicción militar.

Entonces se adoptó este acuerdo, y en noviembre, creo recordar, el 15 de noviembre de 1978, en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Congreso, se publica, con una exposición de motivos —hoy desaparecida—, el proyecto presentado por el Gobierno. Por tanto, si los hechos y los acontecimientos nos han cogido un tanto desprevenidos, no es por culpa del Partido Socialista, no es por culpa de la oposición, sino por culpa del Gobierno, del Partido del Gobierno, que es quien debe promocionar e incentivar la marcha de los proyectos de ley verdaderamente importantes. Incluso más, porque a finales del año pasado este proyecto de ley creo que entró en Comisión y se ha retrasado bastante en lo que va de año.

Consecuencia de los Pactos de la Moncloa, como he dicho, es la reforma parcial y provisional del Código de Justicia Militar. El 15 de noviembre de 1978, como digo, se publica el proyecto de ley y su exposición de motivos, que me interesa destacar porque ahí se perfila, se define el sentido de la reforma. La exposición de motivos dice: «Se acomete la tarea de modificar aspectos concretos de la normativa del sistema procesal y sustantivo del Código de Justicia Militar, dejando la revisión general del mismo para fecha posterior y una vez que el proceso constitucional y legal de su consecuencia determine la necesidad de su planteamiento».

Esta necesidad de reformar el Código de Justicia Militar era evidente, era indiscutible; nadie lo ha puesto en duda. El Código de Justicia Militar vigente es de 17 de julio de 1945 y entonces lo que se hizo fue una refundición del antiguo Código de Justicia Militar de 1890, del Código Penal de la Marina de Guerra de 1888 y de una serie de disposiciones procesales que completan estos Códigos sustantivos.

Pero del 15 de noviembre de 1978 hasta que se empezó a ver este proyecto de ley en el Congreso, han ocurrido hechos trascenden-

tales en este país. Yo diría, desde un punto de vista legal o desde un punto de vista jurídico, que el más importante ha sido la aprobación de la Constitución, donde claramente, en el artículo 117, 5, al establecer la unidad de jurisdicción, se exceptúa la jurisdicción militar para el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio.

Por ello es lógico y natural que, aun sabiendo y admitiendo una reforma parcial, la oposición, el Partido Socialista, pretendiera adaptar y adecuar ese proyecto inicial, presentado por el Gobierno cuando aún no se había aprobado la Constitución, para tratar de adaptarlo al texto fundamental que hoy nos rige.

El debate en el Congreso tuvo su interés, tuvo su importancia porque si bien en un primer momento parecía que la orientación del Gobierno y del partido que lo sustenta iba, por decirlo así, hacia unos criterios conservadores, a lo largo del debate de esta ley en el Parlamento hubo ciertas modificaciones. Reconozco que algunas de las mejoras, algunas de las ventajas que trae esta ley han sido explicitadas por el señor Ministro, pero también hay que decir y hay que reconocer, señor Ministro, que los socialistas en el Congreso mejoraron el texto. En primer lugar, gracias a la intervención y a la petición de los socialistas, se consideró esta ley como orgánica (y ayer insistía también, con ocasión de otra ley, en que el artículo 81, 1, exige que cuando los proyectos de ley afectan a los derechos o libertades fundamentales tengan carácter orgánico). Se consiguió la supresión de las consecuencias de la Ley de Jurisdicción; la defensa por Letrado en ejercicio, cosa que ha dicho el señor Ministro; la profesionalización y tecnificación de los Jueces; introducción de mayores garantías sustantivas y procesales; supresión eventual de la pena de muerte en juicio sumarísimo en tiempo de paz. No digo que todas estas mejoras o ventajas que tenga la ley hayan sido exclusivas de los socialistas, pero algunas aportaciones sustanciales que mejoran el texto han sido aportaciones socialistas y por eso el Partido Socialista, en la votación de conjunto en el Congreso, votó a favor de esta Ley Orgánica.

La posición del Partido Socialista en el Senado es clara. Como ha dicho el señor Martín Villa, hemos reproducido enmiendas que se habían presentado en el Congreso; otras —no tan pocas, creo que más de diez— son nuevas, para mejorar el texto aquí en el Senado, porque creo que la misión de esta Cámara, que muchos Senadores, sobre todo de los bancos de la derecha, tratan de enaltecer y tratan de profundizar, es, en efecto, realizar una segunda lectura y mejorar, en la medida de lo posible, los textos legales que nos vienen remitidos del Congreso, para conseguir la mejor ley posible. De ahí el sentido y la finalidad de las enmiendas socialistas. En efecto, nuestras enmiendas, nuestro enfoque de la ley, difiere totalmente, en cuanto a su filosofía, de la filosofía que mantiene UCD, y es lógico que sea así, porque somos dos partidos que tenemos dos orientaciones, dos concepciones de la política y de las consecuencias de la política completamente distintas.

Nosotros entendemos, de acuerdo con el mandato del artículo 117, 5, de la Constitución, que la jurisdicción militar debe limitarse, única y exclusivamente, al ámbito castrense y a los supuestos del estado de sitio, con arreglo a lo que establezca una Ley Orgánica, como dice la Constitución. Para nosotros esto es una cuestión vital, la hemos planteado en esta revisión parcial y provisional del Código de Justicia Militar y lo seguiremos manteniendo cuando se nos presente ese Código de Justicia Militar nuevo que nos ha prometido el señor Ministro.

No quiero insistir en una idea que ha expuesto con meridiana claridad mi compañero señor Nadal, en el sentido de que, por favor, no se vea en nuestras enmiendas antimilitarismo larvado, oposición a las Fuerzas Armadas ni siquiera, como pudiera pensarse por algún Senador, anticlericalismo. Queremos cumplir a rajatabla el mandato de la Constitución en todos sus aspectos. Creo que la Constitución debe influir en las leyes orgánicas y en las leyes ordinarias, que las Cámaras, en desarrollo de la misma, puedan ir dictando.

Por eso, y para terminar, me gustaría emplazar al señor Ministro, en la medida de lo posible, para que, en efecto, dentro del plazo que se establece en este mismo proyecto de

ley, y puesto que la Comisión ya está elaborando un nuevo proyecto de Código de Justicia Militar, ese Código nuevo pueda entrar en las Cámaras.

El Código vigente se mejora en algunos aspectos muy concretos, muy determinados, con esta revisión parcial, pero sigue siendo un Código casuístico, un Código absurdo, un Código reglamentarista, un Código que es difícil de manejar, incluso para los mismos juristas, porque fue fruto de una refundición y es necesario ponerlo al día.

Yo incluso sugeriría al señor Ministro, aunque él también lo ha hecho, que el Derecho Comparado militar en estos momentos, en algunos países, como por ejemplo Brasil, se orienta en el sentido de regular por separado los tres aspectos que contiene el Código de Justicia Militar; es decir, parte orgánica, parte sustantiva y parte procesal. Habría que ver la posibilidad, incluso para facilitar el trabajo en las Cámaras, de que fuesen leyes completamente distintas —en Brasil se ha hecho así—, leyes que sean concretas, que se ciñan estrictamente a lo que es materia de una ley y dejan al Reglamento, sobre todo en materia procesal y orgánica, aquellas cuestiones que pueden ser objeto de ese Reglamento, porque el Código de Justicia Militar adolece de una gran confusión y profusión.

Además, hay que tener en cuenta que en el Congreso está ya el Código Penal Común, y el Código de Justicia Militar tiene que ir en estrecha conexión, íntimamente ligado, estrechamente unido con el Código Penal ordinario. En el Código Penal ordinario es donde se definen los tipos de delitos de Derecho común y el Código de Justicia Militar introducirá aquellas matizaciones, porque desde luego nosotros, los socialistas, seguimos manteniendo que el único criterio para determinar la competencia debe ser por razón del delito, y debe desaparecer la determinación de la competencia por razón del lugar y por razón de las personas. Creo que así interpretamos correctamente el mandato del artículo 117, 5, aunque comprendo que al ser el mandato un tanto no diría ni vago ni ambiguo, sino interpretable, como el ámbito estrictamente castrense puede admitir diversas interpretaciones, y según he dicho antes, tenemos distintas ideas y distintas concepciones

nes, me imagino que ése va a ser el caballo de batalla, pero desde luego, señor Ministro, los socialistas siempre estamos abiertos, siempre queremos mejorar las leyes, conseguir buenas leyes, para que el Gobierno de UCD no se encuentre en situación de «im-passe».

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Rodríguez Sahagún): Señor Presidente, señoras y señores Senadores, perdón por esta aparente labor de marcaje del Ministro, pero es que, aparte de congratularme al ver cómo asimila con rapidez el Senador Ojeda algunas de las iniciativas del Ministro y las hace suyas, lo cual siempre es una satisfacción; aparte de eso, desearía referirme a algunos puntos de mi intervención anterior. Dice el Senador Ojeda que este proyecto de reforma tiene su origen en los Pactos de la Moncloa. Por supuesto, ya lo he dicho yo. Había un proyecto de reforma del Código de Justicia Militar elaborado en cumplimiento de los Pactos de la Moncloa. Dice que se presentó en 1978, prueba de la eficacia de la iniciativa del Gobierno en la materia de que se trata, porque se hizo una labor amplia y profunda en un período suficientemente rápido.

Después, lo que ya no dice el Senador Ojeda es que se disolvieron las Cámaras, hubo luego nuevas elecciones generales y municipales, se formó un nuevo Gobierno y hubo unas vacaciones de las Cámaras. Dice que el Gobierno no previó los acontecimientos; los acontecimientos los previó el Gobierno, los previó en ese proyecto, y los acontecimientos lo que sí hicieron después fue precipitarse. Eso todos lo sabemos. Pero además dice que la Comisión empezó sus trabajos en una determinada fecha. Que no se terminó antes. Que si era urgente. Tengo constancia, y hago la gracia de ponerlo a disposición del Senador, de las numerosas referencias periodísticas que demuestran que hasta con su presencia el Ministro ha estado urgiendo los trabajos en el Congreso y que, precisamente, la razón de que no se terminara antes es que a pesar de que existiera ese acuerdo de principio, a que he hecho referencia, de reducir

esta reforma sólo a aspectos fundamentales, algunos Grupos Parlamentarios desearon e insistieron reiteradamente en los planteamientos de nuevas modificaciones.

He dicho también que en el marco de flexibilidad que ha existido y preside nuestros trabajos hubo, por parte de nuestro Grupo, la aceptación de muchas de esas modificaciones, y creo —insisto de nuevo— que lejos de hablar de antimilitarismo, he dicho todo lo contrario; he reconocido que ésta ha sido una tarea de todos, y he agradecido públicamente la colaboración del Congreso y del Senado. Además, creo que eso es lo que justifica el trabajo nuestro: la mejora de las leyes.

En cuanto a emplazar al señor Ministro, tenga la completa seguridad, señor Ojeda, de que el Ministro acepta todos los retos que se le hacen cuando son, sobre todo, retos previamente asumidos. Tendrán las Cámaras nuevo Código de Justicia Militar en el plazo de un año.

Y finalmente, Senador Ojeda, me alegro de que le parezca bien la idea del Ministro de las tres leyes, porque eso quiere decir que vamos por buen camino y que cuento con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista del Senado para el momento en que definitivamente se opte por ese camino, para que esas tres leyes que se presenten tengan una factura semejante a lo que han hecho otros países, que antes he mencionado, como Suiza, Dinamarca, Bélgica, Brasil, etc., que han elegido ese mismo camino.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Irizar, por el Grupo Parlamentario Socialista.

El señor IRIZAR ORTEGA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores; el señor Ministro de Defensa, en su primera intervención esta mañana, al presentar esta ley, nos ha dicho que se encontraba el Gobierno con dos posibilidades, con dos vías, ante esta reforma del Código de Justicia Militar. Una vía, la de entrar en profundidad a reformar todos y cada uno de los artículos del Código, en definitiva, construir un nuevo Código de Justicia Militar, y otra vía —por la que, según el señor Ministro, se ha optado—, la de ir a reformar aquello que, recogiendo las palabras

del Senador Villar Arregui en la tarde de ayer, era urgente e importante.

También se ha dicho que, según acuerdo de principio entre los más importantes Grupos Parlamentarios, se escogió esta segunda vía de ir a reformar aquello que es urgente e importante.

Nosotros, evidentemente, estamos de acuerdo con que en el momento presente no procedía —puesto que el trabajo parlamentario es mucho y la urgencia es grande en la reforma del Código de Justicia Militar— ir a reformar un Código entero en todos sus artículos, ir a hacer un Código de Justicia Militar, puesto que, posiblemente, en esta legislatura no se hubiese terminado la redacción de este Código. Pero en lo que no podemos estar de acuerdo es en que en esta reforma se haya tocado precisamente todo aquello que es urgente e importante. Evidentemente, los Grupos Socialistas del Congreso dieron su voto favorable a la reforma del Código de Justicia Militar, puesto que, al tratarse de una Ley Orgánica, era casi imprescindible este voto favorable, y, precisamente, dieron su voto favorable en razón a que, desde luego, en esta reforma del Código de Justicia Militar se han introducido importantes aspectos, urgentísimos aspectos, que realmente era necesario introducir.

No tenemos ningún reparo en reconocer esto, porque, además, nuestra intervención en el Congreso ha sido importante también para que estos aspectos se introdujeran en el Código, y gracias a esta reforma se han conseguido mejoras que pueden ser trascendentales en la vida social de los próximos años. Evidentemente, la supresión de la Ley de Jurisdicciones, la oportunidad de la defensa de Letrados en ejercicio, la garantía de asistencia del Letrado desde el primer momento, con otras garantías procesales; la supresión del ritual de la pena de muerte, la supresión de los juicios sumarísimos en tiempos de paz y la unidad interpretativa por tener acceso hasta el Tribunal Supremo, así como otras cosas, son importantes consecuciones, importantes mejoras, en el Código de Justicia Militar.

Pero lo que no podemos hacer, ante esta reforma del Código que se ha presentado por el Gobierno al Parlamento, es seguir manteniendo al espíritu de este proyecto de ley, que

no es el espíritu, a nuestro entender, de la Constitución, sino el espíritu derivado de los Pactos de la Moncloa. Creo que si este proyecto de ley se hubiera visto en el Parlamento cuando entró y no se hubiese producido la disolución de las Cámaras, sin duda alguna hubiese sido mucho más fácil el tránsito por las Cámaras. Pero, como se ha dicho aquí, después de que este proyecto de ley fue redactado, se produjo un hecho trascendental, un hecho importante, que fue la aprobación de la Constitución.

Así pues, lo urgente e importante, como se ha venido diciendo, no es solamente adaptar este Código de Justicia Militar a lo que entonces se pactó en los Acuerdos de la Moncloa, sino a lo que la Constitución, en su artículo 117, 5, nos expresa.

Nosotros creemos que faltan muchas cosas importantes que reformar en el Código de Justicia Militar, y que se debían de haber acometido con esta reforma, para adaptar el Código a lo que la Constitución prevé. Nuestras enmiendas persiguen, desde luego, ese fin. Persiguen, en definitiva, que el Código de Justicia Militar, en sus aspectos más esenciales, se adapte plenamente a lo que el artículo 117, 5, de la Constitución, dice sobre la Jurisdicción Militar; Jurisdicción Militar que, de la interpretación correcta de la Constitución, no es sino una Jurisdicción especial y residual, pero que aparece consagrada dentro de este mismo artículo 117, 5, de la Constitución: la unidad de Jurisdicciones.

Y ya esta reforma del Código, y esto es una posición que nosotros consideramos muy positiva, se acerca en las resoluciones, en la interpretación, puesto que se introduce el principio del recurso de casación ante el Tribunal Supremo. No así —no ha sido aceptada nuestra enmienda, no entendemos por qué; en su momento la defenderemos— de una situación similar respecto al Ministerio Fiscal, que el Ministerio Fiscal pueda recibir instrucciones del Fiscal General del Estado. Y en esta línea de adaptación a la Constitución van nuestras enmiendas y hemos solicitado en ellas —que no han pasado en el Congreso y que algunas esperemos, sin embargo, que aquí, en el Senado, tengan mejor fortuna—, por ejemplo (por citar algunas de las más importantes), una reforma a fondo del Consejo

Supremo de Justicia Militar, la ya citada de que el Fiscal del Consejo Supremo de Justicia Militar reciba instrucciones del Fiscal General del Estado; el que todos los Fiscales deban ser Licenciados en Derecho, así como que todos los Jueces deban ser Jueces togados, y el limitar la Jurisdicción Militar al ámbito estrictamente castrense, recogiendo literalmente la frase del artículo 117, 5, de la Constitución.

Para eso, creemos que todavía debían haberse delimitado mucho más de lo que este proyecto de ley hace los límites de aplicación del Código de Justicia Militar. Debían haberse limitado, puesto que todavía continúan los funcionarios civiles y obreros de las fábricas de armas dentro del ámbito de la Jurisdicción Militar, todavía continúa la Marina Mercante dentro del ámbito de la Justicia militar y todavía continúa ese artículo 194, que refiriéndose a delitos puramente civiles, siguen enjuiciados por los militares. Todo esto es lo que nosotros queríamos haber sacado.

También, en otro tipo de cosas, queríamos haber eliminado el procedimiento gubernativo y reducirlo a sus circunstancias más imprescindibles, y también tenemos presentada una enmienda, por qué no, para la supresión de los Tribunales de Honor.

Nosotros, quiero insistir en esto, no estamos planteando aquí una reforma total del Código de Justicia Militar, lo que sí estamos solicitando, y estamos pidiendo en nuestras enmiendas, es que el Código de Justicia Militar aproveche esta reforma para adecuarse totalmente, en sus aspectos urgentes e importantes, vuelvo a repetir, a la Constitución, y no que quede en esta reforma, que, a nuestro modo de ver, no entra y no llega al espíritu que la propia Constitución delimitaba para la Jurisdicción Militar; aunque sí entendemos y valoramos positivamente que se ha hecho un esfuerzo y que es un paso adelante, y por eso nuestro voto en el Congreso de los Diputados fue globalmente positivo. Y si aquí, en el Senado, hubiese un voto global, que no lo hay, entonces también votaríamos positivamente el proyecto en su conjunto, pese a que nos veamos obligados, si no se aceptan nuestras enmiendas, a votar negativamente artículo por artículo muchos de los de este proyecto de ley,

El señor PRESIDENTE: El señor Ministro tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Rodríguez Sahagún): Señoras y señores Senadores, les prometo que luego trataré de hacer el mínimo uso de la palabra. Insisto en excusarme, pero es que me parece fundamental dejar claro un punto central.

No era el Gobierno sólo el que tenía esa doble alternativa. El Gobierno había presentado ya un proyecto de reforma sumamente extenso sobre este caso. Era la sociedad y quienes representamos legítimamente al pueblo los que teníamos esa doble alternativa.

Me voy a permitir ofrecer algunos textos de Prensa, que pueden ser debidamente corroborados por Sus Señorías en el momento que les parezca oportuno:

El 19 de febrero de este año, el diario «El País» decía, recogiendo fuentes socialistas, que, «ante la amplitud de la reforma, que en principio habría abarcado a 200 artículos, y ante la urgencia de los problemas que se estaban presentando, la Ponencia (del Congreso) acordó reducir, por el momento, la adecuación del Código de Justicia Militar a lo establecido en el artículo 117, 5, de la Constitución y a los Pactos de la Moncloa». Pues bien, Señorías, quedaba el resto para una posterior reforma.

Yo afirmo que se cumple esto con la presente reforma. Se cumple el mandato del artículo 117, apartado 5, de la Constitución, y los Pactos de la Moncloa.

El 30 de marzo, en unas declaraciones de un Diputado socialista, cuyo nombre no menciona, pero que yo podría confirmar luego de quién se trataba, que recoge el «Mundo Obrero», se reconoce la importancia sustancial de los avances que representa este proyecto de ley y se habla de la necesidad de concluir inmediatamente los trabajos por lo que se ha reducido la extensión de la reforma.

El 16 de enero, en «La Vanguardia», otro Diputado socialista dice: «Lo que se va a reformar es sólo lo urgentísimo y dejaremos el resto para el nuevo Código de Justicia Militar».

Sin embargo, tengo que decir que en la práctica, a pesar de estas afirmaciones reiteradas, ha habido numerosos intentos de modi-

ficación y ha habido también una gran flexibilidad, y eso es lo que ha alargado nuestros trabajos.

El Ministro, aun convencido de la urgencia de terminar cuanto antes con esta situación transitoria, de la que se derivaba una conflictividad, planteó también una opción antes del verano, cuando el proyecto fue remitido a este Senado: si pedir la tramitación por el procedimiento de urgencia o no, y a pesar de la urgencia que tendría, por respeto a esta Cámara, renunció a pedir la tramitación por el procedimiento de urgencia, pero la fina sensibilidad de esta Cámara ha hecho una tramitación «de facto» urgente, aunque no hubiera sido de procedimiento planteada.

Señorías, no estamos discutiendo si la reforma es todo lo que podía haber sido o no. Lo único que yo afirmo, una vez más, es que la reforma, parcial, por supuesto, ha cumplido el acuerdo de principio de tocar los aspectos fundamentales y, en concreto, de atender a lo establecido por los Pactos de la Moncloa y de atender a lo establecido por el mandato constitucional en el artículo 117, 5.

El señor PRESIDENTE: El senador Villar Arregui, por el Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático, tiene la palabra.

El señor VILLAR ARREGUI: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, decían los clásicos que todo derecho está constituido por causa de los hombres. Tal vez la sensibilidad de los constituyentes a esa expresión, heredada del viejo Derecho Romano, condujo a las Cortes de la anterior legislatura a emplazar en el artículo 8.º de la Constitución una referencia a las Fuerzas Armadas.

¿Fue fruto del azar? ¿No hubiera sido, con un criterio racional y sistemático, más coherente, haber llevado el tratamiento de las Fuerzas Armadas al Título de la Constitución que se ocupa del Gobierno y de la Administración del Estado?

Ahí está el precepto constitucional, con un emplazamiento privilegiado. Pero la Constitución, por otra parte, desdeña cualquier privilegio. Consiguientemente, la especificidad en el tratamiento de las Fuerzas Armadas, a las que se defiende la misión de defender la soberanía nacional, la integridad del territo-

rio y la propia Constitución, no obedece a un privilegio, sino al reconocimiento explícito del pueblo, representado por las Cortes Constituyentes, de la misión trascendental de las Fuerzas Armadas, de su singularidad, de su especialidad.

Cuando la Constitución se ocupa de regular el título atinente a las prerrogativas de la Corona, dentro de un régimen de Monarquía parlamentaria, confiere al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Y cuando la Constitución, en fin, aborda la vieja polémica sobre la unidad jurisdiccional, que había sido una de las banderas asumidas con mayor vehemencia, oportuna e importunamente invocada por quienes desde el exilio político interior durante el pasado régimen creíamos que sólo un sistema democrático podría conferir a la sociedad española la suficiente estabilidad, el artículo 117 abre una excepción respecto de la Jurisdicción militar.

El tema de la unidad jurisdiccional ha sido una lenta conquista de la civilización, fundada en los principios democráticos. En principio, toda jurisdicción era jurisdicción retenida o, si se quiere, jurisdicción delegada; se ejercía en nombre del Rey, había órganos especializados para el ejercicio de una función judicial, pero no había, como hay en nuestra Constitución, un Poder Judicial, y tampoco es un azar que la Constitución reserve el nombre de Poder al Judicial, en tanto que ni dice de estas Cámaras que sean el Poder Legislativo, ni, siguiendo con fidelidad la famosa trilogía de Montesquieu, atribuye el nombre de Ejecutivo al Gobierno y a la Administración del Estado.

Pues bien, la independencia del Poder Judicial, como garantía para la defensa de los derechos y de las libertades de los ciudadanos, tiene una excepción constitucional en el artículo 117, 5, al deferir a la Jurisdicción Militar no el carácter de una especialidad en el orden jurisdiccional, no el carácter de un orden jurisdiccional distinto, como puede ser el orden jurisdiccional civil, el orden jurisdiccional penal, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo o el orden jurisdiccional social, sino una jurisdicción especial, una jurisdicción retenida.

Una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista postulaba que la designación de los

miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar se hiciera mediante Reales Decretos. Estamos, pues, en presencia de una jurisdicción retenida, en coherencia con la configuración constitucional de las Fuerzas Armadas, con la Jefatura Suprema que respecto de ellas ejerce la Corona, y tratamos ahora de dar importante y urgente cumplimiento, al propio tiempo, al precepto constitucional que dice que esa jurisdicción especial ha de reducirse al ámbito estrictamente castrense. Ello nos conduce a una interpretación apresurada, no por impensada, sino porque ha de ser necesariamente expuesta con brevedad, de qué sea el ámbito estrictamente castrense y de qué sea no sólo desde la lucidez gramatical del diccionario, sino también desde la sensibilidad de los hombres que forman el conjunto de las Fuerzas Armadas.

Si al comienzo de esta intervención evocaba el viejo adagio latino «omne ius hominum causa constitutum est», lo hacía pensando tanto en el grupo que componen nuestras Fuerzas e Instituciones Armadas, cuanto en todo el pueblo español. Pero a ese grupo, que en el artículo 8.º de la Constitución ha recibido un tratamiento diferenciado, hay que conferirle, en coherencia con ello, también un tratamiento diferenciado.

Señores, el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución no es un principio absoluto y tiene que haber desigualdades e incluso situaciones jurídicas diferenciadas, siempre que ello obedezca a causas razonables. Ninguno de los aquí presentes piensa que se trata de un privilegio, sino más bien de una prerrogativa, el gozar de fuero especial para el caso de que incurra en la comisión de un delito, y en eso cualquier Senador o Diputado se diferencia de cualquier ciudadano que no tenga un mandato popular. La igualdad, pues, no es predicable como atributo absoluto, y las desigualdades o situaciones jurídicas diferenciadas, que existen, han de obedecer, siempre, a criterios razonables.

¿Qué es, pues, el ámbito estrictamente castrense desde la sensibilidad de los hombres que constituyen las Fuerzas Armadas y aun desde una mera interpretación gramatical? Me parece obvio que el ámbito, como área dentro de la que se ejerce la jurisdicción, puede ser acotado con base en los hechos ti-

pificados como delito, con base en los lugares donde los delitos se cometen, con base, en fin, en la índole de las personas que cometen esos delitos. Y aquí, en mi opinión, la reforma del artículo 6.º del Código de Justicia Militar ha recibido un tratamiento armónico, equilibrado, sereno, que recoge las más ambiciosas pretensiones, de las que fueron o fuimos portavoces, oportuna e importunamente, desde la década de los años 50, los que entendíamos que esa jurisdicción retenida, que esa jurisdicción especial, debía quedar reducida al ámbito de lo estrictamente castrense. Pero, como decía antes, para interpretar qué sea el ámbito estrictamente castrense, hay que hacer también una llamada a la específica sensibilidad del militar, del miembro de las Fuerzas Armadas; no es lo mismo ser militar que ser funcionario de la Administración Civil del Estado. Ser militar responde a una vocación de servicio, con una especificidad tan característica —vocación de la que yo me siento muy lejano, pero respeto profundamente a los hombres que la asumen y que la sienten—, que pienso que es función de estas Cámaras, en cuanto representan al pueblo, no sólo poner sus ojos en el conjunto del pueblo, sino también en aquellas minorías del pueblo que la Constitución ha hecho que reciban un tratamiento jurídicamente diferenciado.

Es verdad que lo propio de la democracia es que el Gobierno sea asumido por quien obtenga la mayoría en la vía de la representación, a través del sufragio popular, pero la última piedra de toque de la sensibilidad democrática no está tanto en el ejercicio, que puede ser totalitario o autoritario, de una mayoría que impone sus criterios, sin apertura flexible y permeable a las razones que vengan de otros grupos, cuanto en el estricto respeto a las minorías, con arreglo al modo y a la forma en que esas minorías reclaman ser respetadas.

Pido, pues, que, al examinar en concreto la nueva redacción que recibe el más polémico y, a mi juicio, el más progresivo artículo de la reforma, el artículo 6.º del Código de Justicia Militar, se tenga en cuenta esta especial sensibilidad castrense, que puede servir como módulo, como parámetro, para la definición del sentido último de la norma cons-

titucional, que exige que la jurisdicción especial militar reduzca su actuación jurisdiccional a ese ámbito estrictamente castrense.

Estamos viviendo, es tópico decirlo desde esta tribuna, un momento de ruptura con lo peor de la historia española. La Ley de Jurisdicciones de 1906 fue causa de no pocas de las situaciones por las que, tal vez, hubiera sido mejor que la historia española no transitará, pero aquí hemos de asumir la historia entera, y hemos de rectificar aquellos puntos, aquellas encrucijadas, en que la legalidad o las situaciones de hecho han colocado a nuestro pueblo para hacer menos viable, menos armónica, menos posible, menos respetuosa, la recíproca convivencia al servicio de unos valores morales.

Nuestra Constitución no es una Constitución positivista, es una Constitución que, desde el Derecho positivo que incorpora y desde la eficacia normativa inmediata de gran parte de sus preceptos, proclama que sirve a unos valores metapositivos. ¿Se les ha ocurrido pensar a Sus Señorías que sería posible un recurso de inconstitucionalidad contra una ley porque una ley es injusta? Pienso que sí. El recurso de inconstitucionalidad se puede plantear siempre que un texto normativo con rango de ley vulnere el principio constitucional, y cuando la Constitución proclama que ha de servir al ordenamiento jurídico y los poderes públicos, el valor de la justicia, entre otros, pienso que la injusticia de una ley puede dar origen a ese recurso de inconstitucionalidad. Pero la injusticia se comete allí donde se hiere el legítimo derecho de que es portador el hombre. El hombre que, en definitiva, es la «ratio» última, a cuyo servicio están todos los poderes públicos, la razón última de la promoción del poder, de acuerdo con la feliz redacción del artículo 9.º, 2, de nuestra Constitución.

Creo que este proyecto sale al paso de necesidades reales sentidas por el pueblo, sale al paso de problemas reales y arbitra soluciones reales, resolviendo, en suma, problemas, sin crear otros problemas mayores. Este proyecto, en fin, responde a esas necesidades desde una virtud política poco usual entre nosotros, la virtud de la prudencia política, de la que en esta Cámara todos los Grupos vienen dando tan altas, tan cimeras, muestras.

El señor PRESIDENTE: Corresponde entrar seguidamente en el debate del articulado del dictamen. Permítanme SS. SS. recordarles que en lo que pudiéramos llamar debate sobre la totalidad del proyecto de ley y del dictamen de la Comisión hemos empleado más de hora y media. Por supuesto, ha sido un debate que, en mi opinión, ha revestido gran altura en todas sus intervenciones, pero nos queda una ardua tarea que desarrollar a lo largo del día. La Presidencia en absoluto pretende limitar el derecho que reglamentariamente corresponde a todos los intervinientes, pero sí creo que estoy en mi deber, y quizá me lo agradezcan muchos de los Senadores presentes, de recordarles que debemos terminar este debate en el día de hoy. Por consiguiente, tras este pequeño recordatorio, entramos seguidamente, digo, en el debate del articulado del dictamen.

El encabezamiento del artículo 1.º y el texto propuesto para el artículo 2.º no han sido objeto de votos particulares. Si no hay inconveniente, pues, como es costumbre, se considerarán en su conjunto, y la Presidencia somete a la Cámara su aprobación por asentimiento. (*Asentimiento.*) Así se declara. Queda aprobado por asentimiento el encabezamiento del artículo 1.º y el texto propuesto para el artículo 2.º del Código de Justicia Militar.

Entramos en el texto propuesto para el artículo 6.º del Código de Justicia Militar, al que se han formulado cinco votos particulares, que pretenden su introducción y la modificación del texto del dictamen, y un sexto voto particular más, que postula la adición de un nuevo apartado.

Voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 1, que afecta al número 1 de este artículo. Como portavoz del Grupo Socialista, defensor del voto particular, tiene la palabra el Senador Irizar

El señor IRIZAR ORTEGA: Si la Presidencia lo estima oportuno, en aras de la brevedad solicitada, defendería conjuntamente las enmiendas números 1, 2 y 4, todas las del Grupo Socialista referentes a este artículo 6.º

El señor PRESIDENTE: Enmiendas números 1, 2 y 4. Tres votos particulares. ¿Algu-

Encabezamiento del artículo 1.º y 2.º del Código

Artículo 6.º del Código

na objeción por parte del Grupo de Unión de Centro Democrático? (Pausa.) En el plazo de quince minutos puede defender los tres votos particulares. Tiene la palabra el Senador Irizar.

El señor IRIZAR ORTEGA: Señor Presidente, Señorías, el Grupo Socialista del Senado mantiene tres votos particulares al artículo 6.º Primero, propone que el número 1 de dicho artículo quede redactado exclusivamente por la primera frase; es decir, después del encabezamiento, que dice: «Por razón de delito, la jurisdicción militar conocerá de los procedimientos que se instruyan por cualquier persona», aquí viene el número 1, que sería: «Por los delitos comprendidos en este Código...».

Evidentemente, nos encontramos con que el número 1 del artículo 6.º del proyecto de ley que hoy debatimos hace, a continuación de esta referencia a los delitos comprendidos en este Código —que, por supuesto, es totalmente necesaria—, otra que se refiere al artículo 194 del propio Código de Justicia Militar, artículo que ha sido enmendado por el Grupo Socialista, que propone su supresión, y que más tarde veremos, y hace también una referencia a lo que las leyes especiales atribuyan a la jurisdicción militar.

Nosotros pensamos que el Código de Justicia Militar solamente puede juzgar por razón del delito aquellos delitos que estén comprendidos en este Código, sin más, sin hacer especificaciones y sin hacer ningún tipo de relación. Decimos esto porque cualquier relación, cualquier tipo de relación de delitos, cualquier enumeración de los delitos que el propio Código de Justicia Militar contiene puede dar lugar a introducir delitos que realmente no sean militares, como en definitiva viene a ocurrir aquí, o dejar fuera ciertos tipos, y tampoco tiene ningún sentido, si se hace la enumeración, dejar fuera alguno de los delitos que sí deben estar comprendidos dentro del Código de Justicia Militar.

La alusión al artículo 194 es, desde luego, desafortunada, puesto que se trata de aludir aquí, en un artículo en el que se nos viene a decir cuál es la competencia de la jurisdicción militar por razón del delito, a otro artículo del propio Código de Justicia Militar

que no trata de delitos militares, que hace una relación de delitos cometidos por los militares, pero que son delitos exclusivamente civiles y sobre los que mantiene este proyecto la competencia de la jurisdicción militar, competencia que nosotros rechazamos por entender que la Justicia Militar no debe, en modo alguno, juzgar a los militares cuando cometan delitos comunes. El artículo 191 a que se refiere este artículo 6.º en el número 1, cuyo voto particular para la supresión de esta referencia estamos defendiendo, nos dice que serán siempre juzgados con relación a las reglas de este Código, es decir, el Código de Justicia Militar, una serie de delitos como el asesinato, homicidio, robo, etc., cuando estuvieren en acto de servicio delitos que, en definitiva, son delitos comunes, aunque cometidos por militares.

Si estamos hablando de un proyecto de ley que lo que trata es de reducir el ámbito de la jurisdicción militar al estrictamente castrense, en modo alguno pensamos que pueden, dentro de este ámbito estrictamente castrense, juzgarse a los militares cuando estén cometiendo delitos de naturaleza común, de naturaleza como la de los demás ciudadanos, aunque sean militares. Hay un principio general, a nuestro modo de ver, del ámbito estrictamente castrense, y es que efectivamente no puede someterse ni aplicarse el Código de Justicia Militar a las personas que pertenecen a los Cuerpos armados cuando cometen actos o delitos de tipo común.

Pero es que hay más. El propio número 1 extiende el ámbito —puesto que el mismo Código después, en otros artículos, amplía la definición de militar— no solamente a aquellos militares que pertenezcan a los Cuerpos activos, a los Cuerpos que se hallen en situación de actividad, sino que amplía el campo de la aplicación, por esta vía del Código de Justicia Militar, a los funcionarios civiles al servicio de las fábricas de armas o a los militares retirados y no en activo, con lo cual el ámbito de la jurisdicción militar para delitos comunes se amplía excesivamente y, a nuestro modo de ver, es una introducción innecesaria dentro de este proyecto de ley.

Un segundo inciso (dentro de esta primera enmienda que estamos defendiendo; las otras dos serán muy breves) establece la po-

sibilidad de que leyes especiales atribuyan delitos a la jurisdicción militar. Realmente, si aquí tratamos de marcar los límites de la jurisdicción militar, de reducirlos, puesto que es una jurisdicción residual y reducida, según establece el artículo 117, 5, de la Constitución, no podemos pensar en modo alguno que leyes especiales puedan atribuir delitos a la jurisdicción militar. Aquí, en este Código, en esta Ley Orgánica, tienen que estar todos y cada uno de los delitos que sean atribuibles a la jurisdicción militar, y en ningún sitio más. No podemos dejar la puerta abierta para que leyes especiales, cuyo rango no se dice (es decir, leyes especiales que pudieran ser de un rango inferior a la Ley Orgánica, como puede ser la reforma del Código), vayan concediendo a la jurisdicción militar nuevas atribuciones. Es muy peligroso dejar abierta esta puerta, puesto que no sabemos a qué se refiere, y si aquí enmarcamos la jurisdicción militar, está cerrado el campo y no debe ampliarse absolutamente nada más. Esta es la razón de nuestro voto particular número 1.

También, y a este mismo artículo 6.º, proponemos, en otro voto particular, la supresión del número 2, que dice que la jurisdicción militar también será de aplicación por razón del delito para los que «adulteren víveres y todos los demás cometidos por contratistas y proveedores de cualquier suministro para los Ejércitos, perpetrados con ocasión del mismo en tiempos de guerra y en estado de sitio».

La solicitud de supresión de este artículo tiene unas razones más bien de carácter técnico. El propio Código de Justicia Militar, en el artículo 405, que también aparece reformado en el proyecto de Reforma del Código de Justicia Militar que estamos en este momento estudiando, establece una redacción similar y casi literal a la de este artículo que establece este delito. Evidentemente, es un delito típico de la jurisdicción militar, en tiempo de guerra, la adulteración de víveres, y no hacemos ninguna oposición a que este delito sea juzgado por la jurisdicción militar. Lo que sí nos parece que es asistemático es introducir este delito en una redacción del artículo 6.º, cuando ya aparece especificado en otro artículo del Código de Justicia Militar,

concretamente en el 405. Si este artículo se introduce aquí, se podrían introducir todos y cada uno de los delitos del Código e irlos enumerando en el artículo 6.º Por una razón de sistemática jurídica solicitamos también la supresión.

Quizá la razón de que se introduzca aquí es una: que el número 5 del artículo primitivo del Código introducía este delito, olvidando que entonces sí tenía razón de ser, en la sistemática primitiva del Código. Decimos esto porque el número 5 del artículo 6.º del Código vigente hasta este momento lo que nos decía en general era que estará sometido a la jurisdicción militar la adulteración de víveres y los suministros para los Ejércitos. Ahora bien, luego venía el artículo 405 a diferenciar dos tipos de penas y dos tipos de delitos, en definitiva, distintos: uno, cuando se cometieran en estado de guerra, y otro, cuando se cometieran en tiempos de paz. Entonces sí tenía sentido que aquí se hiciera una enumeración genérica del delito y que después, en el artículo 405 del Código vigente, se hiciera la diferenciación del delito cometido en tiempos de guerra al cometido en tiempos de paz. Pero como hoy nos encontramos con que el artículo 405 ha sido reformado en este mismo proyecto (no hay ningún voto particular al mismo y es de suponer que sea aprobado por esta Cámara dentro de unos momentos), resulta que en este artículo se establece ya un solo delito, que es el delito de la adulteración de víveres exclusivamente en tiempos de guerra, no teniendo sentido, desde una sistemática jurídica lógica, enumerarlo aquí, puesto que entonces podríamos enumerar todo el resto de los delitos en el artículo 6.º Esta es la única razón por la que nosotros hemos presentado esta enmienda, que no tiene características de fondo.

El que sí las tiene es el voto particular que se corresponde con la enmienda número 4, en que venimos a pedir que en los números 4 y 7 del artículo 6.º de la reforma que estamos estudiando se introduzca una frase que atribuya estos delitos, que son los de incendio de edificios militares, daños, robo, hurto y receptación de armas, por un lado, y los que sean desobediencia a órdenes para la seguridad o policía de la navegación marítima o vuelo y que hayan sido adoptadas por la

autoridad militar de un puerto, etc., por otro lado, que sean atribuidos exclusivamente a la jurisdicción militar cuando se cometan en estado de guerra o de sitio. Aquí sí es una enmienda de fondo. Sí entendemos que el incendio de edificios militares en tiempos de paz es, en definitiva, un delito atribuible a la jurisdicción ordinaria, que, en definitiva, estamos nuevamente ante delitos comunes atribuibles a la jurisdicción ordinaria en tiempos de paz, en cambio, en tiempos de guerra deben ser atribuidos a la jurisdicción militar.

Con este mismo artículo podemos hacer un simple juego y ver qué razón lógica existe para que la adulteración de víveres, que puede causar la muerte de la tropa y de los soldados, lo que es muy grave, sea atribuible en tiempos de paz a la jurisdicción civil y en tiempos de guerra a la jurisdicción militar, y, sin embargo, el incendio de un edificio militar sea atribuible en tiempos de guerra y en tiempos de paz a la jurisdicción militar. ¿Es que es más grave quemar un cuartel que adulterar los víveres, con lo cual pueden morir los soldados o causarles un perjuicio personal?

Realmente, no comprendemos la diferencia ni entendemos la sistemática jurídica de los redactores del proyecto, que nos ha llevado a que en el número 2 la adulteración de víveres en tiempos de paz esté atribuida a la jurisdicción ordinaria y, sin embargo, el incendio de edificios militares en tiempos de paz esté atribuido a la jurisdicción militar. Si comparamos los números, vemos que los dos son delitos muy graves, evidentemente; pero si uno está atribuido en tiempos de paz a la jurisdicción ordinaria, también el otro, en tiempos de paz, debe estar atribuido a dicha jurisdicción. Nada tenemos que oponer, porque nos parece lógico, a que en tiempos de guerra ambos delitos estén atribuidos a la jurisdicción militar. Nada más.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turnos en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.)

El Senador Ojeda, por el Grupo Socialista Andaluz, tiene la palabra para fijar la posición de su Grupo en orden a los números 1, 2, 4 y 7 del artículo 6.º

El señor OJEDA ESCOBAR: Señor Presidente, Señorías, voy a ser muy breve. En primer lugar, porque creo que la posición de los distintos Grupos ha quedado perfectamente delimitada en las intervenciones que sus diferentes portavoces han hecho a la totalidad del proyecto. Por tanto, reiterar criterios e insistir en posiciones creo que puede llevar únicamente a alargar en exceso el debate y a cansar a SS. SS. Pero no puedo renunciar al turno de portavoces en apoyo de mi compañero e insistir en alguno de los criterios de las argumentaciones que él ha expuesto.

Efectivamente, tal como aparece organizada la jurisdicción militar en el Código vigente, son tres los principios rectores para determinar las competencias de esta jurisdicción: por razón del delito, por razón de la persona y por razón del lugar.

Estamos tratando de un artículo donde se determina la competencia por razón del delito, y encontramos serias objeciones a los números 1, 4 y 7, aparte de pedir la supresión del número 2, por estar ya contemplado en otro precepto de este mismo proyecto. De no prosperar nuestra enmienda, creo que se corre un doble peligro: en primer lugar, extender en exceso la jurisdicción militar a ámbitos que le son extraños, y en segundo lugar, mantener la redacción del precepto tal como figura en el proyecto puede incidir — insisto en una circunstancia, y es que el proyecto es anterior a la Constitución en su presentación a las Cortes Generales — en el artículo 117, 5 de la Constitución e incluso en el artículo 37 de la Ley Orgánica de Criterios para la Defensa.

Por eso nosotros mantenemos el apoyo a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y anunciamos que votaremos a favor de ellas.

El señor PRESIDENTE: El señor Sánchez Torres, por el Grupo Parlamentario de UCD, tiene la palabra.

El señor SANCHEZ TORRES: Señor Presidente, Señorías, señores Ministros, vemos cómo desde el comienzo del debate del articulado empiezan a plantearse las dos ideas distintas que con respecto a esta reforma parcial, limitada, del Código de Justicia Militar

tenemos los distintos grupos políticos. En efecto, como decía hace unos momentos el Senador Ojeda, el concepto que ellos tienen en cuanto a en qué ámbito debe actuar la Jurisdicción Militar, es el que se determina porque sólo será competente por razón de la naturaleza del delito. Por razón del lugar, se rechaza también la competencia de la Jurisdicción Militar y única y exclusivamente se admite la posible competencia de la misma en estado de guerra o en estado de sitio, y se rechaza asimismo la posibilidad de que la Jurisdicción Militar sea competente por razón de la persona.

Naturalmente, nuestra postura no es ésta. Nosotros estimamos, en primer lugar, que, al encontrarnos ante una tricotomía competencial, es decir, ante tres elementos que determinan la competencia de la Jurisdicción Militar, acompañados por un artículo 16, en el cual se producen supuestos de desajuste, en el viejo texto actualmente vigente que estamos reformando del Código de Justicia Militar, al encontrarnos con ese sistema, tenemos necesariamente que mantenerlos, con el fin de no producir un desajuste en toda esta reforma parcial del Código de Justicia Militar que estamos planteando.

Además, establecemos simplemente limitaciones a la Jurisdicción, limitaciones importantes, y estas limitaciones son las que se derivan de la vía del servicio. Es decir, nosotros entendemos que el ámbito estrictamente castrense se ve vulnerado por la vía del servicio; esto es, en la medida en que éste resulte afectado por la comisión de un delito, en esa medida tendrá que conocer la Jurisdicción castrense. Por eso, en la reforma se hace referencia constantemente a esa idea, a través de la frase de que afecten al buen régimen y servicio de las Fuerzas Armadas. Esta es, en definitiva, nuestra proposición.

También el Senador Ojeda nos ha dicho antes que la frase constitucional de reducción al ámbito estrictamente castrense es —yo he creído entenderlo así— susceptible de interpretación. Indudablemente, los juristas interpretamos todo, pero lo que sí está claro es que mi Grupo está totalmente decidido a que esa Constitución se respete en sus estrictos términos, en cualquier interpretación que se haga de ella, y procura, intenta, quiere some-

terse, como es lógico, a esa constitución, como todos los grupos de la Cámara. Esto no quiere decir que no puedan existir opiniones jurídicas diversas y que puedan ser respetables.

Entrando ya en las enmiendas que han sido planteadas por el señor Irizar, me voy a referir, en primer lugar, por su orden, a la primera. Si he hecho esta introducción ha sido porque la argumentación que se ha utilizado para defender las enmiendas es, en definitiva, la que se deviene de lo que acabo de expresar.

En primer lugar, se dice que debe reducirse el número 1 del artículo 6.º a la simple redacción de «por los delitos comprendidos en este Código». Indudablemente, se ha dado una serie de razones, que a mí me satisface que las haya dado el señor Irizar, porque las razones que se apuntaban en las enmiendas, hoy convertidas en votos particulares, naturalmente no eran éstas. En la primera enmienda se decía que la alusión al artículo 194 era totalmente innecesaria, porque ese artículo estaba ya en el Código y, por tanto, no había que mencionarlo. Véase lo que dice la justificación de la enmienda. Luego, en el voto particular número 48, del mismo Grupo, se pedía la supresión del artículo 194, lo cual no se señalaba en la primera enmienda, ya que era —se decía— porque estaba en el Código, mientras que en la segunda enmienda se quitaba del mismo. Pero ya digo que el Senador Irizar ha dado los argumentos necesarios para justificar que, desde su punto de vista, el artículo 194 no deba estar en el Código de Justicia Militar.

Nosotros, sin embargo, entrando en este tema, pensamos que estos delitos son, a nuestro juicio, militares; es decir, estrictamente militares, porque son cometidos por militares en situaciones militares, o cuando están representando a las Fuerzas Armadas por acto de servicio. Y en la medida en que son realizados por un militar en acto de servicio y afectan al ámbito castrense, deben someterse a la Jurisdicción Militar. Baste, señores Senadores, leer someramente algunos de los ejemplos que establece el artículo 194, para, a mi juicio, y respetando cualquier opinión contraria, llegar a esa conclusión.

No se puede argumentar que estos artículos están situados dentro del Código Penal, por-

que indudablemente estos delitos, en abstracto, efectivamente están situados dentro del Código Penal, pero cuando se tiñen con estos elementos de que se realicen por un militar en situación militar se produce, a nuestro juicio, una conversión de esos delitos en delitos militares, y por eso precisamente el artículo 6.º, número 1, formalmente señala y especifica que se incluye el artículo 194, y queremos señalar ya de una manera formal que el artículo 194 constituye un conjunto de delitos por razón de la naturaleza de los mismos, y, por tanto, son todos delitos militares. Por ejemplo, señala que «serán juzgados con sujeción a las reglas de este Código y castigados con la pena que tuvieren señalada en el penal ordinario, impuesta en su grado máximo o con el grado mínimo o medio de la inmediata superior, los delitos cometidos por militares, con las circunstancias que a continuación se expresan y no previstos especialmente en esta ley:

1.º El asesinato, homicidio y lesiones ejecutadas en acto de servicio o con ocasión de él o en cuartel, campamento, buque, aeronave, fortaleza u otro cualquier edificio o establecimiento de los Ejércitos, en casa de Oficial o en la que el culpable estuviere alojado, si la víctima fuere el dueño o alguno de su familia o servidumbre.

2.º El robo, hurto, estafa, apropiación indebida, amenaza con exigencia de cantidad o imponiendo otra condición, incendio y daños cometidos en iguales circunstancias o lugares y en caso de vivandero o proveedor de los Ejércitos, si aquél fuera el perjudicado.

3.º La violación de una mujer abusando de la ventaja u ocasión que proporcionen los actos de servicio.

4.º La malversación de caudales o efectos de los Ejércitos, falsificación o infidelidad en la custodia de los documentos de los mismos, fraudes al Estado por razón de cargo o comisión de suministros, contratos, ajustes o liquidación de efectos o haberes. La falsificación de documentos militares se entenderá equiparada a la de documentos públicos.

5.º La acusación o denuncia falsa, el falso testimonio, la prevaricación y el cohecho cometido en procedimiento militar».

Nosotros entendemos que todas estas situaciones en que se producen estos delitos, pro-

ducidos por militares, implica el que este artículo 194 afecte a lo que entendemos estrictamente ámbito castrense y por eso defendemos que así se mantenga.

Por último, se ha hecho una referencia a esas legislaciones especiales que dice que no se menciona cuál es el rango que pueda tener. Yo quisiera decirle que los límites serán siempre los límites estrictamente castrenses y el rango tendrá que ser, necesariamente, el que de esos límites se derive.

Con respecto a este voto particular que propone la supresión del número 2 del artículo 6.º, la argumentación es que se encuentra ya recogido en el artículo 405 la figura de este delito. Quiero señalar dos cosas. Primera, que en la reforma de este precepto de que habla la Jurisdicción Militar sólo es para tiempo de guerra y estado de sitio y que, sin embargo, actualmente era competente para todo tiempo. Luego, ya tenemos ahí una mejora fundamental y una restricción establecida. Pero nosotros, además, estimamos que este número 2 del artículo 6.º lo que hace es una simple atribución general de competencias, y que el artículo 405 tiene algunos tipos, pero no todos, a los que se refiere el número 2 del artículo 406.

Por último, en cuanto al voto particular número 4, en el que se propone añadir al artículo 6.º, en los párrafos 4 y 7, la frase «en caso de guerra o estado de sitio», la postura del Partido Socialista es considerar, como ha dicho el señor Irizar con toda claridad, que estos delitos son comunes, y que, por tanto, deben pasar a la Jurisdicción ordinaria en caso de tiempo de paz.

Nosotros estimamos que estos delitos afectan al ámbito estrictamente castrense, como de la propia lectura del artículo se deduce, ya que, por ejemplo, el párrafo 4, del artículo 6.º, señala que serán delitos de esta clase los producidos por «incendio de edificios militares, daños, robo, hurto y receptación de armas, municiones y material de guerra», y en idéntico sentido se pronuncia el párrafo 7 de este mismo artículo 6.º

Por eso, nosotros estimamos que estos delitos así cometidos afectan a ese ámbito estrictamente castrense, al buen régimen y servicio de las Fuerzas Armadas y bajo esta conceptualización jurídica que nosotros hacemos de

lo que se entiende por ámbito castrense es por lo que pensamos que debe mantenerse el texto de la Comisión. Como se ve, en definitiva, lo que se produce es la materialización de las ideas que se han ido exponiendo a través de los portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios. Es decir, una distinta concepción de lo que se entiende por ámbito estrictamente castrense entre uno y otro grupo político.

Señor Presidente, Señorías, por las razones expuestas, nosotros votaremos en contra de los votos formulados por el Partido Socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Catalunya, Democracia i Socialisme, en relación con la enmienda número 3 y relativa al número 3.º del mismo artículo, tiene reservado un voto particular, así como en relación con la enmienda número 7 tiene otro voto particular, que postula la introducción del nuevo apartado, que sería el 8 bis.

El señor Nadal tiene la palabra, como portavoz del Grupo Parlamentario.

El señor NADAL COMPANYY: Señor Presidente, voy a defenderlos por separado.

El señor PRESIDENTE: Entonces defenderá el voto particular correspondiente a la enmienda número 3, por la que postula la supresión del número 3 del artículo 6.º

El señor NADAL COMPANYY: Señoras y señores Senadores, yo soy tan extraordinariamente respetuoso con el señor Presidente, tan respetuoso, que este respeto se confunde en plena obediencia, de suerte que como el señor Presidente nos ha pedido que agilizáramos en lo posible estos trámites, yo le prometo que, desde luego, no me va a apuntar números rojos y sí, por el contrario, muchos números negros.

En mi primera intervención, ya al principio, anunciaba que esta reforma creaba una extraordinaria confusión en muchos aspectos de su articulado, que era contraria a la Constitución en muchos aspectos de su articulado, y que, sobre todo, creaba problemas de competencia. En mi primera intervención ya observé estos defectos de una manera clarísima.

Según este número 3, todas las personas que se encuentran en una instalación militar prestando servicios, que no son militares, quedan sujetos a la Jurisdicción Militar, «siempre que afecten el buen régimen y servicio de las Fuerzas Armadas». ¿Cuándo van a afectar al buen régimen y servicio de las Fuerzas Armadas y cuándo no van a afectar? ¿Quién lo determina? En la Jurisdicción ordinaria, cuando se plantea un problema de competencia, hay un Tribunal superior que resuelve esta competencia, pero aquí resueltamente el problema queda adjudicado a la propia Jurisdicción Militar, sin que aparezca o se deduzca del texto la posibilidad de discutir la competencia. Por consiguiente, todas estas personas que se encuentran en una instalación militar prestando servicios múltiples, muchos de ellos simples obreros, incluso mujeres de limpieza o algunas personas que se encuentren eventualmente prestando algún que otro servicio, pueden quedar perfectamente comprendidas en la Jurisdicción Militar, porque ese servicio no ha sido del gusto del maestro armero, porque se le haya hecho mal servicio, o porque, sencillamente, al encargo de los suministros no le haya parecido bien el suministro. Entonces, la cuestión se complica: se puede organizar entre los dos interlocutores un diálogo más o menos violento, y, a partir de ese momento, por cualquier razón o manera de entender esta cuestión, quedan absorbidos por la Jurisdicción Militar.

Esto, Señorías, está, por otra parte, en contradicción con el número 1 del artículo 13, al que nosotros, desde luego, hemos presentado también enmiendas.

No he querido introducirlos en esta intervención, para no crear nuevas confusiones, y entiendo que, al defenderlos por separado, resultan más comprensibles.

Por consiguiente, señores, entendemos que este número 3 no contiene ninguna finalidad, porque no afecta a la disciplina interna de los Cuerpos armados, a las necesidades propias de los Cuerpos armados para conseguir una disciplina, necesaria a su propio funcionamiento. Estos son servicios al margen. Absorber estos servicios dentro de la disciplina es, verdaderamente, absorber en el orden militar personas que, por su carácter civil, nada tienen que ver ni tienen ninguna intencionalidad

en aspectos que puedan ser subsumibles en el articulado del Código de Justicia Militar.

Entendemos que este número 3 sobra y, por consiguiente, pedimos su supresión. Nada más.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor o en contra? (Pausa.) ¿Portavoces? Tiene la palabra el Senador Irizar, del Grupo Parlamentario Socialista del Senado.

El señor IRIZAR ORTEGA: Señor Presidente, con el fin de apoyar la enmienda del Grupo Parlamentario Cataluña, Democracia y Socialismo, por entender que el número 3 del artículo 6.º introduce elementos evidentemente distorsionadores, quizá en mayor medida todavía que los otros números que han sido enmendados por mi Grupo.

Digo esto porque el número 3 contiene dos elementos esenciales. Por un lado, define cuáles son los objetos básicos a los que será aplicada la Jurisdicción Militar, y nos lleva a definir, como sujeto pasivo de la Jurisdicción Militar, nada más ni nada menos que al personal laboral que preste sus servicios en los centros o dependencias y establecimientos militares, incluso en materia de relaciones laborales o de empleo, si bien nos viene a decir después que solamente será competencia de la Jurisdicción Militar cuando afecte al buen régimen y servicio de las Fuerzas Armadas.

Lo que nos preguntamos con verdadera preocupación es quién define cuándo afecta al buen régimen y servicio de las Fuerzas Armadas. Y nos preguntamos también con verdadera preocupación cuál será este ámbito y cuál es el buen régimen y servicio de las Fuerzas Armadas. Porque la Constitución reconoce unos derechos, y las leyes positivas también, a los trabajadores; por poner un ejemplo, el derecho de huelga. ¿Puede cercenar este derecho el número 3 que se introduce aquí? ¿Una huelga legalmente establecida en un establecimiento militar afecta al buen orden o al buen régimen y servicio de las Fuerzas Armadas? ¿No se están cercenando, con este número, derechos de los trabajadores en las fábricas de armas o establecimientos militares?

Nos parece que este artículo es extender la

Jurisdicción Militar mucho más allá del ámbito estrictamente castrense. Es extenderla, incluso, a las relaciones laborales, con lo cual no estamos de acuerdo, porque creemos que rebasa toda la filosofía del texto constitucional, que reduce la Jurisdicción Militar al ámbito estrictamente castrense. Además, si ponemos en relación el artículo 6.º que estamos enmendando, y cuya enmienda estamos apoyando, con el artículo 13, número 1, del propio texto que hoy estamos discutiendo, vemos que este artículo define como militares, a los efectos de este Código desde luego, al personal laboral de la Jurisdicción Militar, que, en definitiva, es una definición que se sale de lo que son los militares profesionales y, por consiguiente, a nuestro entender debe estar fuera de este Código, razón por la cual anunciamos nuestro voto favorable a esta enmienda.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sánchez Torres, por Unión de Centro Democrático

El señor SANCHEZ TORRES: Señor Presidente, para fijar la postura de nuestro Grupo en relación con este voto particular que quiere la supresión del número 3 del artículo 6.º, y que ha sido puesto en relación con el artículo 13, número 1, del mismo proyecto de ley.

Creo que si leemos bien estos artículos veremos que el artículo 6.º dice: «... los funcionarios civiles de la Administración Militar, el personal laboral o que preste sus servicios en los centros, dependencias o establecimientos militares, por hechos ejecutados con motivo u ocasión del trabajo o servicio que presten, de la utilización o empleo del material que se les entregue o de las relaciones laborales...». Es decir, se refiere a un determinado personal laboral o a determinados funcionarios que se encuentran en una situación que yo calificaría genéricamente de confianza, en unos determinados puestos de confianza.

Naturalmente, los delitos que se cometan en esas situaciones pueden afectar, a nuestro entender, al ámbito castrense, porque, en definitiva, afectan al buen régimen y servicio de las Fuerzas Armadas.

Pero es que el artículo 13, 1, Senador Irí-

zar, no dice exactamente lo que S. S. acaba de manifestar, porque si S. S. lee el último inciso del párrafo segundo del número 1, verá que dice taxativamente que en cuanto a los funcionarios civiles y personal laboral de la Administración Militar se estará a lo dispuesto en el artículo 6.º, 3, de este Código. Luego explícitamente los excluye de esa posible condición de militares, en donde S. S. parecía, a mi juicio, decir que pudieran entenderse comprendidos, con una argumentación muy similar a la que se utilizó también en el Congreso de los Diputados; no es así.

Por último, S. S. muestra alguna preocupación porque estas personas puedan ser juzgadas por la Jurisdicción Militar, como consecuencia de esas relaciones laborales. Yo tengo que decirle única y exclusivamente que esas relaciones laborales son por delitos y, como consecuencia de ello, todo aquello que un trabajador, que cualquiera que mantenga relaciones laborales, haga en uso legítimo de sus derechos, es decir, el derecho de reunión, el derecho de huelga, etc., amparado naturalmente por los requisitos legales que se establezcan en cada materia, indudablemente no son delitos y, por tanto, no pueden verse afectados por ellos.

En consecuencia, yo creo que la redacción que establece el texto de la Comisión es la adecuada y, como consecuencia de ello, anunciamos el voto favorable al texto de la Comisión. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Aunque resta un voto particular del Grupo Cataluña, Democracia y Socialismo, que hace referencia a este mismo artículo, dado que mediante él se solicita la introducción de un nuevo número, que sería el octavo bis o el noveno, de momento vamos a votar los votos particulares que han sido objeto de debate en relación propiamente dicha con el texto propuesto por el dictamen de la Comisión.

En primer lugar, sometemos a votación el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, enmienda número 1, que afecta al número 1 del artículo 6.º (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 53; en contra, 77.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 1, que afecta al número 1 del artículo 6.º

Sometemos a votación el voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 2, al número 2 del artículo 6.º, que postula su supresión. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 53; en contra, 77.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 2 al número 2 del artículo 6.º

Sometemos a votación el voto particular del Grupo Cataluña, Democracia y Socialismo, enmienda número 3, al número 3 del artículo 6.º, que postula su supresión. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 53; en contra, 77.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Partido Cataluña, Democracia y Socialismo, enmienda número 3, al número 3 del artículo 6.º

Sometemos a votación el voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 4, al número 4 del artículo 6.º (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 53; en contra, 77.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 4, al número 4 del artículo 6.º

Sometemos a votación el voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 4, relativa al número 7 del artículo 6.º (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 53; en contra, 77.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 4, relativa al número 7 del artículo 6.º

Procede ahora votar el texto que para el artículo 6.º propone el dictamen de la Comi-

sión. No hay votos particulares para el párrafo inicial y para los números 5, 6 y 8. ¿Se puede entender aprobado por asentimiento de la Cámara? (Pausa.) Así se declara, por consiguiente, respecto del párrafo inicial y de los números 5, 6 y 8 del artículo 6.º del texto del dictamen.

¿Los demás párrafos se pueden votar agrupados? (Asentimiento.)

A una sola votación se someten los números 1, 2, 3, 4 y 7 del artículo 6.º del texto del dictamen. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 77; en contra, 51; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los números 1, 2, 3, 4 y 7 del artículo 6.º del texto del dictamen.

Así se llega al voto particular a que antes me referí, cuya defensa corresponde al Grupo Cataluña, Democracia y Socialismo. Enmienda número 7, que solicita la introducción de un nuevo apartado de este artículo, que sería, en su caso, el 8.º bis o el 9.º El portavoz del Grupo, Senador Nadal Company, tiene la palabra para la defensa del voto particular.

El señor NADAL COMPANY: Nosotros proponemos pasar los párrafos segundo y tercero del artículo 9.º al artículo 6.º, con la siguiente redacción: «Por hechos que atenten contra la soberanía española, la seguridad militar o los compromisos internacionales contraídos por España para el tráfico de aviones militares o de barcos de guerra».

La motivación es muy simple: Se deduce que el aforamiento no es por razón del lugar, sino por razón de los delitos, y, por tanto, su lugar lógico es en el artículo 6.º Nada más.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor o en contra? (Pausa.) ¿Portavoces? Tiene la palabra el señor Sánchez Reus, del Grupo Parlamentario de UCD.

El señor SANCHEZ REUS: Señor Presidente, Señorías, nosotros entendemos que el artículo 6.º está, en su conjunto, perfectamen-

te completado, y que estos dos números, 2 y 3; del artículo 9.º, que la enmienda número 7 del Grupo Cataluña, Democracia y Socialismo pretende llevar al artículo 6.º, por sistemática y por técnica jurídica no deben llevarse a él.

El artículo 9.º establece una combinación de competencias por razón del lugar con el principio fundamental de la protección del bien que ha de protegerse. Entonces, el artículo 9.º lo que pretende es especificar y concretar unos lugares o espacios y especificar fundamentalmente dónde el delito que se comete y las situaciones que en este artículo se indican están sometidos a la Jurisdicción Militar.

En todos los lugares y espacios a que se refieren los números 2 y 3 del artículo 9.º se produce una ampliación de jurisdicción, es cierto, y, por tanto, también afectan en cierto modo a la soberanía española. El artículo 6.º no hace referencia alguna a estos números 2 y 3 que se pretende pasar al artículo 6.º

Cierto que cualquier tipo de delito debe ser objeto, naturalmente, de una persecución por vía de la justicia y, naturalmente, de una protección a través del ordenamiento jurídico. Ciertamente entonces que seguimos entendiendo que los números 2 y 3 del artículo 9.º deben seguir estando en el artículo 9.º y dejar el artículo 6.º en sus términos y con la redacción que tiene actualmente.

Por todo ello, vamos a oponernos a este voto particular y vamos a votar a favor del dictamen de la Comisión.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el voto particular del Grupo Cataluña, Democracia y Socialismo, enmienda número 7. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 48; en contra, 74.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Cataluña, Democracia y Socialismo, enmienda número 7.

Por consiguiente, el artículo 6.º, tal como ha propuesto el dictamen de la Comisión y fue ya anteriormente aprobado por la Cámara, queda inalterable.

Artículo 7.º del Código

Al texto propuesto para el artículo 7.º del Código de Justicia Militar el Grupo Socialista mantiene un voto particular, enmienda número 5, que afecta al número 2 de este artículo 7.º, cuya supresión se postula.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo, Senador Irizar.

El señor IRIZAR ORTEGA: Señor Presidente, realmente la filosofía de este voto particular es la misma de los anteriores votos particulares defendidos, si bien quisiera resaltar la forma en que está redactado este número 2 y es que, en principio, la Jurisdicción Militar es competente de las faltas comunes cometidas por militares. Este es el principio general: todas las faltas comunes cometidas por militares, según el número 2 del artículo 7.º, son competencia de la Jurisdicción Militar.

Esto realmente nos parece que está fuera de lugar, que es una pura invasión más de la Jurisdicción Militar en un ámbito que no le corresponde, aunque haya una segunda parte que diga que «la Jurisdicción Militar se inhibirá en favor de la Ordinaria cuando no afecten al buen régimen de los Ejércitos o al decoro de sus clases».

Realmente, esto conduce a que sea la Jurisdicción Militar la que defina cuándo afecta o no «al buen régimen de los Ejércitos o al decoro de sus clases», con lo que nos encontramos con que en cualquier momento la vis atractiva es a favor de la Jurisdicción Militar, que tiene la competencia sobre todas las faltas cometidas por militares, si bien se inhibirá en el momento en que no afecten al buen régimen de los Ejércitos.

Aunque tampoco estaríamos de acuerdo con una redacción al contrario, nos parecería mucho más razonable, es decir, que siempre que la Jurisdicción Civil u Ordinaria —por emplear un término jurídico más exacto— fuese la competente para las faltas comunes cometidas por los militares, si bien se inhibiera en favor de la Jurisdicción Militar cuando afecten al buen régimen de los Ejércitos o al decoro de sus clases. Sería tener un mayor respeto al principio de la Jurisdicción Ordinaria como competencia principal y dejar residualmente, en su caso, la competen-

cia a la Jurisdicción Militar para aquellas faltas muy particulares.

Nosotros nos hemos visto obligados a solicitar la supresión de este número 2 por entender, una vez más, que es una invasión de la Jurisdicción Ordinaria por la Jurisdicción Militar, que está fuera de lugar, de acuerdo con el espíritu que ya hemos venido manifestando en lo que interpreta el artículo 117, 5, de la Constitución.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor? (Pausa.)

¿Turnos en contra? (Pausa.)

¿Turno de portavoces? (Pausa.)

Los señores Ojeda y Sánchez Torres han reservado su turno.

El señor Ojeda, del Grupo Socialista Andaluz, tiene la palabra.

El señor OJEDA ESCOBAR: Señor Presidente, Señorías, para fijar la posición de mi Grupo en apoyo de la enmienda que acaba de defender el Senador Irizar, y las razones son las siguientes: Este precepto del proyecto determina qué son faltas militares cuyo conocimiento debe corresponder a la Jurisdicción Militar. La expresión es ambigua, confusa y yo diría que incluso aberrante.

En su número 2 dice que la Jurisdicción Militar conoce de las faltas comunes cometidas por los militares. De nuevo vemos aquí una extensión de la Jurisdicción Militar. Parece que la Jurisdicción Militar tiene una vis atractiva, una fuerza expansiva que atrae a su seno faltas que tienen carácter de comunes cometidas por los militares.

Como vemos, e insistiendo en nuestra filosofía, hay de nuevo un choque, una conexión, una infracción con el artículo 117, 5, de la Constitución.

Pero la extensión de la Jurisdicción Militar es más clara en el número 2 de este artículo con una expresión ambigua. Exactamente dice: «... cuando no afecten al buen régimen de los Ejércitos o al decoro de sus clases».

Es una expresión ambigua, difícil de precisar y de determinar. Aquí está el núcleo, aquí está, podríamos decir, la madre del cordero. Según la interpretación que se dé a estos términos imprecisos se determinará el alcance del precepto. Una interpretación amplia lleva a la conclusión de que cualquier

falta cometida por un militar afecta al decoro de su clase y, por tanto, es competencia de la Jurisdicción Militar. Una interpretación restrictiva, estricta, podría llevar a la limitación del alcance de la Jurisdicción Militar a sus estrictos términos. La imprecisión, por tanto, la inseguridad que puede originarse, es evidente, y por ello apoyamos la enmienda del Grupo Socialista.

El señor PRESIDENTE: El Senador Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario de UCD, tiene la palabra.

El señor SANCHEZ TORRES: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, para manifestar la postura de nuestro Grupo, con respecto de este punto.

Nosotros preferimos, y seguimos defendiendo, el texto del dictamen de la Comisión, ya que una lectura apropiada del artículo 7.º, número 2, nos da la verdadera directriz en este tema. En efecto, se dice en principio que la Jurisdicción Militar conoce de las faltas comunes (número 2) cometidas por militares. Y a continuación dice que la Jurisdicción Militar se inhibirá en favor de la ordinaria cuando no afecten al buen régimen de los Ejércitos o al decoro de sus clases. Esta frase, «cuando no afecten al buen régimen de los Ejércitos o al decoro de sus clases», se califica continuamente de ambigua, se califica continuamente de imprecisa. Es uno más de tantos principios que, poco a poco, el Juez va fijando y delimitando.

En cualquier Cuerpo legal nos encontramos con frases todavía más generales que ésta. El señor Ojeda recordará, de nuestros tiempos de opositores, frases como la del «buen padre de familia», la del «celoso administrador», etcétera, y sin embargo esos criterios han sido suficientes para que esos códigos funcionaran cuando esos principios también funcionaban.

Creo, además, que hay otra serie de razones que abonan la defensa del texto de la Comisión, y estas razones que me voy a permitir señalar brevemente a Sus Señorías son, fundamentalmente, las siguientes: En primer lugar, que tengan en cuenta que a partir de esta reforma que estamos haciendo parcial y, por supuesto, limitada del Código de Justicia

Militar, uno de los más importantes logros que se consiguen es elevar el grado de juridicidad, es decir, la presencia de los togados dentro de los distintos Juzgados, Fiscalías, Tribunales, etc., del Consejo de Justicia Militar. Hace que ese grado de juridicidad aumente el grado de confianza que, en todo caso, hay que tener con motivo de esta Jurisdicción castrense.

El Senador Irizar ha dicho —o he creído entenderlo así— que hay que tener un mayor respeto a la Jurisdicción ordinaria. Pues verá usted, señor Irizar, a mí me merece el mismo respeto la Jurisdicción ordinaria que la Jurisdicción Militar, porque ambas son Jurisdicciones y ambas son constitucionales. Por tanto, yo creo que, en definitiva, éste es un criterio que nos acerca hacia la verdad. Además, la misma reforma en sí, señoras y señores Senadores, lleva implícito un cambio de criterio, un cambio de filosofía. Parece que es que se va a continuar aplicando el Código de Justicia Militar antiguo. No, estos nuevos criterios deben ser asumidos por los Juzgados y Tribunales Militares y, naturalmente, por todos los Cuerpos jurídicos que forman parte de los mismos, y, en consecuencia, igualmente se tendrán en cuenta esos criterios de inhibición y entonces, lo que a Su Señoría le parece regla general, verá cómo en la práctica será precisamente la excepción. Que la redacción sea más o menos afortunada, indudablemente puede discutirse, pero en orden a los principios prácticos y a lo que luego se pueda producir, verán Sus Señorías cómo no es regla general.

Por último, ha hecho referencia a esa unidad de Jurisdicción, pero admitida la duplicidad de Jurisdicciones y reguladas estas importantes mejoras, creo que deberíamos depositar nuestra total confianza en la Jurisdicción castrense, constitucionalmente establecida —y con esto no quiero decir que haya desconfianza, ni mucho menos, por parte de los señores Senadores socialistas—, y podemos estar seguros de que sabrán perfectamente aplicar estos criterios, que ahora, a lo mejor, pueden parecer ambiguos a la oposición, pero que, a mi juicio, son muy esclarecedores.

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar el voto particular del Grupo Parlamentario So-

cialista, enmienda número 5, al artículo 7.º
(Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 50; en contra, 74.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, enmienda número 5, al artículo 7.º

Pasamos a votar el texto del dictamen, referente al párrafo inicial y a los números 1, 3, 4 y 5, del artículo 7.º, que no fueron objeto de votos particulares.

La Presidencia, una vez más, propone si se entienden aprobados por asentimiento de la Cámara. (Pausa.)

Así se declara.

Sometemos a votación el número 2 del artículo 7.º, según el texto del dictamen de la Comisión. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 74; en contra, 47; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el número 2 del artículo 7.º

Artículo 9.º
del Código

Para el artículo 9.º subsiste un voto particular, reservado por el Grupo Parlamentario de Cataluña, Democracia y Socialismo, enmienda número 6, que afecta al número 2 de este artículo.

Tiene la palabra el Senador Nadal Company.

El señor NADAL COMPANYY: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, con relación al artículo 9.º, nosotros proponemos añadir que «no se incluirán en el supuesto de atentado contra la soberanía española los delitos o faltas cometidos contra los capitanes de buque mercante o aviación civil».

El Senador Sánchez Torres nos acaba de decir que le merece el mismo respeto la Jurisdicción Ordinaria que la Jurisdicción Militar. Coincidimos, señor Sánchez Torres, estamos completamente de acuerdo; pero también vamos a estar completamente de acuerdo, creo yo, o por lo menos entre todos los juristas de uno y otro sector, en que inicialmente una cuestión entre dos personas civiles co-

rresponde a la Jurisdicción Ordinaria, porque se trata de un delito común.

Por consiguiente, vamos a suponer que en un buque mercante que sale de Bristol con dirección a España, un marinero que lleva el timón tiene unas palabras, más o menos violentas, con el capitán. El capitán lo separa del timón, pone a otro marinero, y cuando llega a la Comandancia de Marina da cuenta de lo sucedido. La autoridad militar de Marina instruye diligencias y es remitido a Consejo de Guerra. Esto está ocurriendo en plena vigencia de la Constitución y el procesado se llama Justo Bilbao.

De suerte que éste es uno de los supuestos a los que yo me he referido en mi primera intervención. Nuestra propuesta salva precisamente estas situaciones, porque si realmente se produce un atentado contra la soberanía española —y no podemos entender como tal atentado contra la soberanía española unas diferencias entre el timonel y el capitán— si realmente se ha producido este atentado, la Jurisdicción Ordinaria, al juzgar la conducta, puede inhibirse perfectamente en favor de la Jurisdicción Militar, pero no entender de ello directamente la Jurisdicción Militar.

Esto es realmente lo que ha creado un estado de exasperación entre los miembros de la Marina Mercante. Las protestas son muy constantes, porque se han sucedido otros supuestos parecidos en otros sectores de la Marina Mercante.

Es, pues, clarísimo, y el planteamiento nuestro no deja de serlo más. Con este añadido, nosotros resolvemos una situación confusa, una situación de competencias, sin atender para nada al espíritu de la reforma, puesto que la soberanía española entendemos que puede quedar tan perfectamente salvaguardada por la Jurisdicción Ordinaria como por la Jurisdicción Militar. Y en esto coincido con lo que decía el señor Sánchez Torres, de suerte que espero muy improbable que el señor Sánchez Torres vote en contra de mi enmienda.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿En contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Sánchez Reus, por el Grupo Parlamentario de UCD.

El señor SANCHEZ REUS: Señor Presidente, Señorías, se pretende con esta enmienda introducir un párrafo nuevo, y precisamente la motivación o justificación de esta enmienda aparece literalmente escrita en el texto publicado en este Senado y dice que «al disponer los artículos 609 y 611 del Código de Comercio que el capitán de buque mercante representa la soberanía española», etc., entonces, lógicamente, los miembros de la Ponencia del Grupo de UCD sentimos cierta desazón en cuanto a ver si efectivamente estos artículos 609 y 611 del Código de Comercio decían exactamente lo mismo que en la motivación o justificación de la enmienda aparece escrito.

Yo me voy a permitir leer a Sus Señorías lo que dicen estos artículos 609 y 611. El 611 dice así: «Los capitanes y patronos deberán ser españoles, tener aptitud legal para obligarse con arreglo a este Código, hacer constar la pericia, capacidad y condiciones necesarias para mandar y dirigir el buque, según establezcan las leyes, Ordenanzas» (...) «Si el dueño de un buque quiere ser su capitán careciendo de aptitud legal para ello, se limitará», etc. El artículo 611 tampoco hace referencia alguna a que el capitán del buque represente en ningún momento la soberanía española. Esto quiere decir que el hecho de que se produzca un incidente en un buque mercante y que pueda haber, a lo mejor, esa situación o ese caso concreto de que en ese incidente un timonel puede insultar o agredir al capitán del buque, no representa de ninguna manera el que esto deba estar sometido a la Jurisdicción Militar, porque ésa sería una interpretación totalmente antijurídica.

Lo cierto es que este artículo 9.º lo que dice en su número 2 es que «en aguas de la mar, ríos navegables», etc., «exclusivamente cuando los hechos perpetrados atenten contra la soberanía española...». El dar una bofetada —y lamento mucho que pueda producirse ese hecho— a un capitán de un buque mercante, entiendo, y entiendo mi Grupo, que no atenta a la soberanía española. Exclusivamente se da ese caso cuando los hechos perpetrados atenten contra la seguridad militar. Ese ejemplo que nos ha puesto nuestro compañero el señor Nadal creo que tampoco aten-

ta a la seguridad militar. Y, por último, «...o los compromisos internacionales contraídos por España...».

Por tanto, después de leer estos casos concretos, los tres supuestos a los que hace referencia este artículo, y puesto que en su intervención oral de ahora no ha hecho ninguna referencia a los artículos 609 y 611, que así venían en la motivación o justificación de la enmienda, nosotros tenemos necesariamente que rechazarla, porque entendemos que este párrafo 2 del artículo 9.º, en la redacción que viene aprobada en el dictamen de la Comisión, es el adecuado y correcto. De ahí que vayamos a oponernos al voto particular que mantiene.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación seguidamente el voto particular del Grupo Parlamentario Catalunya, Democracia i Socialisme (enmienda número 6), relativo al párrafo 2 del artículo 9.º del proyecto de Ley Orgánica del Código de Justicia Militar.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 44; votos en contra, 62; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Parlamentario Catalunya, Democracia i Socialisme al párrafo 2 del artículo 9.º

Siguiendo lo que ya viene siendo habitual, y si no hay inconveniente, la Presidencia propone que la Cámara apruebe por asentimiento el párrafo inicial y los párrafos 1, 3, 4 y 5 del artículo 9.º ¿Es así, señores portavoces? (Asentimiento.)

Por asentimiento de la Cámara se declaran aprobados estos párrafos del artículo 9.º

Sometemos seguidamente a votación el párrafo 2 del artículo 9.º según el texto del dictamen de la Comisión. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 65; en contra, 45.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el párrafo 2 del artículo 9.º

Pasamos al texto propuesto para el artículo 13 del Código de Justicia Militar.

En primer lugar, el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista (enmienda número 8), que pretende la supresión del artículo.

Tiene la palabra, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el Senador Irizar.

El señor IRIZAR ORTEGA: Señor Presidente, el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista a este artículo pretende la supresión íntegra de todo el texto que se propone en la reforma del Código de Justicia Militar.

Realmente, dentro de la filosofía que venimos sosteniendo, y que debe amparar este Código de Justicia Militar, entendemos que por razón de la persona no puede asignarse a la Jurisdicción Militar a ningún grupo de personas; es decir, en base al principio de unidad de jurisdicciones, por razón de la persona, todas las personas están en principio sometidas a la Jurisdicción Ordinaria, a la Jurisdicción Civil, y no a la Militar. Y decimos esto, porque entendemos que la ya tan manoseada frase en la mañana de hoy del «ámbito estrictamente castrense» limita el ámbito de la Jurisdicción Militar exclusivamente a aquellos delitos militares, no a aquellos delitos que la Jurisdicción Militar exclusivamente a aquellos delitos que sean cometidos por un determinado grupo de personas.

Por consiguiente, esto nos ha llevado a solicitar la supresión de este artículo íntegramente, es decir, a que desaparezca la clásica atribución a la Jurisdicción Militar de los delitos cometidos por razón de las personas.

Pero el propio artículo es excesivamente amplio, y aun en el supuesto de que se mantuviera, lo que en ningún caso podría sostenerse es la definición que hace de los militares. Si el artículo se mantuviera, entendemos que debería hacer una definición de qué son los militares a efectos de este Código, es decir, qué personas son militares a efectos de este Código exclusivamente, y no meterse en unas enumeraciones prolijas, a nuestro modo de ver inexactas, puesto que se atribuye por razón de la persona a la Jurisdicción Militar no sólo a aquellos que estrictamente son militares, a aquellos militares de carrera o profesión, sino a otro grupo de personas que no tienen esta condición de militares. Y si, desde luego, ningún grupo de personas, entendemos

nosotros, debe estar sometido a la Jurisdicción Militar por razón precisamente de la persona, todavía menos debe estar sometido a esta Jurisdicción un grupo de personas que no son militares de profesión.

Así, el propio artículo, en el párrafo 1, nos dice que será competencia de la Jurisdicción Militar por razón de la persona y, dentro de los límites del artículo 16, contra los militares en servicio activo o reserva. Y después nos define cuáles son estos militares, y nos dice que en este concepto genérico de militares se encontrarán «aquellos individuos pertenecientes a cualquiera de los Cuerpos, Armas, Institutos, Centros u organismos dependientes del Ministerio de Defensa».

Realmente, no todas las personas de estos organismos dependientes del Ministerio de Defensa, que es un concepto amplísimo, son militares (y aquí está el señor Ministro para decirnoslo, puesto que yo no alcanzo en este momento a comprender cuáles son todos y cada uno de los organismos dependientes del Ministerio de Defensa), puesto que lo que sí es cierto es que dentro de todo este amplísimo concepto de Cuerpos, Armas, Institutos, Centros u organismos dependientes del Ministerio de Defensa, hay muchas personas que no son militares de profesión, que no debían estar sometidas a la Jurisdicción Militar por razón de la persona. Esta es una expresión desafortunada, en el supuesto de mantenerse este artículo.

Después vuelve a hacerse una referencia al personal laboral. Ciertamente, se limita a los supuestos del artículo 6.º, párrafo 3, de este Código. De nuevo vuelve a atribuirse por razón de la persona el sometimiento a la Jurisdicción Militar del grupo consistente en funcionarios civiles y personal laboral que pueda tener alguna relación con los Ejércitos, aunque no sea perteneciente a los mismos.

Realmente aparece una atribución excesiva de la Jurisdicción Militar por razón de la persona, puesto que se amplía mucho el grupo de personas sometidas a esta Jurisdicción. Nosotros hemos insistido en que, en nuestro concepto de reducción al ámbito estrictamente castrense de la Jurisdicción Militar, debe desaparecer toda referencia a esta Jurisdicción por razón de la persona, todo sometimiento por razón de la persona, sean o no

militares. Son delitos militares aquellos comprendidos en el Código de Justicia Militar como delitos militares; no son delitos militares, o no deben ser, a nuestro entender, delitos sometidos a la Jurisdicción Militar, ningún tipo de delitos, atribuyendo su competencia por razón de la persona que los comete, y mucho menos deben ser extendidas estas personas a un grupo excesivamente amplio, a un grupo de personas que excede de aquellas que pueden ser en buena lógica, en el supuesto de que se mantuviese este criterio, sometidas a la Jurisdicción Militar por razón de la persona.

Estas razones, entendemos, son de coherencia con toda la filosofía expuesta hasta aquí en esta mañana por los distintos portavoces de los Grupos Socialistas y son las que nos llevan a solicitar la supresión íntegra de este artículo 13 en el proyecto que hoy se debate.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿Turnos en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.)

Tiene la palabra, por el Grupo Socialista Andaluz, el señor Ojeda.

El señor OJEDA ESCOBAR: Señor Presidente, Señorías, muy brevemente, porque no quiero insistir en los argumentos y razones que con brillantez y claridad ha expuesto el Senador Irizar. Únicamente quería recordar lo siguiente: que el comandante de la aeronave o el capitán del buque es autoridad, y recuerdo a los Senadores de UCD que si del Código no se deduce, el artículo 60 de la Ley de Navegación Aérea lo expresa con claridad, y si no, acudan a la autoridad de un mercantilista ilustre, como Joaquín Garrigues, que en la página 600 de su «Curso de Derecho Mercantil», tomo II, lo dice con claridad.

Yo, en cuanto a la enmienda que presenta el Grupo Socialista, y dada la conexión o relación que el párrafo segundo del número 1 guarda con una enmienda que habíamos presentado y que ha sido rechazada, me permitía —quizá ponga en un aprieto al señor Ministro, pero yo creo que él esta mañana está en disposición de responder a todas las cuestiones— preguntarle concretamente algo

que a mí me parece de entidad y de gravedad: Los funcionarios civiles al servicio de la Administración Militar, los obreros al servicio de la Administración Militar, ¿pueden sindicarse, pueden asociarse, tienen derecho de huelga? A esto, que a veces no está claro, me gustaría que, si es posible, me respondiese el señor Ministro.

Después, en el supuesto de que hiciesen huelga o se sindicasen, si caerían bajo la jurisdicción militar

Yo sé que la Constitución reconoce el derecho de asociación, el derecho de sindicación y el de huelga, pero me interesaría que quedase clarificada su aplicación concreta en este ámbito.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sánchez Torres, de Unión de Centro Democrático.

El señor SANCHEZ TORRES: Señor Presidente, en el deseo de abreviar este debate, dada la hora en que nos encontramos y todos los votos particulares que tenemos por delante, si la Presidencia me lo permite, y dado que hay más votos particulares al artículo 13, utilizaría al final el turno de portavoces para responder a todos ellos, para formar el criterio de nuestro Grupo.

El señor PRESIDENTE: Siempre que lo haga en el término de diez minutos.

El señor SANCHEZ TORRES: De acuerdo, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: A continuación, el Grupo Parlamentario Cataluña, Democracia y Socialismo mantiene cuatro votos particulares correlativos a sus enmiendas números 9, 11, 10 y 12, todas ellas referidas a distintos párrafos de este número 1 del artículo 13.

Tiene la palabra el señor Nadal.

El señor NADAL COMPANYY: Señor Presidente, voy a defender conjuntamente las enmiendas números 9, 10, 11, 12 y 13. Ahora bien, voy a alterar el orden...

El señor PRESIDENTE: Por favor, el voto particular correlativo a la enmienda número

13 postula una nueva redacción del artículo 14, que no viene incluido en el proyecto. Esta enmienda la deberá defender de forma independiente; de modo que limítese ahora a defender los votos particulares que hacen relación a enmiendas mantenidas o formuladas contra el artículo 13, para no incurrir en confusiones, señor Nadal.

El señor NADAL COMPANYY: Perdón, señor Presidente, he incurrido en confusión. Me voy a limitar estrictamente al artículo 13. Por tanto, defenderé las enmiendas números 9, 10, 11 y 12. Ahora, para seguir el orden de la proposición de ley, lo que voy a hacer es defender primero la enmienda número 9, después la número 11, seguidamente la 10 y, por último, la 12.

El señor PRESIDENTE: En ese mismo orden las he relacionado yo.

El señor NADAL COMPANYY: Me parece que es lo más práctico.

En cuanto al artículo 13, número 1, y vamos a darlo ya por conocido, se propone la redacción siguiente: «Contra los militares en situación de actividad», que es distinto de «situación en activo».

Nosotros entendemos que la finalidad del Código es servir a una función, que es la de mantener la disciplina interna del Cuerpo. Pues bien, en el servicio activo se encuentran los militares en actividad, o sea, los militares que van al cuartel, los militares que visten uniforme, que asisten a las paradas, etc. Pero también se hallan en situación de actividad los supernumerarios, que no cobran, no van al cuartel, no visten uniforme, etc., o los destinados a servicios civiles, los enfermos o los que se hallen en situación de procesados.

Nosotros hacemos, dentro del servicio activo, esta distinción de actividad a los que van al cuartel, visten uniforme y asisten a todas las actividades militares, y separamos de la situación de actividad a los otros que antes he reseñado. Luego están, naturalmente, los que están en la situación de retirados, pero esto ya no entra en el problema de activo o de actividad.

Creemos nosotros que al introducir el tér-

mino «actividad» introducimos una aclaración y restringimos, a la vez, la intervención de la autoridad militar en aquellas funciones propias para mantener la disciplina del Cuerpo, que es, en definitiva, el espíritu que impregna el proyecto de ley del que antes nos ha hablado el señor Ministro.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno a favor?

El señor NADAL COMPANYY: Como lo he acumulado, voy a continuar, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Exactamente, continúe.

E' señor NADAL COMPANYY: Entonces voy a la enmienda número 11.

Nosotros proponemos suprimir del segundo párrafo las palabras «Centros u organismos». Su motivación es muy clara: «El carácter militar de las personas viene dado por su pertenencia a las Armas o Cuerpos, pero no a los Centros u Organismos, ya que en los mismos también trabajan funcionarios y empleados civiles».

Creo que es lo suficiente expresiva su motivación y no hace necesarias más aclaraciones.

En cuanto a la enmienda número 10, esta enmienda requiere una extraordinaria reflexión, es decir, salirnos un poco de la rutina y reflexionar sobre la misma, pues se pueden dar situaciones en extremo delicadas.

Puede darse el caso de un militar que, dada su profesionalidad, sea elevado a un cargo importantísimo, a un cargo de Gobierno, en cuyo caso entendemos que este militar, en estas condiciones, necesita una protección más importante; incluso las faltas que se cometan contra este militar, que afectan verdaderamente al prestigio del Estado, al prestigio del Gobierno, merecen un tratamiento que no corresponde a la condición militar.

Yo creo que insistir sobre este particular es perfectamente innecesario, porque en el ánimo de todos está su propia comprensión y su propio objetivo.

Creo que es muy importante, que vale la pena que reflexionemos sobre todo en la re-

levancia de esto y se comprenda nuestra intención, cual es la de prestigiar al máximo las instituciones del Estado.

Por esta razón hemos propuesto la siguiente redacción: «No estarán comprendidos en tal concepción los miembros del Gobierno, incluido el Ministro de Defensa, ni los cargos políticos, de cualquier Ministerio, incluido también el de Defensa, aunque pertenezcan a algún Arma o Cuerpo de las Fuerzas Armadas».

Ahora solamente queda la enmienda número 12. Nosotros proponemos sustituir los párrafos, cuarto, quinto, sexto y séptimo del número 1 por un párrafo único, redactado con arreglo al siguiente tenor: «Los individuos de las clases de tropa que estuviesen realizando el servicio militar, las personas movilizadas o militarizadas, los aspirantes a oficiales o suboficiales de complemento, los alumnos de las Academias Militares y los miembros de las Fuerzas de Orden Público, sólo serán responsables ante la Jurisdicción Militar en caso de guerra o estado de sitio, y durante la paz, por delitos relacionados con la disciplina o el servicio militar».

Su motivación es la misma: «El aforamiento de estos grupos que no son plenamente militares debe reducirse a los tres casos citados».

Nada más.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.)

Sólo reserva la palabra el Senador Sánchez Torres, que la tiene en nombre de Unión de Centro Democrático.

El señor SANCHEZ TORRES: Señor Presidente, Señorías, voy a tratar de responder, con la mayor brevedad posible, a todos los votos particulares que se han formulado a este artículo 13, en cumplimiento de la promesa que acabo de hacer al señor Presidente de llevarlo a cabo en el tiempo oportuno.

En primer lugar, la enmienda número 8, que ha sido presentada por el Grupo Socialista, propone la supresión del artículo 13. Estamos ante un supuesto en el que las filosofías son totalmente distintas. Indudablemente, cuando se defiende, como defendemos nos-

otros, que hay delitos por razón de su naturaleza, delitos por razón de lugar y delitos también por razón de la persona, y después existe un sistema de desafuero en el artículo 16, en principio no podemos admitir esta supresión porque iría contra la sistemática que hemos estado defendiendo y, consecuentemente, iría contra nuestra postura ante estos problemas.

En definitiva, yo no quiero, Senador Irizar, detenerme en este punto; no me lo tome Su Señoría, ni mucho menos, como desaire, sino simplemente porque Su Señoría sabe que son cuestiones y posturas totalmente diferentes y que, dada esta tricotomía que nosotros defendemos con esa palabra que se ha hecho ya un poco famosa, no podemos prescindir de ella.

En cuanto al voto particular número 9 propuesto por el Grupo Parlamentario Cataluña, Democracia y Socialismo, que propone que se redacte diciendo «Contra los militares en situación de actividad», yo le manifestaría que si dijéramos simplemente «en situación de actividad», quedarían fuera situaciones de servicio activo, como supernumerario con destino militar o en destino civil y situaciones de procesado, reemplazado por herido o enfermo, situaciones en las cuales se sigue ascendiendo, se percibe remuneración y se viste uniforme militar. Por ello se debe incluir a todos estos militares en servicio activo en la jurisdicción militar. Además, la palabra «activo» es precisamente la que usa el artículo 173, si mal no recuerdo, de las Ordenanzas Militares aprobadas en la legislatura anterior. No se puede argüir que hay situaciones de militares en servicio activo con destinos civiles o al servicio de otros Ministerios en los cuales el militar trabaja como civil, porque precisamente —y aquí volvemos al tema— el número 1 del artículo 16, en su último inciso, dice que pasarán a la jurisdicción ordinaria «los que cometan en el ejercicio de función propia de destino o cargo civil o con ocasión de ellos».

En cuanto a la enmienda número 10, presentada por el mismo Grupo, se propone una nueva redacción al párrafo 1 del artículo 13, que dice: «No estarán comprendidos en tal concepción los miembros del Gobierno, incluido el Ministro de Defensa, ni los cargos

políticos, de cualquier Ministerio, incluido también el de Defensa, aunque pertenezcan a algún Arma o Cuerpo de las Fuerzas Armadas».

Con respecto de este punto yo les diría, Señorías, que en principio estamos de acuerdo, pero esto es lo que dice el artículo 16, en el que se produce precisamente el desaforamiento: «Los militares y demás personas enumeradas en los artículos 13 y 14 serán sometidos a la jurisdicción ordinaria cuando lo cometan en el ejercicio de función propia de destino o cargo civil o con ocasión de ellos».

Y también, si nos fijamos, en el número 11 del mismo artículo 16 nos encontramos con que, en relación con otros puntos, se dice: «Se entenderá, en todo caso, que corresponde la competencia a la Jurisdicción Ordinaria para conocer de las infracciones comunes o tipificadas en este Código, siempre que alguno de los presuntos culpables sea militar o paisano y por razón del cargo que ostente o de la autoridad que ejerza tenga señalado fuero personal del Tribunal Supremo, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial u otra normal legal especial».

Con estos supuestos dos desaforamientos quedan disipadas, a mi juicio, estas dudas.

La enmienda número 11 señala que se propone suprimir en el párrafo segundo las palabras «Centros u organismos», y se dice que el carácter militar viene dado por su pertenencia a un Arma o Cuerpo, pero no a los Centros u organismos. En efecto, así es; pero en el artículo 13 se dice: «En cuanto a los funcionarios civiles y personal laboral de la Administración Militar se estará a lo dispuesto en el artículo 6.º, 3, de este Código». En el artículo 16, 1, se somete a la jurisdicción ordinaria hasta a los mismos militares cuando cometan los delitos en el ejercicio de función propia de destino o cargo civil o con ocasión de ellos.

Por último, la enmienda número 12 propone sustituir los párrafos 4, 5, 6 y 7 del número 1 por otro. Pretende distinguir entre tiempo de paz y tiempo de guerra. En tiempo de guerra parece que estamos todos de acuerdo. En cuanto al tiempo de paz, pretende que sea sólo por delitos relacionados con la disciplina o el servicio militar.

Pues bien, el artículo 16 también nos dice, y voy a repetirlo, que los delitos que tengan naturaleza común, cometidos por los militares, cuando los hechos no afectaren a buen régimen y servicio de las Fuerzas Armadas, pasan a la jurisdicción ordinaria.

En definitiva, estamos ante un sistema que se mantiene en el Código de Justicia Militar de tres elementos para establecer la determinación de competencia y un sistema de desaforamiento en el artículo 16; y como estos artículos juegan armónicamente, armónicamente hay que examinarlos para determinar la posición con respecto de ellos.

Por todas estas razones, señor Presidente, señoras y señores Senadores, anuncio el voto en contra de mi Grupo.

El señor PRESIDENTE: Se procede a la votación correspondiente. En primer lugar, del voto particular del Grupo Parlamentario Socialista (enmienda número 8), por el que se solicita la supresión del artículo 13 del Código de Justicia Militar, según el texto propuesto por la Comisión.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 51; votos en contra, 70; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular (enmienda número 8) del Grupo Parlamentario Socialista.

Se procede a la votación del voto particular del Grupo Parlamentario Cataluña, Democracia y Socialismo (enmienda número 9), que afecta al párrafo primero del número 1 del artículo 13.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 51; votos en contra, 70; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Parlamentario Cataluña, Democracia y Socialismo (enmienda número 9).

Se procede a la votación del voto particular del mismo Grupo (enmienda número 11), que afecta al párrafo 2 del número 1 del artículo 13.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 51; votos en contra, 70; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 11.

Se vota a continuación el voto particular del mismo Grupo Parlamentario (enmienda número 10), que se refiere al párrafo 3 del número 1 del artículo 13.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 51; en contra, 70; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazado el voto particular del Grupo Parlamentario Catalunya, Democracia i Socialisme (enmienda número 10).

Finalmente se procede a la votación del voto particular del mismo Grupo Parlamentario (enmienda número 12), que afecta a los párrafos 4, 5, 6 y 7 del número 1 del artículo 13.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 54; en contra 70.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Parlamentario Cataluña, Democracia y Socialismo (enmienda número 12).

Dado que el artículo 13, su párrafo inicial y los números 2, 3 y 4 del mismo artículo no tienen voto particular... (El señor Ojeda Escobar pide la palabra.) Hable usted, señor Ojeda.

El señor OJEDA ESCOBAR: Señor Presidente, como hay una enmienda en que pedimos la supresión total del artículo, lo lógico es que se vote el artículo en su totalidad.

El señor PRESIDENTE: Perfectamente, muchas gracias.

Artículo 13. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 70; en contra, 51; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto propuesto para el artículo 13 del Código de Justicia Militar, según el dictamen de la Comisión.

A continuación procede conocer del voto particular del Grupo Parlamentario Cataluña, Democracia y Socialismo (enmienda número 13), por la que se solicita una redacción también nueva para el artículo 14 del Código de Justicia Militar que no viene incluida en el texto del Congreso de los Diputados y, por consiguiente, no ha sido objeto del dictamen de la Comisión.

Tiene la palabra el Senador Nadal.

El señor NADAL COMPANYY: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, al artículo 14 proponemos la siguiente redacción: «Los individuos de las clases de tropa o marinería, con permiso ilimitado, así como los inscritos en las Cajas de Reclutas, antes de la fecha señalada para su incorporación no estarán sometidos a la jurisdicción militar.

La misma regla se aplicará a los aspirantes a ser oficiales o suboficiales de complemento, durante los períodos en que no estén destinados en ninguna unidad».

Esto es actualizar debidamente la norma y cumplir lo dispuesto por la Constitución respecto a los límites de la jurisdicción militar. Nada más.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor o en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Sánchez Reus.

El señor SANCHEZ REUS: Señor Presidente, Señorías, esta enmienda, que efectivamente ya se ha anunciado que es nueva porque no fue presentada en el Congreso de los Diputados, yo me atrevería a calificarla de enmienda de síntesis, porque lo que pretende es reducir el texto del actual artículo 14 del Código de Justicia Militar, que tiene tres párrafos, a dos párrafos. Por supuesto, la intención es loable, pero con la redacción que proponen los enmendantes nos encontraríamos con que a lo mejor se producían algunas lagunas legales y me explico. En la última parte del segundo párrafo de la enmienda se dice: «La misma regla se aplicará a los as-

pirantes a ser oficiales o suboficiales de complemento...». Yo pregunto, ¿qué regla se aplicará no a los que son aspirantes, sino a los que sí son ya oficiales o suboficiales de complemento que aquí, según la redacción de este artículo 14, quedarían excluidos de la aplicación del contenido que sí la recoge el texto del artículo 14, tal como está especificado en el actual Código de Justicia Militar?

De ahí que entendamos que la redacción del artículo 14 del Código de Justicia Militar es más completa, es en este sentido más apta para ser aplicada y para que los Tribunales de Justicia no pudieran tener luego esas dudas, derivadas de la laguna legal al no citar algunos cuerpos o clases de tropa. En este sentido, mi Grupo Parlamentario va a mantener la postura de que consideramos mejor el texto del Código de Justicia Militar que el que se propone en la enmienda, y de ahí que anunciemos el voto en contra a este voto particular. Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el voto particular del Grupo Parlamentario Cataluña, Democracia y Socialismo (enmienda número 13). Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 53; en contra, 65.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Parlamentario Cataluña, Democracia y Socialismo (enmienda número 13).

Artículo 16 del Código Pasamos así al texto propuesto para el artículo 16 del Código de Justicia Militar. Al mismo aparecen reservados cuatro votos particulares; los tres primeros, por el Grupo Parlamentario Cataluña, Democracia y Socialismo (enmiendas números 14, 15 y 17).

Tiene la palabra el Senador Nadal.

El señor NADAL COMPANYY: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, en cuanto a la enmienda número 14, voy a mantenerla; la enmienda número 15 puede darse por retirada, y voy a mantener también la enmienda número 17.

Por consiguiente, en este momento me voy a limitar a la enmienda número 14, dejando

para una futura intervención la defensa de la enmienda número 17.

La enmienda número 14 trata de suprimir la frase: «... cuando los hechos no afectaren al buen régimen y servicio de las Fuerzas Armadas». Se trata de una frase muy imprecisa, que desfigura la finalidad del párrafo, ya que se puede suponer que todo delito cometido por un militar afecta al buen régimen de las Fuerzas Armadas, aunque sólo sea por el desprestigio que les proporciona. Sostener esta enmienda es ser consecuente con la filosofía que hemos imprimido en la defensa de las anteriores enmiendas, porque, además de lo expuesto en su motivación, se crean situaciones de competencia difíciles de resolver.

En cuanto a la enmienda número 15, ya he dicho al señor Presidente que puede darse por retirada.

Respecto a la enmienda número 16, nosotros...

El señor PRESIDENTE: La enmienda número 16 es del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor NADAL COMPANYY: Entonces, doy por terminada mi intervención.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor o en contra del voto particular correspondiente a la enmienda número 14, puesto que la número 15 ha sido retirada por el Grupo Parlamentario proponente? (Pausa.)

¿Turno de portavoces? (Pausa.)

Tiene la palabra el Señor Ojeda, del Grupo Parlamentario Socialista Andaluz.

El señor OJEDA ESCOBAR: Señor Presidente, Señorías, muy brevemente, para fijar la posición de mi Grupo Parlamentario.

El artículo 16 nos merece una consideración negativa. En el artículo 13 que acabamos de votar se determina el fuero, se afora a una serie de personas, o grupo de personas, y en el artículo 16, empleando una técnica defectuosa, se desafora. Concretándome en lo que es objeto de la enmienda número 14 al número 1 del artículo 16, tengo que decir que la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Cataluña, Democracia y Socialismo se encamina, esencial y fundamentalmen-

te, a limitar a sus justos términos la jurisdicción militar, siguiendo con la filosofía ya tan reiterada esta mañana, que mantiene nuestro Grupo Parlamentario. Además, hay vaguedad e imprecisión en la expresión, deja en manos de la jurisdicción militar la decisión de qué se debe hacer con los delitos y faltas comunes cometidos por los militares y quiebra un principio fundamental, principio opuesto al que recoge este precepto, que es que debe ser la jurisdicción ordinaria quien decida, y no la jurisdicción militar.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Sánchez Reus, por el Grupo Parlamentario de UCD.

El señor SANCHEZ REUS: Señor Presidente, Señorías, efectivamente, entramos en un artículo que establece las causas de desafuero y, manteniendo las distintas posturas y posiciones que ya han sido anunciadas por los distintos portavoces al iniciarse este debate, es totalmente lógico y coherente que esta enmienda haya sido presentada por algunos de los miembros de un grupo de la oposición.

Pero si ellos mantienen una filosofía y unas posturas respecto a lo que puede ser la competencia de la justicia militar por razón de la naturaleza del delito, por razón de las personas o por razón del lugar, ya nos han puesto de manifiesto que, efectivamente, entienden en principio, y quizá en definitiva que debían ser competencia de la jurisdicción militar aquellos supuestos en los que solamente se entendiera a la naturaleza del delito.

Nosotros partimos de unos principios que no son exactamente como los que acabo de enunciar y, entonces, entendemos que también debe haber la competencia de la justicia militar cuando se trata no solamente de la naturaleza del delito, sino por razón del lugar o de las personas. En este artículo se establece un principio y una filosofía totalmente distinta a la que existía antes de esta reforma, reforma que, también ya se ha dicho reiteradamente, es parcial, es precisa, es muy concreta, pero que, en definitiva, sí sirve a los fines que creo todos perseguimos y que a todos nos animan: dar solución a una

serie de problemas y casos concretos en los que estamos todos totalmente de acuerdo.

Antes de la reforma, prácticamente todos los delitos comunes cometidos por militares eran competencia de la jurisdicción militar. A partir de la reforma —y ahora lo podemos decir si este artículo se aprueba— se produce el fenómeno contrario; es decir, todos los delitos comunes cometidos por militares, en principio, son competencia de la jurisdicción ordinaria, salvo que —y aquí es donde efectivamente hay una circunstancia o cautela— los hechos no afectaran al buen régimen y servicio de las Fuerzas Armadas. Entonces volveríamos de nuevo a tener que filosofar en cuanto a qué debe entenderse por buen régimen y servicio de las Fuerzas Armadas. Ciertamente, efectivamente, esto es materia opinable; y como es materia opinable, en algunas ocasiones podremos coincidir y en otras no. Por tanto, mantenemos la redacción dada en el dictamen de la Comisión y, en definitiva, anuncio el voto contrario a este voto particular por parte de mi Grupo Parlamentario.

El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora la defensa del voto particular correlativo a la enmienda número 17, también del Grupo Parlamentario Cataluña, Democracia y Socialismo, que afecta al número 12 de este artículo 16.

El Senador Nadal tiene la palabra.

El señor NADAL COMPANYY: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, al número 12 nosotros proponemos la siguiente redacción: «Todas las infracciones cometidas por los miembros de la Guardia Civil pasarán a la jurisdicción ordinaria, salvo cuando se trate de infracciones o delitos relacionados con la disciplina o de naturaleza estrictamente militar» (estoy subrayando «estrictamente militar»), «entendiendo por tales aquellos que no están tipificados en el Código Penal Común».

Si nos remontamos a los orígenes de la Guardia Civil, inicialmente —su propio nombre lo indica— se trataba de una Guardia Civil dependiente de la autoridad civil, con el espíritu de pacificar el país en aquellos tiempos asolados por los bandoleros. Entonces, el

Duque de Ahumada, gran inspirador de este benemérito Cuerpo, entendió conveniente quedara sujeta a la autoridad militar y, desde entonces, sigue en estos términos. Pero no hay duda de su ambivalencia, toda vez que actúa más en el orden civil que en el orden militar, particularmente en tiempos de paz. Por eso nosotros entendemos que todas las actuaciones de la Guardia Civil —y estamos en la línea y en el espíritu que inspira esta reforma—, mientras, y en tanto, no lo exija la propia disciplina interna del Cuerpo. Por consiguiente, habrá de convenirse con nosotros que la introducción de esta redacción, que la propuesta nuestra es muy conveniente y es del todo oportuna. Nada más, señores.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor? (Pausa.)

¿Turnos en contra? (Pausa.)

¿Turno de portavoces? (Pausa.)

El Senador Sánchez Reus tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de UCD.

El señor SANCHEZ REUS: Señor Presidente, Señorías, esta enmienda, presentada por el Grupo Cataluña, Democracia y Socialismo, al número 12 del artículo 16, según acaba de ser expuesto, persigue unos fines que, en principio, debemos considerar como francamente aceptables y loables; pero tampoco es menos cierto que en algunas ocasiones no es oportuno establecer, en la regulación de este Código de Justicia Militar, ciertas precisiones que puedan afectar a lo que puedan ser las leyes orgánicas o propias de estos institutos o Cuerpos. Porque esto podría suponer, a lo mejor, una cierta interferencia, y me refiero, por ejemplo, a que ya tenemos una Ley de Policía, a que se va a dictar una ley orgánica de la seguridad ciudadana, etc., y en todos estos aspectos, en cierto modo presuponer o adelantar, a través de la reforma del Código de Justicia Militar, lo que debiera ser el contenido de estos otros Cuerpos legales, entendemos que no sería positivo ni aceptable.

Efectivamente, hay delitos que están tipificados en este Código y también en el Código Penal, porque son dos Cuerpos; y este Código de Justicia Militar tiene un aspecto, que es el penal, que tipifica y delimita lo que

se debe considerar como delitos, exactamente igual que hace, en ciertos sectores, el Código Penal.

Pero si partimos de la base de que, efectivamente, una vez que se ha hecho la tipificación, delito es, la única duda que queda es cuál es la jurisdicción o la justicia que debe tener competencia para referirse sobre el caso concreto de ese delito.

Nosotros creemos que en este supuesto concreto debe ser competencia de la jurisdicción militar, tal y como viene redactado en el texto del artículo y en el dictamen de la Comisión. De ahí que deba anunciar una vez más —y lo lamento, señor Nadal— que no tenemos más remedio que oponernos a este voto particular y, por supuesto, mantenernos, si ganamos con los votos, el texto del dictamen.

El señor PRESIDENTE: Voto particular del Grupo Parlamentario Socialista en correspondencia con la enmienda número 16, que afecta, asimismo, al número 12 de este artículo 16.

El señor Irizar tiene la palabra.

El señor IRIZAR ORTEGA: Señor Presidente, para postular la adición de dos párrafos al número 12 de este artículo 16.

Realmente no entendemos por qué esto ha desaparecido del texto del proyecto; creo que se debió a una intervención en el Congreso de los Diputados del Grupo de Coalición Democrática, que fue aceptada una enmienda por el partido del Gobierno. Y no entendemos esto, decíamos, porque el Gobierno viene aceptando el principio de que, cuando los Cuerpos o Institutos armados actúen y el hecho se realice con motivo u ocasión de las funciones de policía que tenga encomendadas, o cuando el hecho se realice con ocasión de una actuación para mantener el orden público, estén sometidos a la jurisdicción ordinaria, y esto viene siendo aceptado desde hace mucho tiempo. Ya los Pactos de la Moncloa, que se han citado esta mañana como principio y origen de esta ley, prevenían esta posibilidad, y de hecho la legislación vigente está en este sentido.

Y de repente, cuando nos encontramos con esta reforma del Código de Justicia Militar, siguiendo esta norma de conducta del Gobier-

no, en el proyecto que presenta al Congreso de los Diputados se incluyen estos párrafos, creo que más o menos literales de los del proyecto del Gobierno, se aprueban en Comisión y, después, no se aprueban en el Pleno.

Realmente no podemos comprender por qué no se quiere elevar al rango de Ley Orgánica que tiene esta ley el que los institutos armados estén sometidos a la jurisdicción ordinaria cuando ejerzan sus funciones de policía y cuando actúen con ocasión de mantener el orden público, cuando realmente está establecido así en una ley ordinaria, cuando realmente es la propia filosofía del partido del Gobierno, puesto que lo ha venido sosteniendo desde los Pactos de la Moncloa, e incluso en el proyecto de ley.

Nos parece que el elevar el rango normativo de la ley, el hacer una Ley Orgánica, es la forma de consagrar definitivamente este principio, de manera que sea mucho más difícil modificarlo, puesto que así nos remite a una legislación ordinaria que puede ser, indudablemente, más cambiante y puede estar un poco a los avatares de la política diaria, al cambio de jurisdicción de los Institutos y Cuerpos armados cuando actúen en jurisdicciones que no son del Cuerpo policial.

Realmente —y parece que en esto estamos de acuerdo— la función que tienen estos Cuerpos armados debe estar sometida a la jurisdicción ordinaria cuando actúan para mantener el orden público, porque son relaciones de cara a los ciudadanos, de cara a los ciudadanos normales, a los paisanos, como se denomina muchas veces en el Código de Justicia Militar.

Sin embargo, aceptamos que la jurisdicción militar sea la competente en aquellas relaciones de disciplina, en aquellas relaciones de ámbito estrictamente castrense, que, indudablemente, son las relaciones interiores de estos Cuerpos, que tienen una organización militar y que nosotros no discutimos que tenga aplicación la jurisdicción militar dentro de este ámbito interno de la organización de estos Cuerpos armados.

Suponía, para el texto remitido por el Gobierno y que después no fue aprobado en el Congreso de los Diputados, una consagración al máximo rango legal que permite nuestra Constitución, fuera, por supuesto, de la nor-

ma propia y constitucional de este principio, que es importante. Un principio que, indudablemente, está ya consagrado en la legislación ordinaria y que creemos que de esta forma debería mantenerse y consagrarse definitivamente, y lamentamos que no se pudiera aprobar en el Congreso de los Diputados; pero todavía tiene el partido del Gobierno en esta Cámara la oportunidad de, aceptando su propia filosofía, aceptando el propio texto remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados, rectificar y elevarlo a este rango de ley orgánica, admitiendo la enmienda que hoy proponemos a este apartado.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor o en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.) El señor Sánchez Reus, por el grupo de UCD, tiene la palabra.

El señor SANCHEZ REUS: Señor Presidente, Señorías, esta enmienda de adición pretende establecer una serie de circunstancias especiales, según el texto de la misma, en la que se añade: «... y, además, en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias: Que el hecho se realice con motivo u ocasión de las funciones de policía que tenga encomendadas o que el hecho se realice con ocasión de una actuación para mantener el orden público».

Son dos supuestos de hecho, en los que nosotros en principio entendemos que sí cabe la posibilidad de que, dadas esas circunstancias, puedan cometerse delitos por parte de las fuerzas, de los miembros de esos institutos, y que estos delitos sí son comunes. En ese caso, lógicamente, tendrán que estar sometidos, según establece el artículo 16, a la jurisdicción ordinaria. El número 12 de este artículo 16 establece los casos en que, según la ley por la que se rijan, los atribuyan a la jurisdicción ordinaria. Es totalmente coherente el primer párrafo del artículo 16 con el número 12, según la redacción que nos viene dada por el dictamen de la Comisión, y recoge literalmente el texto aprobado por el Congreso.

Estas circunstancias que se pretende introducir aquí, lo mismo que indicaba antes en mis razonamientos al señor Nadal, entiende mi grupo que es mucho más conveniente, más

operativo y quizá mejor que se dejen a las leyes orgánicas de estos Institutos o Cuerpos, que son las que, en definitiva, van a regular el régimen interno de todos los miembros que en ellos se integran.

Por otro lado, tengan en cuenta SS. SS. que estas leyes a las que me estoy refiriendo de estos Institutos o Cuerpos tienen que ser aprobadas por el Parlamento, como es lógico, y una vez que vengan al Parlamento, habrá ocasión y motivo de debatir, de discutir, de fijar posiciones y, naturalmente, tratar de elaborar un texto que sea lo más perfecto posible y que constituya una ley aplicable, conveniente y beneficiosa para todos.

Por supuesto, tengo que adelantar que el Grupo Parlamentario de UCD se opone a este voto particular y, en principio, mantiene el texto del dictamen.

El señor PRESIDENTE: Corresponde someter a votación el voto particular reservado para el texto del artículo 16 del Código de Justicia Militar.

Voto particular del Grupo Parlamentario Cataluña, Democracia y Socialismo, que se corresponde con la enmienda número 14, y referida al apartado primero. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 54, en contra, 68.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Parlamentario Cataluña, Democracia y Socialismo.

Voto particular del mismo Grupo Parlamentario, que se corresponde con la enmienda número 17, y que afecta al apartado 12 del artículo 16. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 51; en contra, 69; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Parlamentario Cataluña, Democracia y Socialismo, correspondiente a la enmienda número 17 al apartado 12 del artículo 16.

Por último, voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, enmienda número 16,

que también afecta al apartado 12 del artículo 16. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 54; en contra, 69.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Socialista, correspondiente a la enmienda número 16, al apartado 12 del artículo 16.

Se somete a votación en su totalidad el artículo 16, según figura en el texto del dictamen de la Comisión.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 69; en contra, 51; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto propuesto por la Comisión para el artículo 16 del Código de Justicia Militar.

El texto propuesto para los artículos 21 y 46 del mismo Código no fueron objeto de votos particulares. Se pueden tratar conjuntamente, y si no hay objeción, la Presidencia propone que sean aprobados por asentimiento de la Cámara. *(Pausa.)* Así se declara.

Artículos 21 y 46 del Código

El artículo 52, en su texto propuesto, tiene un voto particular del Grupo Parlamentario Cataluña, Democracia y Socialismo, que se corresponde con la enmienda número 18, y afecta al apartado 13 de este artículo 52.

Artículo 52 del Código

Tiene la palabra el señor Nadal.

El señor NADAL COMPANYY: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, nosotros proponemos la siguiente adición al número 13 del artículo 52: «... excepto en los que aparezca responsabilidad de un Oficial General, en cuyo caso dará traslado de lo actuado a la Junta de Jefes de Estado Mayor, completada que sea la instrucción y con el informe que sea oportuno».

Esto, en realidad, no es nada extraordinario, ni es ningún invento, porque, en definitiva, está de acuerdo con el texto del proyecto de ley tal como fue presentado por el Gobierno y publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» número 182, de 11 de noviembre de 1978. De manera que creo que no sería mucho pedir esta vez al partido del Gobierno que votara con nosotros. Pero lo vemos

un poco difícil y, por consiguiente, trataré de argumentar brevemente la justificación de esta enmienda.

El problema, como todos los problemas que sugiere una enmienda, es clarsimo. La situación de un Oficial General entre sus compañeros, acusado o sometido a cualquier actuación de disciplina, crea un estado de incomodidad entre los mismos; y este estado de incomodidad creemos nosotros que es superable perfectamente si se eleva a la Junta de Jefes de Estado Mayor, con lo que salimos de una situación que podríamos casi adjetivar de anómala a una situación más procedente y más de acuerdo con el rango del Oficial que en aquel momento es objeto de expediente, de proceso o de la investigación que corresponda.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿Turnos en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Martín Villa por el Grupo de UCD.

El señor MARTÍN VILLA: Cuando hacía la presentación del dictamen de la Comisión decía que tocar parcialmente algún punto de los artículos del Código sin tocarlo en su totalidad, sin tener en cuenta las directrices totales del Código, podía minar los basamentos del mismo. Y esto ocurre justamente con la enmienda que se propone por el Grupo Cataluña, Democracia y Socialismo; porque resulta que el artículo 52 —me parece que está en el Título II, bajo la denominación «Atribuciones judiciales de las autoridades que ejercen jurisdicción»—, que quiere ser modificado en su número 13, sigue, naturalmente, al ordinal 51, y el ordinal 51 habla de todas las autoridades que ejercen jurisdicción, entre las cuales no está la Junta de Jefes de Estado Mayor.

La Junta de Estado Mayor tiene —recordarán las señoras y señores Senadores la discusión aquí— determinadas competencias, según la Ley de Criterios Básicos para la Defensa; tiene incluso el Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor atribuciones de disciplina para los Ejércitos en su conjunto; tiene cada uno de los Jefes de los distintos Ejér-

citos facultades de disciplina para los Ejércitos en su conjunto, pero no facultades de jurisdicción, atribuciones de las autoridades judiciales que ejercen jurisdicción, que son las que se reflejan en el artículo 52, entre las cuales no está la Junta de Jefes de Estado Mayor. Sería un contrasentido atribuir una facultad jurisdiccional a una autoridad, a un organismo que no es autoridad jurisdiccional.

Además hay que poner en relación el artículo 52 con el 517 y siguientes, que son las facultades que se otorgan a determinadas autoridades con jurisdicción, que son los procedimientos previos y los que determinan el artículo 1.000 y siguientes del Código de Justicia Militar.

En cuanto al ejemplo, permítanos el Senador Nadal, es un ejemplo que realmente, como todos los ejemplos, contempla un caso concreto, pero es que ni en el caso concreto yo estimo que sirve, porque los Capitanes Generales o los Generales que se vieran por imperativo de amistad manifiesta, son personas de honor —normalmente lo somos todos— y tendrían la facultad de excluirse en aquel conocimiento y confiar aquel conocimiento o la sustanciación de aquel procedimiento previo, en los procedimientos que determina el artículo 1.000 y siguientes del Código de Justicia Militar, a un compañero en el que no concurriera esta circunstancia.

En su consecuencia, por la incongruencia de su mantenimiento, por las dificultades técnicas y por las razones aludidas, anuncio que nuestro Grupo va a votar en contra de la enmienda emitida por el Grupo Cataluña, Democracia y Socialismo.

El señor PRESIDENTE: Voto particular que se somete a votación. Enmienda número 18 al artículo 52.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 51; en contra, 72.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Parlamentario Cataluña, Democracia y Socialismo, correspondiente a su enmienda número 18 al artículo 52.

¿Votamos en su totalidad el artículo? (Asentimiento.) Se somete a votación el tex-

to propuesto para el artículo 52, según el dictamen de la Comisión.

¿Señores Senadores que votan a favor? (Pausa.) Levantados que fueren todas SS. SS., se puede declarar aprobado por asentimiento de la Cámara el texto del dictamen de la Comisión.

Pasamos a votar los artículos 61 y 84.

Tiene la palabra el señor Ojeda.

El señor OJEDA ESCOBAR: Señor Presidente, para facilitar la votación, la enmienda que el Grupo Parlamentario Socialista Andaluz tiene al artículo 85 pedimos que se dé por retirada y pueda entrar en votación con los artículos 61 y 84.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ojeda. En ese caso, pueden entrar los artículos 61, 84, 85 y 86, puesto que este último tampoco fue objeto de votos particulares. ¿A los cuatro se les puede dar un tratamiento conjunto y entenderse aprobados por asentimiento de la Cámara? (Pausa.) Así se declara respecto a los textos propuestos para los artículos 61, 84, 85 y 86.

En este punto, puesto que ha sido presentado en su oportunidad y en forma un escrito que modifica sustancialmente la dirección que pudiera seguir el debate a partir del artículo 87, vamos a suspender la sesión para reanudarla a las cuatro y media en punto, porque nos queda todavía mucha tarea por delante.

Se suspende la sesión.

Eran las dos y diez minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Proseguimos el debate sobre el dictamen de la Comisión de Justicia e Interior, en relación con el proyecto de Ley Orgánica de modificación parcial del Código de Justicia Militar.

Habíamos suspendido la sesión, una vez aprobado el texto propuesto para el artículo 86 del Código que nos ocupa. Han sido pre-

sentados, oportunamente, de acuerdo con las normas correspondientes de la Presidencia sendos escritos con la firma reglamentaria de los portavoces que afectan a los artículos 87, 89, 122, 123, 124, 125, 126, 127 y 777. Iremos dando cuenta, si a SS. SS. les parece, a medida que vayamos ocupándonos de cada uno de estos artículos. Naturalmente, corresponde hacerlo en primer lugar del que está en turno, que es el artículo 87.

Para este artículo estaban reservados dos votos particulares del Grupo Parlamentario Socialista Andaluz uno, y del Grupo Parlamentario Cataluña, Democracia y Socialismo, correspondiente a sus enmiendas números 21 y 20, respectivamente; pero que cabe deducir, en virtud de los escritos a que me he referido, que ambos votos particulares están retirados y sustituidos por los textos propuestos, repito, con oportunidad por los señores portavoces a cuyo contenido voy a dar lectura.

El artículo 87 quedaría, según los votos particulares, que tal es la consideración que merecen las propuestas hechas en el momento oportuno, de la manera siguiente: «El Consejo se compone de un Presidente, diez Consejeros militares, seis Consejeros togados y el Fiscal togado. El Presidente será Capitán General, Teniente General o Almirante en situación de actividad en todo caso. Los Consejeros militares pertenecerán: seis al Ejército de Tierra, dos al de Mar y dos al de Aire, con categoría, al menos, de General de División o Vicealmirante. Los Consejeros togados serán: tres del Cuerpo Jurídico Militar, uno del Cuerpo Jurídico de la Armada y uno del Cuerpo Jurídico del Aire, y uno más en rotación entre estos dos últimos Cuerpos jurídicos, todos de categoría asimilada a General de División y en situación de activo. El Fiscal será nombrado de entre Consejeros o Ministros togados en situación de actividad. Será Secretario del Consejo un General de Brigada o un Contraalmirante, proveyéndose dicho cargo entre los de tales empleos de los tres Ejércitos en situación de actividad, conforme al turno y por el plazo que se establezca en el Reglamento del Consejo».

Señores portavoces, ¿hay conformidad con el contexto que se ha leído? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Bosque Hita.

Artículos 61,
84, 85 y 86
del Código

Artículo 87
del Código

El señor BOSQUE HITTA: Señor Presidente: Quisiera hacer constar que en el seno de la Comisión la enmienda número 65, que fue presentada por mí al artículo 87, párrafo 6, fue aprobada, aunque en estos momentos parece ser que no se recuerda.

Yo rogaría que antes de tomar una decisión en relación con este párrafo 6 se examinara el texto de la cinta magnetofónica, que creo que recoge la totalidad de cuanto se habla en el seno de las Comisiones. Por lo demás, si algún señor Senador recuerda la aprobación de esta enmienda número 65 al párrafo 6 del artículo 87, le agradecería que, de alguna manera, lo hiciera constar para refrescar la memoria de quienes en este momento lo tienen olvidado.

El señor PRESIDENTE: ¿Quiere repetir el número de la enmienda?

El señor BOSQUE HITTA: Es la número 65. ¿Puedo leer su texto?

El señor PRESIDENTE: Puede hacerlo.

El señor BOSQUE HITTA: A mi modo de ver, debiera decir así: «Será Secretario del Consejo un General de Brigada o un Contralmirante, turnándose por Ejércitos. Dichos cargos de Fiscal y Secretario se proveerán entre los de tales empleos de los tres Ejércitos en situación de actividad, conforme al turno y por el plazo que se establezca en el Reglamento del Consejo».

Como ven, no se cambia en absoluto ninguna situación de fondo ni de composición, sino que, sencillamente, el Fiscal, único que queda en estos momentos, que es el togado, al poder ser de cualquiera de los tres Ejércitos, parece ser que necesita alguna clase de regulación para el turno de los tres Ejércitos en la ocupación de esta plaza de Fiscal togado. Por tanto, si el Secretario, que tiene la misma circunstancia de poder ser de cualquiera de los tres Ejércitos, ha de ser regulado en razón del Reglamento, lógicamente, el Fiscal que queda en estos instantes deben ser también regulados los turnos y plazo de acuerdo con el Reglamento. Este es el fundamento de mi enmienda, en último término.

El señor PRESIDENTE: Como no ha llegado a conocimiento de la Presidencia que la Comisión hubiera designado representantes a los efectos de ostentar el mandato de la propia Comisión, que pudiera ser la persona llamada a clarificar esta circunstancia que promueve el señor Bosque Hita, me permito recabar de los señores ponentes, tanto del Grupo Parlamentario de UCD como del Grupo Parlamentario Socialista, si, efectivamente, la observación que hace el Senador Bosque Hita está llena de razón o, de lo contrario, si hay alguna omisión o laguna en su intervención.

Tiene la palabra el señor Ojeda.

El señor OJEDA ESCOBAR: Señorías, como el señor Presidente sabe y los restantes miembros de la Comisión también, me fue totalmente imposible, por razones que no son del caso, asistir a la reunión de la Comisión; pero, por las notas que tengo de la Ponencia, creo que por unanimidad esta enmienda del señor Bosque Hita fue rechazada. No sé si después fue objeto o no de aceptación por la Comisión. Lo ignoro porque no estuve presente; pero, repito, según las notas creo que esta enmienda no se admitió en ningún momento.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martín Villa.

El señor MARTÍN VILLA (don Emilio): No sólo fue rechazada en Ponencia, sino que en Comisión se votó en bloque el informe de la Ponencia y se aceptó el texto correspondiente al estudio de la Ponencia. En su consecuencia, estamos al escrito que suscribimos los ponentes y que obra en poder de la Mesa del Senado.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra en un último turno el Senador Bosque Hita.

El señor BOSQUE HITTA: Únicamente rogar que se revise la cinta magnetofónica, porque, efectivamente, la enmienda fue rechazada en Ponencia, pero aprobada en Comisión. Es la última operación que realizó la Comisión antes de levantar la sesión.

El señor PRESIDENTE: En todo caso, ese tema queda pendiente a resultas de lo que aparezca. En cualquier supuesto, en principio, hay que estar a lo que acaban de manifestar los ponentes y lo que resulta del dictamen entregado a la Presidencia, y sobre el que, salvo una prueba fehaciente, no puede hacerse rectificación alguna.

Queda, pues, que el artículo 87 aparece definitivamente redactado como texto de la Comisión el que yo acabo de leer anteriormente, conjugando los dos escritos que oportunamente han sido presentados en el trámite previo a la apertura del debate sobre ese dictamen. Se abre, no obstante, como si fuera un voto particular, digamos colectivo, respecto del total del artículo 87.

¿Turno de portavoces? (*Pausa.*) Tiene la palabra el Senador Ojeda, del Grupo Parlamentario Socialista Andaluz.

El señor OJEDA ESCOBAR: Señor Presidente, Señorías, después de largas negociaciones y entrevistas hemos podido llegar a un acuerdo, a una posición en cuanto al artículo 87. Si bien tengo que aclarar al señor Presidente que mi Grupo Parlamentario mantiene una enmienda que no guarda relación con lo que ha sido objeto de transacción o acuerdo, pero incluso como el espíritu de esta enmienda que se mantiene está recogido en otras posteriores, voy a renunciar, sin perjuicio de defenderla en su turno correspondiente.

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Ojeda, ¿va a defender entonces el voto particular, la enmienda número 21?

El señor OJEDA ESCOBAR: Digo que renuncio a la enmienda número 21, porque la diferencia después se recoge. Únicamente voy a apoyar el escrito.

El señor PRESIDENTE: La nota que se me ha pasado dice: «Retirado el voto particular porque está aceptado por el nuevo texto».

El señor OJEDA ESCOBAR: El problema para nosotros esencial era el siguiente: «En los escalones inferiores de la jurisdicción mi-

litar habían desaparecido los Fiscales militares y, en cambio, según el proyecto remitido por el Congreso, se mantenía la figura del Fiscal militar en el órgano superior, en el Consejo Supremo de Justicia Militar. Veíamos que había una contradicción, que no era correcto que habiendo desaparecido en los órganos inferiores se mantuviese en el máximo órgano, teniendo en cuenta que por la categoría que tiene el Consejo Supremo de Justicia Militar ha de conocer de asuntos complejos y era necesario que el Fiscal fuese una persona especializada, una persona perita en Derecho». De aquí que nosotros mantuviésemos la desaparición del Fiscal militar y le sustituyésemos por dos Fiscales togados. Fruto de las negociaciones, de las entrevistas que se han mantenido estos días ha sido llegar a esa fórmula, y, por tanto, vamos a votar apoyándola.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de UCD, el señor Martín Villa.

El señor MARTÍN VILLA: Con la venia, señor Presidente. Diversos problemas suscitaba el artículo; de todas suertes, vamos a circunscribirnos a la figura del Fiscal.

El Código hasta ahora vigente mantiene dos figuras de Fiscales —llamémosle Fiscales-jefes, por utilizar la terminología habitual en la jurisdicción ordinaria—, el Fiscal militar y el Fiscal togado. Mantenía también la duplicidad de Fiscales en el resto de las instancias, y se habían sustituido por Fiscales togados en el sentido de acoplar la pericia de los conocedores del Derecho al ejercicio de la función de Fiscal.

Existían, por otra parte, en cuanto a la jefatura de la Fiscalía, en cuanto a la existencia de los dos Fiscales, razones de todo linaje, que podían incluso mantener la figura del Fiscal militar para aquellas situaciones en que conoce el Consejo Supremo de Justicia Militar y que afectan a situaciones de orden administrativo, de orden disciplinario o gubernativo de los militares. Pero parecía que unas razones de congruencia imponían la postura de aceptar el criterio que se había aceptado en el resto de las asistencias para el Consejo Supremo de Justicia Militar.

Mantenga la tesis socialista la teoría de sostener dos Fiscales togados, y por razón de pura técnica, por una razón de acomodar la justicia militar en cuanto a lo que se refiere al Ministerio Fiscal, a lo que es el Ministerio Fiscal en la jurisdicción ordinaria, pareció a nuestro Grupo Parlamentario más importante el acomodar no sólo las razones de congruencia, sino sostener la unidad en el ejercicio del mando del Ministerio Fiscal; porque, como muy bien conocen SS. SS., el Juez es imparcial, pero el Fiscal obedece órdenes, el Fiscal actúa en defensa de la ley, pero a impulso de la excitación que recibe del Gobierno.

Entonces nos pareció que un Fiscal bifronte, que la existencia de dos Fiscales pugnaba un poco con la unidad de actuación del Ministerio Fiscal, de tal suerte que hemos concebido la enmienda transaccional en el sentido de aceptar de la enmienda socialista que sea un Fiscal perito, un Fiscal togado, pero reduciendo esta dualidad en la primacía, en el frontispicio del Ministerio Fiscal militar a un solo Fiscal militar.

En esto consiste la enmienda transaccional. Naturalmente, al tocar este artículo hay que tocar una serie de ellos que subsidiariamente hablan de los dos Fiscales, y por eso es la larga cita que se hace en el escrito que refleja la mencionada enmienda transaccional de todos los Grupos.

Anuncio, por supuesto, que comprometidos como estamos en virtud de la enmienda transaccional, votaremos por ella en el sentido que la misma refleja. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El señor Ojeda tiene la palabra.

El señor OJEDA ESCOBAR: Para una cuestión de orden; para indicar a la Presidencia que los artículos que se suprimen en la enmienda transaccional sería conveniente que se llevasen al artículo 5º del proyecto de ley, que es donde se recogen todos los artículos del Código de Justicia Militar que se suprimen.

Es una mera observación de técnica legislativa para que quede correcto el proyecto de ley.

El señor PRESIDENTE: Perfectamente. En este caso, procede someter a votación el nuevo texto para el artículo 87 del Código de Justicia Militar en los términos resultantes de la lectura que al principio efectué. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 99; votos en contra, uno.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto resultante para el artículo 87 para incorporación al dictamen de la Comisión en los términos en que se ha producido en el escrito oportunamente formulado por los señores portavoces.

Al artículo 89 había un voto particular del Grupo Parlamentario Cataluña, Democracia y Socialismo, en correspondencia con su enmienda número 20. Creo deducir que este voto particular ha sido retirado como consecuencia del texto al que voy a dar lectura.

Artículo 89 del Código

El señor NADAL COMPANYY: En efecto, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: El texto que se propone para el artículo 89 es el siguiente: «Con dependencia inmediata del Fiscal habrá dos Tenientes Fiscales togados que serán: General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, General Auditor de la Armada o General Auditor del Cuerpo Jurídico del Aire».

Este es el texto que sustituye al que en el dictamen de la Comisión aparecía como propuesta para el artículo 89, y aunque no es obligatorio hablar, abro de nuevo turno de portavoces.

El señor Ojeda tiene la palabra.

El señor OJEDA ESCOBAR: Simplemente, para renunciar. Creo que no es necesario consumir ningún turno, porque las posiciones están perfectamente claras.

El señor PRESIDENTE: ¿Se puede entender aprobado por asentimiento de la Cámara el texto a que he dado lectura, válido para el artículo 89, como incorporado al dictamen de la Comisión? (Pausa.) Por asentimiento de la Cámara así se declara aprobado.

A continuación existe un voto particular del Grupo Parlamentario Socialista Andaluz, correspondiente a su enmienda número 22, que postula la modificación del artículo 91 del propio Código, que no figura incluido en el texto remitido por el Congreso de los Diputados ni, por consiguiente, en el dictamen de la Comisión.

El Senador señor Ojeda tiene la palabra para la defensa de su voto particular.

El señor OJEDA ESCOBAR: Señor Presidente, Señorías, voy a ser muy breve en la defensa de este voto particular que mantiene nuestro Grupo.

El artículo 91 del vigente Código de Justicia Militar dice en su último inciso: «El Consejo, antes de dar posesión a los elegidos—se refiere al Presidente, Consejeros, Fiscal— examinará si reúnen las condiciones necesarias y, de no tenerlas o ser dudosas, suspenderá la posesión dando cuenta al Gobierno».

Pedimos la supresión de este inciso del artículo 91 porque consideramos que mantenerlo es anticonstitucional y que concede al Consejo Supremo de Justicia Militar unas facultades que yo calificaría de exorbitantes. Se me podrá alegar, de contrario, por los representantes del Grupo del Gobierno, que lo único que hace el Consejo es suspender la posesión, no el acuerdo, aunque revista la forma de decreto que es lo que propone una de las enmiendas que tenemos posteriormente e incluso el mismo contenido del Código dice que el nombramiento se hará por decreto; creemos que es conceder facultades exorbitantes al Consejo, el cual, por la vía de suspender la posesión, puede dejar sin cumplimiento un acuerdo del Consejo de Ministros.

Yo pediría al portavoz y a los Senadores de UCD que reconsiderasen este voto particular, que es puramente técnico, que no tiene ninguna trascendencia y ningún trasfondo de tipo político, pero yo creo que es importante que quede esta cuestión clarificada porque, de lo contrario, estamos dando al Consejo Supremo de Justicia Militar la facultad de poder suspender acuerdos del Consejo de Ministros, facultad que únicamente tienen los Tribunales mediante los recursos pertinentes.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor y en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.) Han pedido la palabra los señores Irizar y Martín Villa.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista del Senado, el señor Irizar.

El señor IRIZAR ORTEGA: Para apoyar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista Andaluz y hacer unas precisiones sobre la naturaleza jurídica del Consejo Supremo de Justicia Militar, que es importante tener en cuenta en el momento de ver qué funciones puede tener atribuidas.

El Consejo Supremo de Justicia Militar es un órgano, tal como viene configurado en el Código de Justicia Militar, mitad jurisdiccional y mitad administrativo.

Tiene, evidentemente, unas funciones de tipo jurisdiccional y es el órgano supremo de la Justicia Militar, pero también tiene unas funciones de tipo administrativo, y aquí, al revisar estas decisiones del Gobierno para dar o no posesión a los miembros nombrados por el Gobierno, está ejerciendo unas funciones jurisdiccionales que no le corresponden y no le corresponden porque revisar las decisiones del Gobierno es facultad exclusiva de los Tribunales, de la jurisdicción ordinaria y, concretamente, de la jurisdicción contencioso-administrativa, como jurisdicción especializada dentro de la jurisdicción ordinaria.

Por tanto, entendemos que se quiebra profundamente el principio constitucional de unidad de jurisdicción y que, consiguientemente, es atribuir al Consejo Supremo de Justicia Militar una función de revisar, en el orden judicial, las decisiones del Gobierno.

Por consiguiente —y el propio partido del Gobierno entendemos que es el más interesado— esperamos que esta enmienda prospere, puesto que pudiera establecerse un conflicto, en un momento determinado, entre el Gobierno y el Consejo Supremo de Justicia Militar al suspender éste la posesión de algunos de los miembros nombrados por el Gobierno.

Por tanto, anunciamos el voto favorable para esta enmienda del Grupo Socialista Andaluz.

El señor PRESIDENTE: El señor Martín Villa, del Grupo de UCD, tiene la palabra.

El señor MARTIN VILLA: Con la venia, señor Presidente. Yo creo que hay que distinguir, en buena técnica jurídica, del acto administrativo, de la suspensión del acto administrativo, de la suspensión de los efectos del acto administrativo y del examen de la legalidad del acto administrativo.

La enmienda socialista decía que «el Consejo Supremo de Justicia Militar examinará e impedirá...». Creo que fue un error de transcripción en la enmienda.

Situadas así las cosas, ¿qué es lo que hace el Consejo Supremo de Justicia Militar? Los requisitos para ser Presidente, para ser Consejero, para ser Fiscal, se determinan en el Código de Justicia Militar. El acto del nombramiento del Presidente, de los Consejeros o del Fiscal en el Consejo Supremo de Justicia Militar, no sólo es una disposición discrecional de la Administración, sino que además de la volición de la Administración del nombramiento requiere ciertos requisitos, en algunos casos el tener la Gran Cruz de la Orden de San Hermenegildo, en otros casos el ser titular de dicha Orden, y diversas circunstancias que examinan y que enumeran los artículos correspondientes del Código de Justicia Militar.

Lo que corresponde a la Administración es el acto administrativo del nombramiento; mas si examinada la legalidad del nombramiento, examinados los requisitos personales del nombrado resultare que no concurrían algunos de los que deben de concurrir para su nombramiento porque son inexcusables, parece clara la llamada de atención del Consejo Supremo de Justicia Militar al Gobierno no suspendiendo el acto, sino suspendiendo únicamente la toma de posesión del nombrado a los efectos de que por el Gobierno se regule de alguna suerte la circunstancia que faltaba o se provea nuevo nombramiento.

Por otra parte, en diversos Tribunales administrativos —no digo jurisdiccionales, digo administrativos— está atribuido el examen de esta circunstancias. En su consecuencia, parece claro que la llamada de atención al Gobierno, si no se da en la persona del nombrado la concurrencia de todas o alguna de las circunstancias que son «sine qua non» para su nombramiento, es pertinente Y por consecuencia, la suspensión de la toma de po-

sesión al Gobierno debe figurar en el texto del Código de Justicia Militar para que el Gobierno provea lo que fuere necesario.

Anuncio, pues, que mi Grupo, atendidas estas razones, votará en contra de las enmienda que ha suscitado el Grupo Parlamentario Socialista.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista Andaluz, enmienda número 22, en pos de conseguir la modificación del artículo 91 del Código de Justicia Militar. (Pausa.)

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 41; en contra, 63.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 22 respecto del artículo 91 del Código.

A continuación nos ocuparemos del voto particular del Grupo Parlamentario Catalunya, Democracia i Socialisme, enmienda número 23, por la que se pretende introducir una modificación en el artículo 95 del propio Código

El señor portavoz del Grupo Parlamentario Catalunya, Democracia i Socialisme tiene la palabra.

El señor NADAL COMPANYY: Señoras y señores Senadores, el artículo 95 a estas alturas resulta anacrónico y además anticonstitucional. Corresponde a una época en la que sólo se aceptaba como motivación religiosa la religión católica. Han transcurrido los años, el país se ha vuelto más tolerante, y en estos momentos son reconocidas, además de la religión católica—que yo no voy a discutir sea la mayoritaria porque me encuentro comprendido en la misma—, otras religiones como la mahometana, la judía, los Testigos de Jehová, etc.; de tal manera que, al no indicarse en el Código en el artículo 95, de cuál fiesta religiosa se trata, indudablemente se crea una confusión porque los miembros pertenecientes a cada una de estas religiones se creará que su fiesta es una fiesta inhábil a efectos jurisdiccionales.

Por consiguiente, entendemos que suprimiendo la expresión religiosa introducimos

un notable avance en el Código, lo sintonizamos con la propia Constitución y eliminamos un motivo de confusión más. Nada más.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿Turnos en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces?

Tiene la palabra el señor Ojeda Escobar, del Grupo Socialista Andaluz.

El señor OJEDA ESCOBAR: Señor Presidente, Señorías, muy brevemente, no quiero cansar a la Cámara. Nosotros apoyamos la enmienda del Grupo Parlamentario Cataluña, Democracia y Socialismo incluso en Ponencia y Comisión; propusimos también una fórmula transaccional que yo creo que aún puede ser aceptada por todos. Consiste esta fórmula, o esta enmienda transaccional, en que el artículo 95 diga simplemente: «Todos los días, a excepción de los feriados, se reunirá el Consejo, habiendo asuntos que tratar».

Hemos reiterado los socialistas, y creo que es conveniente recordarlo, que no queremos guerras de religión. Pienso que el país está alcanzando cotas de tolerancia, de comprensión ideológica, religiosa y que crear problemas innecesarios, crear problemas artificiales no nos conduce a nada.

Por tanto, apoyo la enmienda del Grupo Parlamentario Cataluña, Democracia y Socialismo y si el Grupo del Gobierno, dando muestras de magnanimidad y generosidad, está dispuesto a aceptar una fórmula transaccional, yo ofrezco la que he propuesto a la Cámara.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Villar Arregui, del Grupo Parlamentario de UCD.

El señor VILLAR ARREGUI: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, nadie quiere guerras de religión; han pasado, espero que para siempre, a la historia, y hoy, tras la Ley de Libertad Religiosa, nadie está obligado a confesar sus propias creencias.

En principio, no oculto que estaba en la intención de nuestro Grupo mantener el artículo, pero precisamente por evitar la guerra de religión. Si se trata de una modificación sectorial del Código, que sólo afecta a

algunos de sus preceptos y que constituye una revolución mucho más profunda de lo que tal vez se haya podido advertir a través de las intervenciones aquí habidas, porque no se ha hecho memoria suficiente de lo acontecido con motivo de la Ley de Jurisdicciones, parece que entrar a enmendar artículos distintos de aquellos a los que se refiere el proyecto del Gobierno es querer entrar en cuestiones religiosas.

Sin embargo, la elegancia con que el Senador Ojeda ha hecho su planteamiento, su expreso designio de rehuir cualquier contienda que pueda resucitar viejas rencillas que en otro tiempo han dividido a los españoles, y el honesto deseo de armonía, así como el de que los temas religiosos queden exactamente allí donde les corresponde, que es un punto que trasciende y va más allá de cualquier contingencia política y de cualquier contienda entre partidos, nos induce a aceptar el texto que el Senador Ojeda ha propuesto con la expresión de «días feriados», en vez de esa alusión a las fiestas religiosas. Se evita así cualquier equivocidad, porque en un Estado que se proclama pluralista y que en el artículo 2.º de la Constitución establece el pluralismo político como uno de los valores esenciales a los que el ordenamiento jurídico ha de servir, cabría la ambigüedad de averiguar o de interpretar a qué fiestas religiosas se refiere el precepto, y resultaría un tanto anacrónico el tema del Ramadán —pongo por caso—. Entonces si la expresión queda en los términos sugeridos por el señor Senador Ojeda de «días feriados» podría la enmienda ser aceptada en los términos aquí indicados.

El señor PRESIDENTE: Lamento tener que ser entonces el aparente promotor de la guerra de religión, pero, naturalmente, esto no es posible: o se acepta el voto particular en los términos en que viene formulado o se rechaza, pero enmiendas transaccionales al hilo del debate es sabido que no caben. Tendría que haberse hecho antes del comienzo del debate. Lo lamento muchísimos porque no pretendo ser, repito, hombre beligerante en materia de religión. (El señor Ojeda pide la palabra.) El señor Senador Ojeda, ¿qué turno va a consumir?

El señor OJEDA ESCOBAR: Una cuestión de orden.

El señor PRESIDENTE: Su Señoría tiene la palabra.

El señor OJEDA ESCOBAR: Si el señor Presidente me permite habilitar una fórmula para salir de esa situación de «impasse» en que nos pone el Reglamento rígido y estrecho que nos rige hasta ahora. No es la interpretación que hace el señor Presidente, sino que es el Reglamento; tiene el señor Presidente razón. ¿Procedería, señor Presidente, suspender por cinco minutos para presentar un escrito firmado por todos los Grupos en que se enjuicie la enmienda transaccional?

El señor PRESIDENTE: Senador Ojeda, vuelve a ponerme en circunstancias muy difíciles, porque sucede que ese escrito hubiera sido válido presentado, como se ha hecho con el anterior, antes del comienzo del debate; pero nosotros no tenemos ninguna vía por la que introducir, al hilo del debate y como consecuencia del mismo y dentro del mismo, enmiendas transaccionales. Bien que me alegraría a mí poderlo autorizar, pero no es posible, porque ya dije el primer día, y lo reitero ahora, que aquí no manda el Presidente, sino el Reglamento, que el Presidente interpreta, por supuesto, como es notorio, con la mayor benevolencia posible. Pero es que además crearíamos un precedente, y esto sí que es peligroso. *(El señor Ojeda pide la palabra.)*

Tiene la palabra el Senador Ojeda.

El señor OJEDA ESCOBAR: Señor Presidente, con la venia, si me permite un ruego al Grupo de UCD; yo le pediría, aunque sea un sacrificio, que aceptase el voto particular tal como aparece formulado por el Grupo Catalunya, Democracia i Socialisme. No sé si es pedirle demasiado, pero, para salir de la situación, le rogaría ese pequeño sacrificio. *(El señor Villar Arregui pide la palabra.)*

El señor PRESIDENTE: Eso lo vamos a ver en seguida. Senador Villar, acabe pronto, porque vamos a votar. Tiene la palabra.

El señor VILLAR ARREGUI: Gracias, señor Presidente.

Ha habido por nuestra parte un intento conciliatorio absolutamente sincero, absolutamente honesto y desprovisto de cualquier segunda intención.

Ya manifesté antes que no se ha suscitado el tema religioso desde este lado, sino en virtud de una enmienda innovadora que no hace referencia a ninguno de los artículos del Código que el texto del Gobierno había contemplado. En estas circunstancias, y en aras de esa paz religiosa a la que el Senador Ojeda ha aludido, lo coherente no es que votemos la enmienda, que sería tanto como introducir una novación en el texto del Código sin la sustitución correspondientes que aclare el contenido del precepto. Lo coherente, Senador Ojeda, es que las muestras de comprensión que desde aquí se han dado sean respondidas mediante la retirada de la enmienda.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Nadal, para responder a la requisitoria cordial del Senador Villar.

El señor NADAL COMPANYY: Desde luego, señor Presidente. Nosotros sí que no queremos conflictos religiosos a ningún nivel. Por tanto, señor Presidente, en aras de la concordia religiosa, nosotros retiramos la enmienda.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nadal. *(El señor Ojeda pide la palabra.)* Tiene la palabra el Senador Ojeda.

El señor OJEDA ESCOBAR: Perdone, señor Presidente, pero creo recordar, o me recordaban algunos compañeros, que hay un precedente, y yo pediría a los Letrados que comprobasen si es cierto, únicamente a efectos de sentar precedente o doctrina.

Creo que cuando se discutió en esta Cámara la Ley Básica de Empleo, ante una situación parecida, se suspendió la sesión y, mediante escrito y acuerdo de los portavoces de los distintos Grupos, se llegó a una fórmula transaccional admisible para todos. Creo que fue en una de las Disposiciones transitorias.

Me gustaría que, únicamente a efectos doctrinales, se comprobase si es cierto, para que no se suscitasen situaciones parecidas.

El señor PRESIDENTE: Me temo que el recordatorio puede ser mitad oportuno y mitad inoportuno, porque creo, forzando la memoria, que ese precedente, si fuera tal, se produjo sin estar yo ocupando la Presidencia.

Por tanto, vamos a ser precedentes en los precedentes, porque, si no, corremos el riesgo de que estemos jugando con el Reglamento continuamente.

La verdad es que el Senador Nadal, portavoz del Grupo titular del voto particular, lo ha retirado. La Presidencia se lo agradece, porque ya he dicho que en tal supuesto, de no haberlo hecho, podría ser el Presidente el único que mantuviera la guerra de religión, y nada más lejos de mi ánimo ni de mi carácter. Queda, pues, retirado el voto particular.

Artículo 101 del Código

El texto propuesto para el artículo 101 del Código de Justicia Militar no ha sido objeto de votos particulares. Procede, por tanto, someterlo a votación, y la Presidencia propone que sea aceptado por asentimiento de la Cámara el texto del dictamen. *(Pausa.)* Así se declara.

Artículo 107 del Código

Al artículo 107 hay mantenido un voto particular del Grupo Socialista correspondiente a la enmienda número 25, que postula la supresión del apartado número 5 de la segunda mitad de este artículo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, señor Irizar.

El señor IRIZAR ORTEGA: Con mucha brevedad. Existe aquí un voto particular del Grupo Socialista que propone la supresión del párrafo número 5 de la segunda parte del artículo 107, que, en definitiva, viene a decirnos que será competencia de la Sala de Justicia del Consejo Supremo de Justicia Militar el enjuiciar los delitos propios de la jurisdicción militar seguidos «contra Directores generales, Ministros plenipotenciarios, Gobernadores civiles y cualquier persona que por razón de su jerarquía civil esté sometida por leyes especiales a la jurisdicción del Consejo Supremo». Realmente, por razón de su jerarquía civil no hay, o no debe haber, nadie sometido a la jurisdicción del Consejo Su-

premo de Justicia Militar, por ninguna ley especial quiero decir.

Entendemos que este inciso o párrafo, que pudo tener su sentido en la antigua redacción del Código, de donde parece totalmente calcada, no tiene sentido dentro de la reforma al Código de Justicia Militar, puesto que hay una serie de normas que excluyen concretamente a los Gobernadores Civiles, los cuales tienen una jurisdicción o un fuero especial por razón del cargo.

Por lo demás, entendemos que nunca las autoridades civiles, en tal concepto, pueden estar sometidas al Código de Justicia Militar ni a la jurisdicción militar, puesto que nunca los civiles, por razón de la persona o del cargo, pueden estar sometidos a la jurisdicción militar. Es un precepto anacrónico, dentro de la pésima sistemática del artículo, que después de citar una serie de causas, vuelve a citar otras, en vez de seguir un orden; pero esto no puede ser objeto de revisión, aunque sí solicitamos que se retire del proyecto de ley este párrafo número 5, se suprima el mismo, por entender que no tiene sentido alguno en la redacción actual del Código de Justicia Militar.

El señor PRESIDENTE: Turnos a favor o en contra. *(Pausa.)* Señores portavoces. *(Pausa.)* El Senador Sánchez Reus, del Grupo de UCD, tiene la palabra.

El señor SANCHEZ REUS: Señor Presidente, Señorías, efectivamente, el artículo 107 se refiere a las competencias o funciones que corresponden a la Sala de Justicia del Consejo Supremo de Justicia Militar.

Entiende nuestro Grupo que aquí estamos en presencia de una norma adjetiva procesal, que no es una norma sustantiva de ninguna manera, porque el Título I del Código de Justicia Militar es el que trata de la competencia de la jurisdicción militar, y este artículo 107, al que se refiere la enmienda relativa al número 5 del mismo, habla de la organización y atribuciones del Consejo Supremo de Justicia Militar. Por tanto, entendemos que no es una norma sustantiva que atribuya competencias de ninguna manera, sino que es una norma adjetiva de distribución de trabajo.

Es cierto, como decía el representante del Partido Socialista, que determinadas autoridades civiles no deben estar sometidas a la jurisdicción militar, porque hay que entender que deben tener un fuero especial; pero, a título de ejemplo, no es menos cierto que esas autoridades civiles, aunque tengan, efectivamente, un fuero especial, y vamos a suponer el caso de un Gobernador Civil, pueden cometer un delito de traición. Pueden cometerlo perfectamente, y en este supuesto sí debe ser competencia de la Sala de Justicia poder entender en este delito de traición, que entraría dentro de la órbita de la competencia de la jurisdicción militar.

Por todo ello, y lamentándolo mucho porque es muy desagradable esta labor de tener que negar el voto cuando se presentan enmiendas o votos particulares, tengo que adelantar que el Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático votará en contra de este voto particular y considera que este número 5 del artículo 107 debe quedar redactado según el texto que del mismo consta.

Nada más, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 25, respecto del artículo 107. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; en contra, 59.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular al artículo 107.

Se somete a votación el texto que del artículo 107 propone la Comisión. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 59; abstenciones, 41.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto propuesto para el artículo 107 en el dictamen de la Comisión.

Sigue un voto particular del Grupo Socialista Andaluz, correspondiente a la enmienda número 27, por el que se promueve la redacción del artículo 116, no incluido en el texto remitido por el Congreso de los Diputados.

El portavoz del Grupo Socialista Andaluz, señor Ojeda, tiene la palabra.

El señor OJEDA ESCOBAR: Señor Presidente, Señorías, en efecto, pretendemos una nueva redacción para el artículo 116 que no está incluido en el proyecto remitido por el Gobierno.

El artículo 116 del vigente Código de Justicia Militar trata de la designación del Presidente del Consejo y establece una serie de requisitos y condiciones para serlo. A nuestro entender, ofrecemos una nueva redacción más técnica y más acorde.

El artículo 116, como digo, es un precepto anticuado, un precepto sobrepasado por los tiempos en algunos de los requisitos exigidos para ser Presidente. Las razones para mantener nuestra enmienda son las siguientes.

En primer lugar, establece un expediente previo de idoneidad para determinar su nombramiento. En segundo lugar, establece un trámite de audiencia al Consejo General del Poder Judicial. Hay que tener en cuenta que el artículo 117, 5, de la Constitución establece la unidad de jurisdicción, y que la jurisdicción militar es una jurisdicción especial, una jurisdicción delegada y una jurisdicción residual. Pero es que, además, la redacción que con nuestra enmienda pretendemos sea aprobada por esta Cámara en sustitución del vigente artículo 116, coincide exactamente con la Disposición adicional primera del proyecto que en su día remitió el Gobierno, y que decía: «Para el nombramiento de Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar y de sus consejeros, se instruirá previo expediente de idoneidad, oyéndose al Consejo Superior Judicial...» (hago una observación a SS. SS., y es que la remisión por el Gobierno se hizo en noviembre de 1978 y todavía no se sabía que el Consejo General del Poder Judicial tendría esta denominación) «... y al Ministro de Justicia, haciéndose la designación a propuesta del Ministro de Defensa en Real Decreto de S. M. el Rey, previa deliberación y acuerdo del Consejo de Ministros».

Después de esta coincidencia, que saco aquí a colación para conocimiento de S. S., el Gobierno y su partido han modificado su posición, sin que sepamos las causas.

Pero es que, además, la posibilidad de que sea un general sin reunir los mismos requisitos que exige el artículo 116, tiene un precedente, no para el caso de designación de Pre-

sidente o consejero del Consejo Supremo de Justicia Militar, sino para la designación del Jefe del Alto Estado Mayor, para el que se promovió a un General y hubo que ascenderlo automáticamente, coincidiendo nuestra enmienda con este precedente.

Por ello, para facilitar al Gobierno que pueda designar como Presidente un General con unas condiciones especiales de idoneidad, defendemos y mantenemos nuestra enmienda, y esperamos que se comprendan las razones y que sea votada favorablemente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces?

Tiene la palabra el señor Martín Villa.

El señor MARTIN VILLA: Con la venia, señor Presidente, la enmienda que presenta el Grupo Socialista tiene dos apoyaturas. La primera, que sea nombrado un General, así se dice textualmente, y la segunda, que sea escuchado el Consejo General del Poder Judicial.

Vamos con la primera. Yo creo que lo que quiere decir —y no trato de hacer hermenéutica de las intenciones del Grupo Socialista de Andalucía—, lo que quiere decir, repito, es que sea un Oficial General, porque un General a secas y excluir a los Capitanes y Tenientes Generales del honor, la posibilidad y el servicio de ser Presidentes del Consejo Supremo de Justicia Militar, me parece que no entra en las intenciones del Grupo Socialista.

El artículo que comentamos, que es el 116, habla de las condiciones que se requieren para ser Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. Parece que es un puesto, justamente porque es una jurisdicción especial (después hablaremos de esto), porque entiendo que no es una jurisdicción delegada, ni es una jurisdicción residual), es un honor, justamente, el de presidir un Consejo que es la cabeza de una jurisdicción especial, que se reserva a los Capitanes Generales, que sin más requisito, «per se», y por ser Capitanes Generales, tienen ya la calificación «a priori», la mínima, no la suficiente, para ser Presidentes del Consejo Supremo de Justicia Militar. Y después los Tenientes Generales, reuniendo determinados requisitos. Sé que en la familia

militar ser Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar es uno de los puestos de servicio y de honor más importante. Supongo que debe estar reservado para todos aquellos que ocupen la cabecera de los escalafones militares. Y así debe ser, por cuestión de servicio y por cuestión de honor.

Vamos a la segunda de las propuestas de la enmienda del Grupo Socialista. Decía yo esta mañana, cuando explicaba desde el podium la distinta filosofía, a la que cordialmente parece que aludió el Senador Ojeda, que la jurisdicción militar no es una especialidad de la jurisdicción, es una jurisdicción especial, y esto lo digo a la vista de la Constitución. Existe la jurisdicción ordinaria y existe la jurisdicción especial militar. Sin que ésta sea ni una jurisdicción delegada de aquélla, ni, por supuesto, sea una jurisdicción residual, porque el que sea o no sea jurisdicción de residuo, tendrá que determinado los tiempos; ahora, y a la luz de nuestra Constitución, que es la norma de las normas, el pináculo de la cúspide donde se asientan todas las demás leyes españolas, la ley primordial, la jurisdicción militar (y aquí sí que no caben interpretaciones equívocas, porque la hermenéutica es bien clara) es una jurisdicción especial, no es ni una jurisdicción delegada ni es una jurisdicción residual. Mientras la Constitución esté así y no la reformemos, sigo insistiendo en la existencia de la jurisdicción militar como jurisdicción especial, distinta y separada de la jurisdicción ordinaria, aunque la justicia incida en una cúspide que es la Constitución y la Corona.

Puestas las cosas así —y no vamos a hacer ahora pedagogía sobre la doctrina de separación de poderes—, la jurisdicción militar, que está orgánicamente incardinada en el Ministerio de Defensa, no tiene un canal de comunicación a efectos de determinar quiénes han de dirigirla en el Consejo Judicial, y puede figurarse el Senador Ojeda y todos los señores Senadores el respeto que quien se dedica a auxiliar la Administración de Justicia desde el humilde puesto de abogado, tiene por el Consejo Judicial y tiene por toda la Judicatura, por el Tribunal Supremo y por el Fiscal del Tribunal Supremo, pero las cosas son completamente distintas. A la luz de la jurisdicción, justamente por ser jurisdicción es-

pecial, a la luz de la Constitución, la jurisdicción militar, en el nombramiento de Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar no tiene por qué ser consultado, ni ser oído, el Consejo del Poder Judicial.

En este sentido, en cuanto a la primera parte, entendemos que un Capitán o un Teniente General, por razón de honor y de servicio, puede y debe ser Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. En cuanto al segundo requisito, por el concepto de jurisdicción especial que tiene la militar, vamos a votar en contra de la propuesta que contiene la enmienda, digamos en términos de abogado, de contrario.

El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación la enmienda número 27, del Grupo Parlamentario Socialista Andaluz.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; en contra, 58.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista Andaluz (enmienda número 27). Existe otro voto particular del mismo Grupo Parlamentario (enmienda número 28), que propone una nueva redacción del artículo 118, tampoco incluida en el dictamen de la Comisión correspondiente.

Tiene la palabra el señor Ojeda.

El señor OJEDA ESCOBAR: Señor Presidente, Señorías, esta enmienda tiene la misma justificación y fundamentación que la anterior. Yo creo que, o no me he sabido explicar, o no se me ha entendido.

El objetivo que persiguen estas enmiendas es facilitar al Gobierno la designación y elección de los componentes del Consejo Supremo de Justicia Militar con el objeto de introducir, si es necesario, si las circunstancias del país lo exigen, aires nuevos, personas jóvenes, acordes con las circunstancias en que vive el país.

He hecho una pregunta, he planteado una cuestión, y el mismo Gobierno, cuando remite el proyecto de ley del 15 de noviembre de 1978, en sus Disposiciones adicionales, recoge exactamente lo que dicen nuestras enmien-

das; después se ha producido un cambio, he preguntado si se me podía responder por qué causa y a qué se debía ese cambio y no he obtenido respuesta.

Para finalizar, señor Presidente, quiero decir que, como las enmiendas números 28, 29 y 30 tienen la misma fundamentación y justificación que la número 27, y me temo que puedan seguir la misma suerte si no hay un cambio en la contestación del portavoz de UCD —que preveo no la va a haber— deben considerarse retiradas.

El señor PRESIDENTE: Entonces, señor Senador, ¿queda también retirada la enmienda número 28? *(El señor Ojeda hace signos de asentimiento.)*

Quedan retiradas, pues, los votos correlativos a las enmiendas números 28, 29, que afectaba a un precepto del Código de Justicia Militar no incluido en el dictamen de la Comisión; y 30, que sí tenía relación con el artículo 123, que está incluido en el dictamen.

Entretanto, debo recordar a la Cámara que el artículo 122 irá al 5.º del dictamen entre los suprimidos, según el escrito que me han entregado en tiempo oportuno los señores portavoces. En el artículo 123, pese a que había reservado un voto particular del Grupo Parlamentario Socialista Andaluz, que acaba de ser retirado, sin embargo, habrá de entenderse válido el voto particular que consiste en la supresión del vocablo «togado», según se me ha notificado en el escrito que me han remitido los señores portavoces relativo al mencionado artículo 123.

Tiene la palabra el señor Ojeda.

El señor OJEDA ESCOBAR: Como el proyecto de ley es tan complicado, en el sentido de que el artículo 1.º del proyecto recoge los artículos que se van a modificar y el voto transaccional en el acuerdo a que hemos llegado, pregunto a mi querido compañero el Senador Martín Villa si no habría que incluir entre los párrafos a suprimir del artículo 129 el que se refiere a los Tenientes Fiscales militares

El señor MARTIN VILLA: Con la venia, señor Presidente. Permítame el Senador que consulte el texto. *(Pausa.)*

Artículo 123
del Código

Habrá que incluirlo exclusivamente en cuanto se refiere al párrafo primero.

El señor PRESIDENTE: Lo daremos por incluido en el escrito como si se hubiera presentado oportunamente, pero que nadie me recuerde el precedente, por favor. Realmente, se trata de una inclusión que viene arrastrada por las que ya han sido aceptadas por la Cámara.

En ese caso, el artículo 123 del Código de Justicia Militar queda aprobado por asentimiento de la Cámara con la sola modificación de suprimirse el vocablo «togado» en su texto, una vez retirado el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista Andaluz (enmienda número 30). ¿Es así? (*Asentimiento*.) Así se declara. El texto aprobado para el artículo 123 del Código de Justicia Militar es el resultado del dictamen de la Comisión con la supresión del vocablo «togado».

Artículo 124 del Código El artículo 124, igualmente incluido en el escrito que viene a modificar el dictamen de la Comisión, consiste esa modificación en sustituir la expresión «los Fiscales serán» por «el Fiscal será». Y los vocablos «tomarán asiento» por «tomará asiento». ¿Correcto? (*Asentimiento*.)

¿Se entiende aprobado en estos términos por asentimiento de la Cámara el artículo 124? (*Asentimiento*.) Así se declara.

Artículo 125 del Código El artículo 125 tendrá como modificación la sustitución de la expresión «cuando los Fiscales asistan» por «cuando el Fiscal asista». ¿Está conforme la Cámara? (*Asentimiento*.) Así se declara.

Artículo 126 del Código El artículo 126, en su párrafo primero, sufrirá la siguiente modificación: «En los asuntos que hayan de verse en el Pleno se dará audiencia al Fiscal». Y quedará suprimido el resto de sus párrafos.

Por consiguiente, señor Secretario, en el artículo 5.º en que se relacionan las supresiones, habrán de incluirse todos los párrafos del artículo 126, salvo el primero. ¿Está conforme la Cámara? (*Asentimiento*.) Así se proclama.

Artículo 127 del Código Con respecto al artículo 127, el texto propuesto por el dictamen tenía un voto particular del Grupo Parlamentario Catalunya, Democracia i Socialisme (enmienda número 20), que postulaba la supresión del párrafo inicial

del punto segundo. De tal suerte, que, al aprobarse la citada supresión, habrá que hacer el oportuno corrimiento de los apartados siguientes, así como del actual párrafo tercero, que pasaría a ser el segundo.

Debo entender que el texto incluido en el escrito oportunamente entregado a la Presidencia, y dirigido a la Mesa, sustituye definitivamente y anula el voto particular. Por tanto, procede que el señor Secretario dé lectura al artículo 127

El señor SECRETARIO (López Henares): Artículo 127. El primer inciso dirá: «Corresponde al Fiscal del Consejo: primero, pedir la aplicación de las leyes en los asuntos en que estén llamados a intervenir.

»Segundo. Poner en conocimiento del Consejo los abusos e irregularidades que aprecien y consideren que aquél tiene competencia para remediar, sin perjuicio de poder dirigirse directamente al Gobierno en otro caso.

»Tercero. Someter al Consejo las mociones que consideren convenientes.

»Cuarto. Recibir directamente del Gobierno las órdenes e instrucciones que éste considere oportunas para la rigurosa aplicación de las leyes, la defensa de los intereses y derechos de la nación, de los Ejércitos y de los poderes del Rey, de los que darán conocimiento al Consejo Supremo.

»Quinto. Formular las propuestas correspondientes para el nombramiento de los Tenientes Fiscales.

»Sexto. Cumplir los demás deberes que les impongan las leyes.

»II. Además le corresponderá:

»Primero. Proponer la acción de la justicia en la jurisdicción militar.

»Segundo. Sostener la integridad de la jurisdicción militar con arreglo a las leyes.

»Tercero. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y ordenanzas y disposiciones relativas a la justicia militar.

»Cuarto. Proponer las correcciones disciplinarias en los casos que corresponda.

»Quinto. Redactar al principio de cada año judicial una memoria dirigida a la Presidencia del Gobierno y al Ministro de Defensa en la que exponga cuanto considere pertinente en relación con la justicia militar durante el

año anterior e indique las cuestiones que se hayan suscitado y las reformas que puedan introducirse.

»Sexto. Formar anualmente la estadística general de las causas criminales concluidas por sentencia firme y de los sobreseimientos de inhibiciones que se hubieran acordado por la jurisdicción militar.

»Séptimo. Sin perjuicio de la plena integridad de las atribuciones que corresponde a las autoridades judiciales militares, el Fiscal togado tendrá también facultades directivas, inspectoras y disciplinarias sobre todos los miembros del Ministerio Fiscal jurídico-militar, a cuyo efecto dirigirá a cada fiscalía las instrucciones que juzgue convenientes para mejor desempeño de su misión, de las que conferirá traslado a la autoridad judicial respectiva a los solos efectos de su noticia, y de las que dará también conocimiento al Consejo.

»III. El Fiscal, por decisión del Gobierno, a estimación del Consejo Supremo o por propia iniciativa, podrá designar a uno de los Tenientes Fiscales, miembros de la fiscalía, o a uno de los Fiscales jurídico-militares de los Ejércitos, según proceda, para que inspeccione e intervenga ejerciendo las funciones fiscales en alguna causa o actuación determinada. Del nombramiento dará cuenta el Ministro de Defensa, al Consejo y, en su caso, a la autoridad judicial a la que le corresponda conocer del procedimiento».

El señor PRESIDENTE: ¿Queda ilustrada la Cámara en relación con el contenido que, si a continuación es aprobado por asentimiento de la Cámara, como propone la Presidencia, llevará definitivamente el artículo 127 propuesto al nuevo texto del Código de Justicia Militar? (Pausa.) ¿Se puede entender aprobado este texto por el asentimiento de la Cámara? (Asentimiento.) Así se declara.

Artículos 136, 137, 140, 141, 154, 155, 156, 157, 164, 165, 171, 172, 185, 186, 187, 189, 190, 194, 197, 209, 218, 223, 224, 224, 231, 245, 256, 258, 262, 286, 312, 314 y 316 del propio Código que no han sido objeto de votos particulares. Procede, por tanto, someterlos a votación. ¿Alguna observación, Senador Ojeda?

El señor OJEDA ESCOBAR: Señor Presidente, ¿cuál es el último artículo que ha citado?

El señor PRESIDENTE: El 316.

El señor OJEDA ESCOBAR: Conforme. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Procede, por tanto, someterlos directamente a votación, si no hay inconveniente, con tratamiento conjunto si no hay dificultad por parte de SS. SS., ¿se acepta la propuesta que la Presidencia hace por asentimiento de la Cámara? (Pausa.) Sin embargo, debe adecuarse el artículo 171 a su verdadero sentido, porque se ha detectado una errata. El artículo 171, en el párrafo tercero, cuando establece las sanciones por vía disciplinaria a los abogados defensores dice: «Advertencia, apercibimiento, multa de 250 a 1.000 pesetas». Debe decir: «De 10.000 a 50.000 pesetas», según el texto originario. ¿Conformes? (Asentimiento.)

Con esta corrección, y por asentimiento de la Cámara, se tiene por aprobado el texto propuesto para este paquete de artículos que antes señalé.

Llegamos al artículo 317, para el que existe un voto particular del Grupo Parlamentario Cataluña, Democracia y Socialismo en correspondencia con la enmienda número 32. Tiene la palabra el señor Nadal.

Artículo 317 del Código

El señor NADAL COMPANYY: Quisiera hacer, con todo respeto, una observación a la Presidencia y a todos los compañeros, y es que mientras nosotros estamos imprimiendo al debate una extraordinaria sobriedad, por parte de nuestros contraopinantes, cronómetro en mano, se nos está doblando en tiempo. En fin, si es que hay algún exceso por nuestra parte, supongo que nos perdonarán nuestros queridos compañeros, pero espero que en el futuro empleen el mismo tiempo, aproximadamente, del que empleamos nosotros. No será pedir mucho.

Y vamos a ver si en este artículo emplean el mismo tiempo que yo. Es una competición. A ver quién la gana (Risas.)

Se propone suprimir la última frase «o un acuartelamiento, recinto o lugar militar». La

motivación: no puede homologarse la injuria a quien está mandando una tropa formada con la injuria a un militar, que incluso puede carecer de graduación, realizada en el transcurso de una conversación acalorada tenida en un acuartelamiento.

Vamos a ver qué resultado da la apuesta. Nada más.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿En contra? (Pausa) ¿Turno de portavoces? Tiene la palabra el señor Sánchez Reus.

El señor SANCHEZ REUS: Señor Presidente, Señorías, lamento tremendamente no poder atender la invitación que me ha formulado el Senador señor Nadal, pero él sabe, exactamente igual que yo, o mejor que yo, que quizá este artículo 317 sea la pieza maestra de toda la reforma del Código de Justicia Militar.

A partir de esta presuposición, yo quiero, naturalmente, consumir, no todo el tiempo que el Reglamento me permite, pero sí, quizá, algunos segundos o minutos más que el Senador que me ha precedido en el uso de la palabra

Esta modificación que se ha introducido al artículo 317, tal y como viene redactado en el texto del dictamen de la Comisión, supone, prácticamente y de hecho, la derogación de aquella ley de 1906, que tantos quebraderos de cabeza y tantos conflictos y tantas tensiones generó durante bastantes años.

Con esta enmienda, lógicamente, también estamos en presencia de criterios o filosofías no coincidentes. La oposición sostiene que la competencia no debe ir nunca determinada por razones de lugar y pensamos que manteniéndose como se mantiene la estructura del Código, que no digo que sistemáticamente sea perfecta, al contrario, hemos reconocido en reiteradas ocasiones a lo largo del debate que la técnica y la sistemática de este Código no es buena y es necesario que se dicte otro Código, u otra serie de leyes o disposiciones que lo sustituyan, pero no es éste el caso de esta reforma concreta y parcial de determinados artículos del Código de Justicia Militar. Y, naturalmente, partiendo de que, efectivamente, sobre la sistemática del Cód-

go se establece competencia por razón del delito, por razón de la persona y por razón del lugar, este artículo 317 en base a esa competencia, por razón del lugar, necesariamente tiene que quedar redactado tal y como venía.

Solamente, dice el actual artículo 317, hay tres supuestos en los que siempre que el culpable fuese militar, o cuando se produzca ante un mando en presencia de sus tropas o en acuartelamiento, recinto o lugar militar, será competente la Jurisdicción Militar.

Decía un ilustre Diputado, y precisamente miembro de uno de los Grupos Socialistas del Congreso, que si se entra en un cuartel para insultar a las Fuerzas Armadas, se debe actuar con toda dureza. Esto lo dice literalmente el «Diario de Sesiones» de los debates del Pleno del Congreso. Coincidimos totalmente con este criterio.

Añadía, a continuación: «Estos tres supuestos que siguen aforados son tres supuestos mínimos». Lógicamente, después de haber expuesto aquí estas ideas (y lamento, señor Nadal, que tenga que ser siempre yo el que tenga que decirle que vamos a votar en contra de sus votos particulares), una vez más le anticipo que el Grupo de UCD considera que la redacción del artículo 317 es la adecuada y la correcta en estos momentos y que, por tanto, vamos a rechazar ese voto particular.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el voto particular del Grupo Parlamentario Catalunya, Democracia i Socialisme, respecto del artículo 317, enmienda número 32. (Pausa.)

Efectuada la votación fue rechazado el voto particular por 31 votos a favor y 57 en contra.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el texto que para el artículo 317 propone el dictamen de la Comisión

¿Se declara aprobado por asentimiento de la Cámara? (Asentimiento.) Así se declara.

El texto propuesto para el artículo 328 del Código no tiene votos particulares. Procede, por tanto, someterlo directamente a votación.

**Artículo 328
del Código**

¿Se acepta la propuesta de aprobación por asentimiento de la Cámara? (*Asentimiento.*) Así se proclama.

Voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, enmienda número 33, que postula la modificación del artículo 387, excluido del proyecto inicial y del dictamen de la Comisión.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Irizar, tiene la palabra.

El señor IRIZAR ORTEGA: Señor Presidente, Señorías, el artículo 387 del Código de Justicia Militar en definitiva está describiendo y tipificando un delito típicamente común; es el delito de la usurpación de funciones, que está tipificado en el Código Penal en sus artículos 320, 321, 323 y 324. Incluso el Código Penal vigente describe con mayor profusión el delito de usurpación de funciones.

Nosotros entendemos que el simple uso del uniforme militar en tiempos de paz evidentemente puede ser constitutivo de un delito de usurpación de funciones, pero es un delito que debe estar sometido, también, a la jurisdicción ordinaria cuando se realiza en tiempos de paz. No así, porque puede tener unas connotaciones diferentes, cuando este uso del uniforme militar, y, por tanto, la comisión de este delito que está en nuestros Códigos Penales desde hace mucho tiempo, se comete en tiempos de guerra. Razón por la cual hemos propuesto no la supresión del artículo, sino que se añada la frase «en tiempo de guerra o en estado de sitio», para de esta forma, cuando este uso indebido del uniforme militar se cometa en tiempo de paz, pase a la jurisdicción ordinaria, como cualquier usurpación de funciones de la profesión que sea y que, si se comete en tiempo de guerra o en estado de sitio, pase a la jurisdicción militar.

Creemos que esto es lo justo y adecuado y, por consiguiente, formulamos este voto particular.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor? (*Pausa.*)

¿Turnos en contra? (*Pausa.*)

¿Portavoces? (*Pausa.*) El señor Sánchez Reus, de UCD, tiene la palabra.

El señor SANCHEZ REUS: Señor Presidente, Señorías, la enmienda presentada por el Partido Socialista pretende diferenciar, en relación con el tratamiento que se debe dar al delito, según éste se cometa en tiempos de paz o en tiempos de guerra. Nosotros entendemos que estamos, en cualquier caso, en presencia de una conducta o de un comportamiento que es delictivo y, por tanto, estamos en presencia de un delito. Quien comete este delito está agrediendo y ofendiendo al Ejército. De eso no cabe la menor duda, por supuesto. Y a mayor abundamiento también entendemos que debe ser competente el estamento militar en cualquier situación, sea en tiempo de guerra o sea en tiempo de paz.

El que se viste de militar o ejerce actos propios de la profesión militar, es decir, la usurpación de funciones, sin ser militar, por supuesto, está, y permítaseme decirlo, provocando la actuación de la jurisdicción militar, y, por tanto, el Grupo de UCD entiende que debe mantenerse el texto que viene y no debe aceptarse este voto particular. Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, enmienda número 33. (*Pausa.*)

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en contra, 58.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular, enmienda número 33.

El texto propuesto para el artículo 405 del Código de Justicia Militar no ha sido objeto de votos particulares. ¿Se entiende aprobado por asentimiento de la Cámara? (*Asentimiento.*) Así se declara. Artículo 405 del Código

Voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, enmienda número 34, por el que postula la modificación del artículo 408. También una novedad en cuanto a que no está incluido en el dictamen de la Comisión.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Irizar.

El señor IRIZAR ORTEGA: Sería impertinente repetir los mismos argumentos que en

el voto particular anterior, puesto que realmente la base es la misma.

Si decíamos que el delito de usurpación de funciones está previsto en el Código Penal vigente, también el delito de allanamiento de morada está perfectamente tipificado en el artículo 490 del Código Penal, y por las mismas razones es por lo que hemos propuesto este voto particular y por lo que nos ahorramos repetirlas.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿En contra? (Pausa.) ¿portavoces? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Sánchez Reus, por el Grupo Parlamentario de UCD.

El señor SANCHEZ REUS: Lo mismo que el razonamiento para defender este voto particular por parte del Grupo enmendante ha sido prácticamente reproducido en cuanto a lo expuesto en la intervención anterior, por las mismas razones y los mismos argumentos que anteriormente han sido expuestos el Grupo de UCD va a votar en contra porque entiende que no debe haber motivo de distinción, sea en tiempo de guerra o sea en tiempo de paz, puesto que el delito se comete y debe ser la jurisdicción militar, tal como está la estructura y sistemática del Código de Justicia Militar actual, quien tenga la competencia para intervenir.

Por tanto, votaremos en contra de este voto particular.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, enmienda número 34. (Pausa.)

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 55.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, enmienda número 34.

El texto propuesto para los artículos 415, 416 y 424 no ha sido objeto de votos particulares. ¿Alguna dificultad para que se traten conjuntamente? (Pausa.) ¿Aprobados por asentimiento de la Cámara? (Asentimiento.) Así se declara expresamente.

Texto propuesto para el artículo 437. Hay dos votos particulares, el primero del Grupo Socialista, enmienda número 35, que afecta a la letra b) del número 4 de este artículo.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Irizar.

El señor IRIZAR ORTEGA: El voto particular que defendemos ahora no tiene unas motivaciones similares; se trata simplemente de sustituir la palabra «antagonismo» por la expresión «grave enfrentamiento».

Nosotros pensamos que el antagonismo, en definitiva, entre los distintos estamentos del Ejército o distintas fuerzas, siempre que esto sea en una competición leal, una competición por superarse o por mejorar las virtudes militares de la disciplina y en los diversos logros, puede ser hasta bueno; pueden sostenerse incluso posturas distintas y contrarias dentro, siempre, de la disciplina militar y del acatamiento y el respeto debido a las instituciones y a los propios Ejércitos.

Sin embargo, el grave enfrentamiento puede ser peligroso y, por tanto, sí debe estar incluido en este artículo.

Por supuesto, debemos entender, no como se ha entendido en Comisión y en Ponencia, que el grave enfrentamiento entre las distintas Armas no se trataría, ni mucho menos, de un enfrentamiento armado, como parece ser que se nos decía que pretendía nuestra enmienda, sino que, por supuesto, hablamos siempre de un enfrentamiento dialéctico grave: injurias, etc. Por consiguiente, creemos que la sustitución de la palabra «antagonismo» por «grave enfrentamiento» sería conveniente en la redacción de este artículo.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿En contra? (Pausa.) ¿Portavoces? (Pausa.) Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de UCD, el Senador Sánchez Torres.

El señor SANCHEZ TORRES: Muy brevemente. El artículo de referencia señala que será castigado con arresto el militar que incurra en alguna de las faltas siguientes: «Las discusiones que susciten antagonismo entre los distintos Cuerpos o Institutos de los Ejércitos». Pues bien, yo entiendo que tal como

Artículo 437 del Código

viene en el texto de la Comisión es el más adecuado para mantenerlo.

Téngase en cuenta, además —quiero recordar— que hay una diferencia entre el voto particular que aquí se presenta y el que se defendió en el Congreso, porque en el del Congreso solamente se pretendía hablar de enfrentamiento y aquí se habla de grave enfrentamiento. Creo que aquí se trata de discusiones que producen antagonismo; que ese antagonismo crea entre los Cuerpos e Institutos división, y que es suficiente esta palabra y no hace falta sustituirla por «grave enfrentamiento» que, por supuesto, tiene una mayor entidad y contenido, que excede de lo que pudiera ser calificado como una simple falta.

Recordemos también que el artículo 10 de las Ordenanzas Militares dice que las Fuerzas Armadas forman una Institución disciplinada, jerarquizada y unida.

Estos argumentos creo que son suficientes para que nuestro Grupo se oponga a este voto particular y vote en contra.

El señor PRESIDENTE: Voto particular del Grupo Parlamentario Catalunya, Democracia i Socialisme, enmienda número 36, que afecta a la letra c) del número 4 de este mismo artículo.

Tiene la palabra el Senador Nadal.

El Senador NADAL COMPANYY: Ahora, incluso se lo voy a poner más fácil, porque lo propio sería que ni tan siquiera pidieran la palabra y votaran con nosotros.

Fíjense bien; la letra c) del número 4 dice así: «La murmuración sobre el Jefe de Estado, el Gobierno, el Ministro de Defensa y demás autoridades que ostenten mando militar superior». Todo ello me parece muy bien, pero me da la impresión de que ha habido un lapsus: que al redactarlo se han olvidado de la Constitución, lo cual nos extraña extraordinariamente, máxime tratándose del partido del Gobierno, tan celoso guardián de la Constitución, que tantas veces invoca la Constitución, que toma como punto de partida la Constitución, que no hay argumentación que emplee que no se base en la Constitución. Todo lo cual me parece estupendo, pero si ustedes están tan preocupados con la

Constitución, esta vez se han olvidado de ella. Yo, que tengo un extraordinario concepto de todos ustedes, creo que esta vez sí que ha habido un olvido, porque si no hubiera sido así, sería un poco grave.

Esto es lo que me parece, señor Presidente; por consiguiente proponemos esta redacción: «La murmuración contra la Constitución, contra el Jefe del Estado...», etc. Me parece de una procedencia absoluta; a ver si esta vez ganan ustedes la partida.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿En contra? (Pausa.) ¿Portavoces? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Sánchez Torres, por el Grupo Parlamentario de UCD.

El señor SANCHEZ TORRES: Señor Presidente, Señorías, voy a tratar de ser breve.

Hace un rato, cuando terminamos la sesión de la mañana, me encontraba con el Senador Nadal en los pasillos de la Cámara, y, afectuosamente, como siempre —porque nos tratamos, por supuesto, muy afectuosamente los dos—, me decía que tenía razón en unas determinadas cosas; yo mostraba mis dudas. Y le dije: «Bueno, yo te podría decir lo que un compañero mío —y el Senador Ojeda puede que lo recuerde—, González Palomino, en el estudio de Arte Menor de Derecho Sucesorio, decía en un pie de página, respecto de las personas que tienen razón y de las que no la tienen: "A la gente hay que darle la razón cuando la tiene, porque la tiene, y cuando no la tiene, para que la tenga"». Pues bien, a mí me gustaría darle la razón al señor Nadal porque la tuviera, no dársela para que la tuviera. Entonces, yo no puedo darle la razón al señor Nadal. Porque mire, señor Nadal, la murmuración es conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Eso es la murmuración. Naturalmente, murmurar de una Constitución yo lo encuentro un poco difícil; es decir, terminológicamente, no lo encuentro adecuado. Esa es la razón por la cual nosotros no podemos admitir que se pueda murmurar de la Constitución. Murmurar, además, tiene también otro significado, que es hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto.

Sinceramente, señor Nadal, no puedo darle la razón esta vez, porque no la tiene, y no se la puedo dar para que la tenga en este caso.

Además, le voy a señalar una cosa para que S. S. la mire, y es el artículo 1.011 de este mismo Código, en el número 8, donde al hablar de la Constitución —que nosotros, efectivamente, defendemos a ultranza, porque, ¡qué menos vamos a hacer y qué más se puede hacer!—, dice: «Se instruirá expediente gubernativo por haber demostrado pública y manifiestamente una actitud contraria a la Constitución o al Jefe del Estado». Eso sí, porque la Constitución hay que respetarla de verdad, hay que acatarla, y eso es lo que se protege en el cuerpo legal.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: A votación el voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 35, respecto del texto propuesto para el artículo 437. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en contra, 58; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 35.

A votación el voto particular del Grupo Parlamentario Catalunya, Democracia i Socialisme, enmienda número 36, respecto del propio artículo 437. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, 61.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Parlamentario Catalunya, Democracia i Socialisme, enmienda número 36.

Se pone a votación el texto que para el artículo 437 propone el dictamen de la Comisión. (*Pausa.*)

Aprobado por asentimiento de la Cámara.

**Artículos
440 y 442
del Código**

Los artículos 440 y 442 del propio Código no tienen votos particulares. Procede, por tanto, someterlos directamente a votación. Si no hay inconveniente, con tratamiento conjunto, y si tampoco hay objeción, se declararán aprobados por asentimiento de la Cámara. (*Pausa.*) Así se declara.

**Artículo 443
del Código**

Texto propuesto para el artículo 443. Hay un único voto particular del Grupo Socialista, en correspondencia con la enmienda nú-

mero 38, que afecta a lo que dice el propio texto. El señor portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.

El señor IRIZAR ORTEGA: Mantenemos un voto particular al artículo 443, que consiste en que no sea falta la asistencia de militares a los actos públicos de carácter político, durante los períodos de campaña electoral, siempre que sea individualmente, sin uniforme y no se participe activamente.

Nosotros creemos que este voto particular es importante, porque el derecho a la información durante las campañas electorales no sólo debe ser para los civiles, sino que también los militares, que tienen derecho a votar como todos los ciudadanos, deben estar informados.

Por tanto, esta información debe recabarse durante las campañas electorales allá donde se celebren los actos de los distintos partidos. Parece ser que el Gobierno, cuando trata de oponerse a través del partido que le apoya, pretende que los 500.000 soldados, aproximadamente, que existen en España tengan como única fuente de información la Televisión, y todos sabemos cómo se ha venido comportando este organismo en las distintas campañas electorales, evitando que puedan recibir información de otras fuentes a base de prohibirlo expresamente y sancionarlo como falta militar.

De todas formas y para que nadie se asuste, esta enmienda introduce una serie de cautelas importantes, como es la de reducir esta información a las campañas electorales, para que no sea una asistencia continuada de los militares durante todos los períodos del año, de forma sistemática, a actos electorales.

También se habla de que sea individualmente, es decir, se evita la posibilidad de que puedan concurrir de forma más o menos encubierta como militares casi en formación a los actos electorales, lo cual, evidentemente, sería peligroso y poco útil para la democracia, y además exige que se asista sin uniforme y que no se participe activamente, ya que no daría buena imagen, incluso no sería constitucionalmente válido el que un militar participase activamente en los mítines y en los actos electorales tomando la palabra. No

se puede —repito— participar activamente, solamente se puede, según esta enmienda, asistir informativamente y no dar sensación de que se participa en concepto de militar, sino en concepto de ciudadano normal.

Por otro lado, las leyes han de hacerse para cumplirse y debe ser práctica común, al menos en las grandes ciudades, que los soldados, por lo menos, que son los más numerosos y más anónimos, asistan a estos actos electorales sin que haya ningún tipo de control, porque nadie va a ocuparse de pedir el carné para comprobar si son o no militares, puesto que daría la sensación de que se está cometiendo una falta y si es sorprendido se le va a sancionar. Esta es otra de las razones que apoya esta enmienda.

La asistencia a actos electorales también es una falta nueva que aparece reflejada en el Código de Justicia Militar, puesto que antes nadie se ocupaba de esto y tenemos que decir que en los cuarteles se ha hecho muchas veces política; se han explicado muchas veces las Leyes Fundamentales, la Ley Orgánica, el Referéndum, etc., y nadie, repito, se ha preocupado de ello; al contrario, si no se asistía era falta, y se han celebrado bastantes actos políticos durante el régimen anterior.

Por consiguiente, sostenemos el derecho de los militares a la información, en cuanto que son ciudadanos y tienen que votar, y creemos que esta enmienda a lo que verdaderamente conduce es a realzar la posibilidad de ejercitar estos derechos por parte de los militares de forma más consciente, puesto que tienen un mayor derecho a la información.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿Turnos en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.)

El Senador Ojeda, en nombre del Grupo Socialista Andaluz, tiene la palabra.

El señor OJEDA ESCOBAR: El Ejército, las Fuerzas Armadas, tienen el monopolio del poder de coacción y siempre han planteado el problema de coordinar ese monopolio del poder con el sometimiento a la autoridad civil. Esta ha sido una preocupación no solamente de los políticos, sino de tratadistas de Derecho Constitucional, de tratadistas de Derecho

Político, y se me vienen a la memoria dos grandes tratadistas del constitucionalismo francés, como Hauriou y Duguit, y a partir de sus trabajos se constitucionaliza ese sometimiento del poder militar al poder civil.

Estamos totalmente de acuerdo con la neutralidad de las Fuerzas Armadas. Viene expresamente recogido en la Constitución: sometimiento al orden constitucional y respeto a las instituciones.

Ahora bien, en un régimen pluralista, en un régimen democrático, tal como aparece redactada nuestra enmienda, es lógico y natural que a los militares, que son ciudadanos, y por ese monopolio de la fuerza tienen también sus servidumbres, que no pueden participar activamente en la política, por lo menos, que se les reconozca un derecho de información. La información es imprescindible para poder decidir después.

No estamos pidiendo grandes cosas. Estamos pidiendo, únicamente —basta leer la enmienda del Grupo Socialista— que se les permita, durante las campañas electorales, asistir individualmente a actos electorales para que puedan informarse y para que puedan decidir en conciencia a la hora de votar.

No estamos pidiendo, por ejemplo, lo que ocurre en Suecia, donde durante la campaña electoral se permite que, incluso en los mismos cuarteles, se celebren mítines y actos políticos. Creo que eso no es conveniente, no es bueno.

Todavía nuestra democracia está en construcción, pero sí es imprescindible que se permita a los militares acudir a los actos electorales para conocer las distintas opciones; que no tengan que limitarse únicamente a ver la televisión o a conocer esas opciones a través de los medios de comunicación social, sino que puedan participar en esos actos electorales para que puedan tener un conocimiento y para que, en base a ese conocimiento, decidan libremente.

Yo creo que ésta es una enmienda razonable, es una enmienda aceptable y esperamos —quizá sea un iluso— el voto favorable del partido del Gobierno.

El señor PRESIDENTE: El Senador Martín Villa, por el Grupo de UCD, tiene la palabra.

El señor MARTIN VILLA: Con la venia, señor Presidente. Quería hacer un previo pronunciamiento. Según la filosofía de nuestro Grupo, las Fuerzas Armadas no tienen monopolio de ningún poder. Las Fuerzas Armadas no compiten con el poder civil, sino que son el brazo armado de la Patria, a las que la Constitución confiere determinados servicios.

Las Fuerzas Armadas están subordinadas, según el orden constitucional, a Su Majestad el Rey, como todas las fuerzas políticas y todos los instrumentos de la Administración del Estado.

La dicotomía de pugilato entre las Fuerzas Armadas y la Administración Civil no es cierta. Se resuelve en la armonía de la atribución de las competencias que la Constitución atribuye a cada uno de los poderes, de los servicios y de la Administración del Estado.

Hecha esta proclamación de principios, las Fuerzas Armadas, en el tránsito de un poder de autoridad a un poder democrático, están dando un magnífico ejemplo de serenidad, están dando un magnífico ejemplo de patriotismo y están dando un magnífico ejemplo de sobriedad, seguramente algunas veces acotando impulsos de ellas mismas.

Las Fuerzas Armadas tienen derecho al voto, como cualquier ciudadano. Las Fuerzas Armadas tienen derecho a la información, como cualquier ciudadano, pero el intento de cualquier exteriorización de las Fuerzas Armadas, conjunta o individualmente, o de asistencia a actos políticos o sindicales que pudiera representar, justamente, la utilización o la instrumentación de la asistencia de las Fuerzas Armadas a esos actos, aún en coyunturas electorales, es bueno que en esta coyuntura nacional en que vivimos tenga, al menos, la previsión de poder ser reprimido.

Todas estas circunstancias avalan el que nosotros votemos en contra de la enmienda que ha suscitado el Partido Socialista Andaluz.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el voto particular, que ha sido objeto de debate, del Grupo Socialista al artículo 443 del Código de Justicia Militar. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, 49.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Socialista, enmienda 38.

Pasamos a votar el texto del artículo 443 según el dictamen de la Comisión. *(El señor Ojeda pide la palabra.)*

Puede hacer uso de la palabra, señor Ojeda, aunque estamos votando.

El señor OJEDA ESCOBAR: Queríamos votar por separado, si es posible, primero el número 1 del artículo 443, después el número 2, letra a), y luego el resto del número 2.

El señor PRESIDENTE: ¿Se debe entender, por lo que dice el señor Ojeda, que todos los números y letras del artículo 443 pueden ser aprobados por asentimiento de la Cámara, salvo la letra a) del número 2? *(Asentimiento.)* Así pues, ¿todas las letras y números del artículo 443 se dan por aprobados por asentimiento de la Cámara, con excepción de la letra a) del número 2, que es lo que seguidamente se someterá a votación, según el texto del dictamen? *(Asentimiento.)* Así se declara expresamente.

Se somete ahora a votación la letra a) del número 2, del mismo artículo.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 48; en contra, 36.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada igualmente la letra a) del número 2 del artículo 443.

Los artículos 452, 491, 492 y 569, según los textos propuestos por el dictamen de la Comisión, no han sido objeto de votos particulares. Se tratarán conjuntamente, si nadie se opone a ello, y se podrán entender aprobados por asentimiento, si la Cámara no tiene reparos. *(Asentimiento.)* Por asentimiento de la Cámara se entienden aprobados los textos propuestos para los artículos mencionados.

Texto propuesto para el artículo 580. Voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 39, que afecta al número 3 de dicho artículo. El señor portavoz del Grupo Socialista, Senador Irizar, tiene la palabra.

El señor IRIZAR ORTEGA: Quisiera hacer una precisión referente a los números 3 y 8 del mismo artículo.

Artículos
452, 491, 492
y 569 del
Código

Artículo 580
del Código

El señor PRESIDENTE: Tiene razón. Está luego detallado, pero en el encabezamiento no figuraba.

El señor IRIZAR ORTEGA: Es al 10.

El señor PRESIDENTE: Se propone suprimir en el número 3 «el Tribunal de la Rota», y en el número 8 «los Arzobispos y Obispos». Tiene la palabra el señor Irizar.

El señor IRIZAR ORTEGA: Está mal.

Llegamos a la tan traída y llevada enmienda. Simplemente proponemos que entre aquellas personas que están exceptuadas de concurrir personalmente al llamamiento judicial, pero no de declarar, se exceptúen o se saquen del artículo los miembros del Tribunal de la Rota y los Arzobispos y Obispos. Realmente, es una enmienda que no pretende, como no pretendía la anterior del Grupo Catalunya, Democracia i Socialisme, tener ningún sentido antirreligioso, anticlerical, ni mucho menos, sino simplemente adecuar las leyes que se vayan haciendo al espíritu y a la letra de nuestra Constitución.

Pensamos que hoy no tiene sentido excluir de la obligación de concurrir al llamamiento judicial, pero no de declarar, como dice literalmente el artículo 580, a los miembros del Tribunal de la Rota y a los Arzobispos y Obispos. Nosotros pensamos, incluso, que si este artículo hubiese sido consultado con los Arzobispos y Obispos, ellos, que ya han renunciado a otros privilegios que tenían, renunciarían, incluso muy gustosos, a este privilegio, y, si pudieran, votarían favorablemente esta enmienda del Grupo Socialista.

Si leemos todas las personas que están incluidas en este artículo, todas ellas son autoridades del Estado, de uno u otro rango, generalmente de alto rango. Faltan, como ya se dijo en el Congreso, algunas autoridades que debían ser incluidas aquí y que tienen, con la nueva normativa constitucional, por ejemplo, el propio Presidente del Tribunal Constitucional, un rango jerárquico suficiente como para estar incluidas en este artículo, pero sobran, puesto que no tienen este carácter de autoridad, y no tienen el carácter de autoridad pública en ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico, los miembros del Tribu-

nal de la Rota y los Arzobispos y Obispos. No se entiende el empecinamiento del Grupo de UCD en mantener estos textos, porque realmente, en este caso al menos, son algo —y en esto todos estamos de acuerdo, y quizá también el propio Grupo de UCD en su filosofía— trasnochados, válidos para otras épocas, pero que no nos sirven hoy y que, por consiguiente, debe ser —entendemos nosotros— admitida esta enmienda.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿Turnos en contra? (Pausa.) Turno de portavoces. Tiene la palabra el señor Villar Arregui, del Grupo Parlamentario de UCD.

El señor VILLAR ARREGUI: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, en la intervención precedente se ha manifestado que la nueva redacción recibida por el artículo 580 omite al Presidente del Tribunal Constitucional. Lea el ilustre Senador señor Irizar el número 3 del artículo 580 y advertirá que la primera autoridad en él mencionada es el Presidente, añadiendo a su persona la de los restantes miembros del Tribunal Constitucional. Es verdad que a continuación figuran órganos colegiados de la Administración Consultiva del Estado, tal es el caso del Consejo de Estado; órganos de jurisdicción retenida, tal es el caso de los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar; órganos de la jurisdicción del Poder Judicial en su más alta instancia, Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo; el Tribunal de Cuentas; órgano constitucional y, a continuación, figura el inciso de Tribunal de la Rota. ¿A qué obedece ese inciso? Sin duda a una razón de arraigo histórico. El Tribunal de la Rota fue privilegio concedido por la Santa Sede desde el siglo XVI al Reino de España; sin embargo, los acuerdos celebrados con la Santa Sede, que fueron ratificados unánimemente en cuanto al acuerdo sobre asuntos jurídicos por esta Cámara, ha fijado que el Tribunal de la Rota juegue sólo en el ámbito de la competencia canónica que le es propio, sin que sus sentencias o resoluciones tengan efectos civiles, a no ser que los Tribunales del Estado las consideren ajustadas al propio derecho del Estado.

A la luz de esa consideración; a la luz de un acto propio del Parlamento español al apro-

bar esos acuerdos con los que se pone término a una larga tradición, sí resulta incoherente incardinar al Tribunal de la Rota entre los órganos jurisdiccionales o los altos órganos consultivos del Estado y procede, en consecuencia, suprimir la alusión a él en ese número 3.

En cambio, no puedo participar de la misma opinión en lo que atañe a los Arzobispos y Obispos. Es verdad que el Estado Español es un Estado aconfesional, pero es un Estado que no valora negativa, sino positivamente, la creencia religiosa. Ahí está para demostrarlo la Ley de Libertad Religiosa; ahí está el artículo 16 de la Constitución. A la luz de esa valoración positiva del hecho religioso, no es una incoherencia que este artículo tenga una cortesía hacia quienes ostentan una posición jerárquica en diversas religiones cristianas. Evidentemente, Tribunal de la Rota no hay más que uno: el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, pero Arzobispos y Obispos los hay en distintas confesiones cristianas, sin que esa dignidad sea exclusiva de la Iglesia Católica.

Por consiguiente, en la alusión hecha a Arzobispos y Obispos, no se podría decir que hay un sesgo confesional respecto de una determinada religión por parte de una ley del ordenamiento del Estado. En consecuencia, el Grupo acepta la supresión del inciso concerniente al Tribunal de la Rota, pero mantiene la excepción del deber de comparecer respecto de cualesquiera Arzobispos y Obispos de cualquier confesión religiosa inscrita en el correspondiente registro o que haya celebrado los correspondientes acuerdos con el Estado.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el voto particular del Grupo Socialista, enmienda 39 al texto del artículo 580.

El señor VILLAR ARREGUI: Se podía dividir.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, 48.

El señor Laborda Martín pide la palabra.

El señor PRESIDENTE: Estamos votando el voto particular y se ha votado ya, señor Laborda.

Queda rechazado el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista (enmienda número 39) al artículo 580.

Ahora, antes de votar el texto, puede hacerse alguna observación. Tiene la palabra el señor Ojeda.

El señor OJEDA ESCOBAR: Señor Presidente, el voto particular, aunque es uno solo, comprende en su texto dos puntos completamente distintos. Nosotros hubiéramos querido que se hubiera votado primero la supresión del Tribunal de La Rota y después el número 10.

El señor PRESIDENTE: Senador Ojeda, el voto particular es una unidad. El Senador Villar Arregui ha participado su criterio, lo que no significa que tuviera razón. Lo que sí podemos es votar separadamente (porque en el texto son dos puntos diferentes) el texto, pero el voto particular es una unidad, de modo que o se mantiene o se retira. Se ha mantenido y se ha votado, y ha sido rechazado. De modo que el texto, si lo desea el Senador Ojeda, se votará por separado (*Asentimiento.*)

Entonces, se somete a votación, en primer lugar, todo el texto que para el artículo 580 propone el dictamen de la Comisión, salvo los puntos 3 y 10. ¿Se puede entender aprobado por asentimiento de la Cámara? (*Pausa.*) Así se declara.

Punto 3 del artículo 580 del texto del dictamen. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 55; abstenciones, 34.

El señor PRESIDENTE: Aprobado el punto 3 del artículo 580.

Punto 10 del artículo 580. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 55; en contra, 34.

El señor PRESIDENTE: Aprobado el punto 10 del artículo 580 del texto del dictamen.

Artículos 581, 582, 584, 595, 605, 701, 728, 729 y 736 del Código

El texto propuesto para los artículos 581, 582, 584, 595, 605, 701, 728, 729 y 736 no ha sido objeto de votos particulares. Sin embargo, en el 729 hay que hacer la rectificación de una errata que consiste en que el punto que figura como octavo no es tal, sino que debe ir aparte, sin número, puesto que se trata de algo que tiene que ver con todos los demás. No hay, por consiguiente, punto octavo. Es una mera rectificación de un error.

El señor Ojeda tiene la palabra.

El señor OJEDA ESCOBAR: Para pedir la votación independiente del 581 y a continuación la de los restantes artículos que ha mencionado S. S.

El señor PRESIDENTE: Perfectamente, pero quede claro que en el 729 hay esa errata, que queda salvada, si no hay objeción por parte de la Cámara.

Vamos a votar seguidamente el artículo 581 según el texto del dictamen. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 55; votos en contra, 36.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto que para el artículo 581 propone la Comisión en su dictamen.

Ya, si no hay inconveniente, los artículos 582, 584, 595, 605, 701, 728, 729 y 736 serán votados conjuntamente; y, si no hay inconveniente, la proposición de la Presidencia es que se aprueben por asentimiento de la Cámara. (Asentimiento.) Así se declara.

Voto particular del Grupo Parlamentario Catalunya, Democracia i Socialisme, que se corresponde con la enmienda número 40, y que postula la redacción nueva para el artículo 766, que no está incluido en el inicial texto del Congreso de los Diputados y, por tanto, en el dictamen de la Comisión.

El señor Nadal tiene la palabra.

El señor NADAL COMPANYY: Señor Presidente, señoras, señores Senadores, el artículo 766 dice así: «En sitio preferente del lugar de la celebración del Consejo se colocará un crucifijo. Se hallará a disposición del Tribunal el Código de Justicia Militar, el Pe-

nal Común y los instrumentos del delito que sean manuales».

Mi enmienda dice así: «Se hallarán a disposición del Tribunal el Código de Justicia Militar convenientemente actualizado, el Penal Común y las pruebas que hayan sido presentadas y consten en la causa». Yo podría defender perfectamente mi enmienda desde la Constitución y desde el ángulo jurídico, porque ni en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial se encuentra ningún artículo, ninguna referencia al crucifijo en la mesa del Tribunal. Pero no, señores; yo voy a defenderla como cristiano, y voy a defenderla, señoras y señores, muy brevemente, porque dice el viejo aforismo jurídico que «cuando se tiene razón, sobran las razones».

Desde Constantino hasta nuestros días se ha ido produciendo una reprobable simbiosis entre el poder terreno y el espiritual, que ningún beneficio ha reportado al cristianismo: las bases cristianas, por lo menos, lo entendemos así. La presencia del crucifijo en el Tribunal, precisamente en un lugar donde se va a juzgar, supone una extraña asociación del crucifijo, de un símbolo del cristianismo, con el Tribunal. Y digo una extraña asociación porque precisamente el Cristo que está en el crucifijo, que sufrió la tremenda injusticia, aquel Cristo, dijo: «No juzguéis y no seréis juzgados». Pero es más, señores: ¿Qué van a pensar los que son ateos, laicos, o de otras religiones no cristianas, judíos, mahometanos, etcétera, al ser juzgados por esta extraña asociación entre el crucifijo y el Tribunal? Estarán pensando en aquellos momentos que no solamente les juzga un Tribunal, sino que también les juzga una religión, y entonces nosotros, los cristianos, la realidad es que estaremos pasando un mal momento. En cada Consejo de Guerra que se celebre nosotros estaremos pasando un mal momento, porque nosotros no podemos juzgar en el orden material, y se da la coincidencia de que nuestra presencia allí da la sensación de que nos hallamos presidiendo un tribunal de la Tierra.

La misión del cristianismo es mucho más elevada, está por encima de la justicia de los hombres. Ya sabemos, y esto es realidad, que no siempre la justicia de los hombres coin-

cide ni tan siquiera con la moral. Por esto decía al principio que cuando se tiene razón, y la tengo (el señor Presidente ríe, pero sabe que la tengo, y en su fondo cristiano sabe que la tengo), sobran las razones. Yo invito a todos los cristianos que están en esta sala a que voten conmigo.

El señor PRESIDENTE: Por alusiones. No me río cuando se habla de Cristo, es que me ha sido mandada una nota muy graciosa por una señora Senadora pidiéndome algo a lo que he accedido, y me reía por la gracia con que venía la nota.

¿Turnos a favor o en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? El señor Prat, del Grupo Parlamentario Socialista del Senado, tiene la palabra.

El señor PRAT GARCIA: Por el profundo respeto que me merece el crucifijo, creo que debemos aceptar la enmienda de nuestros amigos defendida por el señor Nadal.

Yo no recuerdo, en mi experiencia de oficial del Cuerpo Jurídico Militar, que antes de 1931 figurara el crucifijo en las mesas de los Consejos de Guerra, con todo el respeto que, naturalmente, se tenía por la religión oficial, que era entonces la religión católica, con arreglo a la Constitución de 1876. Es una realidad humana el deber de aceptar el derecho al error. Por encima de estas realidades está la representación profunda de uno de los dogmas más emocionantes del cristianismo.

Por eso me atrevo a sostener que debemos modificar esta situación legal que me parece exclusiva de los tribunales militares. Yo no conozco que pase lo mismo en la jurisdicción civil, ni siquiera en las otras jurisdicciones administrativas. Por esa razón —y luego están las razones constitucionales—, pero, sobre todo, por el respeto profundo que debemos a uno de los momentos de más emoción de la fe cristiana. Me bastaría recordar el soneto anónimo: «No me mueve mi Dios para quererte...».

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de UCD, el Senador Villar Arregui tiene la palabra.

El señor VILLAR ARREGUI: Señor Presidente, Señorías, por obvio no haría falta de-

clarar que he escuchado con profunda emoción y con profundo respeto las sinrazones, tanto del señor Nadal como aquellas otras razones del corazón que la razón no comprende que, siguiendo a Pascal, nos ha expuesto en la tarde de hoy nuestro admirado compañero de Cámara don José Prat.

Pero he aquí que yo no voy a hablar como cristiano, sino como Senador. Se ha dicho por uno y por otro Senadores intervinientes que el hecho de la presencia del crucifijo en una sala de justicia es un hecho anómalo y exclusivo de la jurisdicción militar. Se ha llegado a afirmar por el señor Nadal que nada análogo hay en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pocas memorias tan felices hay entre las de los señores Senadores como la del señor Nadal, quien tiene, además, un ejemplar de «Medina y Marañón» sobre su pupitre. Si lee el artículo 434 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el señor Nadal advertirá que esa ley pide que los testigos presten juramento de acuerdo con su religión. En este sentido, la Ley de Enjuiciamiento Criminal es supletoria de la Ley Procesal Militar en orden al modo como ha de prestarse el juramento. Y el juramento, de acuerdo con la religión del testigo católico, es, además de una promesa de decir verdad, un acto de culto en cuanto se toma en nombre de Dios para invocarle como testigo de la veracidad de lo que se dice. Es una vieja tradición que el juramento se preste en la presencia de un crucifijo. No bastaría entonces suprimir el crucifijo de la sala; haría falta suprimir el juramento en las exigencias de las leyes procesales.

El crucifijo es un símbolo ante el que el juramento se presta, de acuerdo con una vieja tradición. Tal vez lo que late en el fondo de esta discusión no es la presencia o la ausencia del crucifijo en las salas de justicia, sino la pertinencia o no de mantener en las leyes procesales lo que para el católico es no sólo una promesa poniendo a Dios por testigo de la verdad de lo que se dice, sino un acto auténtico de fe.

Probablemente, en la revisión que se haga de las leyes procesales de enjuiciamiento, lo procedente sea sustituir el juramento por la promesa o permitir la opción entre el juramento y la promesa. Si ésta es la tesis que prevalece, la ausencia del crucifijo para quien

quiera jurar, sería una discriminación contra el creyente; la presencia del crucifijo puede, sin género de dudas, tener una significación simbólica y religiosa profunda para unos, pero en ningún caso puede ser rechazado por nadie, como nadie rechaza ningún símbolo religioso histórico y cargado de tradición.

Por eso no en cuanto cristiano, sino en cuanto Senador, que pretende la coherencia y la armonía entre nuestras leyes, es por lo que opino que procede oponerse a la enmienda propuesta.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el voto particular del Grupo Parlamentario Catalunya, Democracia i Socialisme (enmienda número 40). *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, 57.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular (enmienda número 40), del Grupo Parlamentario Cataluña, Democracia y Socialismo.

El texto propuesto para los artículos 767, 777, 793, 809, 816, 823, 871, 906, 927, 976 y 979 del Código de Justicia Militar, tal y como vienen en el dictamen de la Comisión, no han sido objeto de votos particulares.

El artículo 777 figura entre los que en tiempo y forma han sido rectificadas parcialmente mediante la fórmula acordada por las normas de la Presidencia y con la firma de los señores portavoces, en virtud de cuya solicitud establece se acepte que este artículo 777, en su segundo punto y seguido, quede redactado así: «El Presidente previamente le recibirá juramento o promesa».

Aceptado este texto, ratificado este texto por la Cámara, puede entrar entonces el artículo 777 en el paquete de artículos que están sin voto particular, aun cuando puede ser cuestionado si se trata conjuntamente y pueden ser sometidos a su aprobación con el asentimiento de la Cámara.

¿Se aprueban por asentimiento de la Cámara? *(Pausa.)*

Por asentimiento de la Cámara quedan aprobados todos estos artículos.

A continuación pasamos al voto particular del Grupo Parlamentario Socialista (en-

mienda número 42), por el que se propone una redacción distinta para el artículo 1007, no incluida en el dictamen de la Comisión.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor IRIZAR ORTEGA: El voto particular que defiende la enmienda número 42 propone una redacción en que se diga que las faltas cometidas por militares serán corregidas directamente por los jefes con arreglo a sus facultades, previo el oportuno esclarecimientos de los hechos que incluirán la audiencia al interesado.

El principio de oír al que pueda ser castigado, el principio de audiencia, es un principio que está introducido en todo el Derecho procesal moderno; es el principio fundamental por el cual nadie puede ser condenado sin ser oído. En sentido contrario, se nos puede decir que la disciplina militar, la disciplina debida al Ejército, podría sufrir una quiebra si se introduce este principio de audiencia para las faltas leves, pero nosotros pensamos que no tiene por qué ser así, que las órdenes disciplinarias pueden mantenerse perfectamente, que la disciplina en el Ejército puede mantenerse totalmente, y que nada cambia el hecho de que se oiga previamente a la persona, al inferior, que puede ser castigado disciplinariamente por una falta leve.

Muchas veces puede ocurrir que el superior, por no oír al interesado, por no oír al inferior que va a ser castigado por una falta leve cometida, no puede conocer la realidad de los hechos, los verdaderos motivos que le han impulsado a cometer esta falta, y, por consiguiente, no puede actuar con la justicia y equidad que debiera.

Este principio, que es una garantía de que las sanciones en el ámbito militar, en el ámbito de las faltas corregidas disciplinariamente, van a ser aplicadas con la mayor objetividad y justicia, es un principio que nosotros deseáramos ver introducido en este Código.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor? *(Pausa.)* ¿Turnos en contra? *(Pausa.)* ¿Turnos de portavoces? Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de UCD, el señor Martín Villa.

El señor MARTIN VILLA: Vamos a acotar los puntos a que se refiere el artículo que nos ocupa. Primero, se refiere a las faltas leves. Segundo, se dice que pueden reprimirse por sus Jefes —así lo dice el escrito— con el oportuno esclarecimiento. Tercero, se dice que pueden ser reprimidas por los Jefes dentro de sus facultades, es decir, sin facultad discrecional para imponer el correctivo. Por último, veamos el artículo en todo su contexto, no examinemos sólo el número 1.

El número 2 dice que cuando el corregido se sintiere agraviado, puede dirigirse —sin excusa para cambiar el correctivo— a su Jefe superior; y, por la cadena de Jefes, llegar incluso, para que le sea repuesto su honor o su estímulo si se siente agraviado, hasta el Jefe del Estado a través del Ministro de Defensa. Es decir, para una falta leve tiene que corregir el Jefe, tiene que ser dentro de sus facultades y existe una cadena de superiores, que llega hasta el Jefe del Estado, ante los que se puede interponer el agravio.

¿Es que para una falta leve queremos, además, introducir un procedimiento con la audiencia del agraviado, que va a ser oído en sucesivas instancias y que tiene la posibilidad de llegar hasta el Jefe del Estado? ¿Es que esto no constituye una garantía de reposición del agravio si éste fuere cometido? ¿No lo es el que se puedan agotar las posibilidades de corrección hasta llegar al Jefe del Estado? ¿No lo es el que sean reprimidas por los Jefes dentro de su facultades y no de una manera discrecional? La seguridad jurídica está asegurada, que es lo normal.

No por aceptar lo que se daba por supuesto que íbamos a decir sobre la disciplina militar, sino por el normal desenvolvimiento de la vida militar es por lo que vamos a votar conforme al artículo y en contra de la enmienda propuesta.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, enmienda número 42.

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; en contra, 52.

El señor PRESIDENTE: Entramos en el texto propuesto del artículo 1.011, al que existe un voto particular del Grupo Parlamentario

Socialista, enmienda número 43, que postula la supresión de los números 1, 2, 4, 5, 7 y 3 desde el principio hasta «haber sido condenado».

Tiene la palabra el portavoz socialista, señor Irizar.

El señor IRIZAR ORTEGA: En definitiva, la enmienda socialista al artículo 1.011 lo que pretende es reducir a sus propios límites lo que entendemos debe ser el ámbito gubernativo, dentro de la jurisdicción militar y dentro del Ejército.

Proponemos la supresión de una serie de párrafos, puesto que la permanencia de ellos nos lleva a tipos de delito, de faltas, excesivamente amplios. Nos lleva también a la posibilidad de que las faltas se sancionen por una doble vía, por la vía judicial, por un lado, y por la vía gubernativa, por otro. Hace que no existan recursos contra las resoluciones en vía gubernativa y nos imposibilita para la defensa de los militares que se vean sometidos a estos expedientes disciplinarios.

Nosotros no tenemos inconveniente en aceptar una parte de este artículo 1.011, que es aquella que se objetiviza por sí sola, como, por ejemplo, la segunda parte del párrafo tercero, cuya permanencia aceptamos, puesto que se introduce un principio objetivo cuando ya han sido condenados por delitos en los Tribunales ordinarios, imponiéndose la pena de suspensión conforme al Código de Justicia Militar.

Tampoco tenemos inconveniente en que se mantengan los párrafos 6 y 8, pero el resto de los párrafos, cuya supresión solicitamos, es tan subjetivo, tan amplio, queda su interpretación tan al arbitrio de quien instruya el expediente gubernativo, que entendemos que produce una indefensión total, y que no puede, por tanto, mantenerse.

Por ejemplo, eso de «observar mala conducta habitual e incorregible». No vemos qué es. Queda al arbitrio del superior, al arbitrio, repito, de quien instruye el expediente, pudiendo ser injusto que se mantenga este tipo de sanciones.

Otro ejemplo es «contraer deudas injustificadas». No podemos entender esto, porque ello puede dar lugar a un expediente guber-

nativo en materia militar, cuando, indudablemente, estas deudas pueden ser perseguidas por la vía ordinaria, por la vía civil, y pueden dar lugar al procedimiento de apremio que la Ley de Enjuiciamiento Civil establece tan profusamente. No podemos entender que esto lleve aparejado para el militar un expediente gubernativo que puede llevar incluso a una sanción importante en su carrera.

Por tanto, solicitamos el voto favorable a nuestra enmienda.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor? *(Pausa.)* ¿Turnos en contra? *(Pausa.)* ¿Turno de portavoces? *(Pausa.)* Tiene la palabra el señor Martín Villa.

El señor MARTÍN VILLA: Con la venia, señor Presidente. Quiero matizar algunas de las observaciones que se han hecho aquí.

Primero, el procedimiento gubernativo es un procedimiento legítimo y usual no sólo dentro de la jurisdicción militar, sino incluso en muchos organismos, administraciones y entidades gobernadas por las leyes sometidas a la jurisdicción ordinaria.

Segundo, aléjese el temor que se ha manifestado, puesto que nunca el procedimiento es simultáneo, sino sucesivo.

Tercero, la existencia del artículo 1.011 proviene de una peculiar manera de ser de los Ejércitos que quieren para sus servidores lo más acrisolado. Es algo parecido a lo de la mujer del César, que no sólo tiene que ser digna, sino que tiene que parecerlo.

Cuarto, no se queda en indefensión porque el artículo 40, letra d), de la Ley de lo Contencioso-Administrativo se refiere de una manera concreta a este artículo, y dice que está dentro de las facultades de la jurisdicción contencioso-administrativa el conocer aquellos supuestos de procesos gubernativos, aquellas resoluciones provenientes de procedimientos administrativos a los cuales se refiere. He procurado expulgar y he encontrado, incluso, una sentencia, que es la de 10 de mayo de 1960, en que la jurisdicción contencioso-administrativa entiende en un procedimiento proveniente de una resolución atinente al artículo 1.011 del Código de Justicia Militar; o sea, que ni se juzga dos veces, ni se queda sin recurso y la jurisdicción con-

tenciosa puede entender en estas resoluciones.

Por otra parte, parece saludable, para garantizar la acrisolada virtud cívica que deben de tener los Oficiales y Suboficiales y las clases del Ejército, mantener el artículo 1.011 en sus términos actuales.

En su consecuencia, anunciamos que vamos a votar en contra de la propuesta socialista.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, enmienda número 43, respecto al texto propuesto para el artículo 1.011.

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; en contra, 49.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, enmienda número 43.

Se somete a votación, seguidamente, el texto del artículo 1.011 según el dictamen de la Comisión.

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 49, en contra, 29; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto propuesto por el dictamen de la Comisión para el artículo 1.011 del Código de Justicia Militar.

Los artículos 1.º bis, que es nuevo, 2.º y 3.º del dictamen no tienen votos particulares. **Artículos 1.º bis, 2.º y 3.º del dictamen**
Procede, por tanto, someterlos directamente a votación. ¿Se les da tratamiento conjunto? *(Asentimiento.)* ¿Se entienden aprobados por asentimiento de la Cámara? *(Pausa.)* Quedan aprobados.

Hay un voto particular al artículo 4.º del dictamen del Grupo Parlamentario Cataluña, Democracia y Socialismo, enmienda número 44, que afecta al capítulo I del Título XV. **Artículo 4.º del dictamen**

Tiene la palabra, como portavoz de Catalunya, Democracia i Socialisme, el Senador Nadal Company.

El señor NADAL COMPANYY: Señoras y señores Senadores, esta enmienda tiene puramente un carácter técnico. Se propone titular el capítulo I del Título XV de la si-

guiente manera: «De los abordajes a barcos de guerra», y al capítulo II del mismo Título: «De los naufragios de barcos de guerra».

Su motivación es coherente con la actual redacción del Título XV que pasa a ser solo para la Marina de Guerra. Nada más.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿Turnos en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.)

Tiene la palabra, por el Grupo de UCD, el Senador Sánchez Reus.

El señor SANCHEZ REUS: Señor Presidente, Señorías, efectivamente, la motivación se basa fundamentalmente en que esa enmienda, que estamos tratando en este caso como voto particular, puesto que estamos en debate en el Pleno, debe ser aceptada por coherencia, y yo me temo que si se aceptara, cometeríamos una incoherencia mayor. Vamos a ver si me explico.

El Título XV que, efectivamente, tal y como dice el enmendante, queda redactado de la siguiente manera: «Procedimientos especiales de la Jurisdicción de la Marina de Guerra», sin embargo, el capítulo I habla de los abordajes, y la enmienda dice que sea de los abordajes a barcos de guerra. El contenido del capítulo, si se lee detenidamente, supone una actuación de la jurisdicción de la Marina de Guerra, pero no solamente para los abordajes de los barcos o navíos de guerra, sino también una serie de actuaciones o de diligencias en torno a los naufragios de barcos de la Marina Mercante.

El capítulo II habla de los naufragios, no tal y como pretende la enmienda que se refiere a los barcos de guerra. Porque, por ejemplo, el artículo 818, que es el primero de este capítulo II, trata de los naufragios y dice: «Siempre que las autoridades de Marina tengan noticia de que haya naufragado un buque mercante en aguas de su jurisdicción proveerán a cuanto sea necesario para el salvamento de los naufragos del buque y del cargamento que conduzca. En todo caso, pasarán con urgencia el oportuno aviso a los Directores de Sanidad y a los representantes de la Hacienda...».

Es decir, que en el texto de estos artículos hay un contenido que no es estrictamen-

te militar, pero que sí se les atribuye en cuanto a gestiones, diligencias o comportamientos que tienen que hacer las autoridades de Marina cuando se dan una serie de circunstancias o de sucesos. No quiere decir que sea absoluta, total o exclusivamente competente la jurisdicción militar, sino que están prestando una serie de servicios civiles y que esto nada tiene que ver con que se modifiquen o no los Títulos. Porque si modificáramos el enunciado de los capítulos, entonces, como indicaba al principio, incurriríamos en la incoherencia de que íbamos a dejar un vacío legal que iba a crear un caos y un confusio-nismo. Al mismo tiempo que se ha presentado la enmienda, se debía también haber presentado —es una opinión totalmente humilde— todo el texto que habrían de contener estos artículos, ya que se tendrían que modificar si se aceptara el enunciado que se pretende en el voto particular para estos capítulos.

Por estas razones tenemos que oponernos a este voto particular.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el voto particular del Grupo Cataluña, Democracia y Socialismo que se corresponde con la enmienda número 44 del artículo 4.º (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 53; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Cataluña, Democracia y Socialismo.

Se somete a votación el texto que para el artículo 4.º propone el dictamen de la Comisión.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 53; abstenciones, 28.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 4.º del dictamen según el texto propuesto por la Comisión.

Entramos en el artículo 5.º del dictamen según texto propuesto por la Comisión. Hay numerosos votos particulares que espero que los distintos Grupos que los reservan sabrán agrupar. **Artículo 5.º del dictamen**

Por parte del Grupo Socialista Andalúz tiene la palabra el señor Ojeda para defender la enmienda número 45.

El señor OJEDA ESCOBAR: Señor Presidente, Señorías, a la altura de los debates creo que tenemos que felicitarnos del desarrollo de los mismos, si bien, si el Presidente me lo permite, tendría que hacer una aclaración porque creo que mi última intervención no ha sido entendida. Yo no he querido que entren en conflicto el poder civil y el poder militar. He hecho una cita de unos constitucionalistas franceses y se me ha entendido mal. Espero que haya sido una salida de tono injustificada y que se me entienda correctamente qué he querido expresar que teóricamente ha podido darse, pero que no he querido enfrentar al poder civil y militar en unas circunstancias concretas y menos en este país.

Y centrándome ya a lo que es objeto propio de la enmienda, me bastaría con leer a SS. SS. el texto del artículo 10 para que entiendan perfectamente la lógica y el sentido racional que tiene la enmienda. El artículo 10, cuya supresión pretendemos, dice: «Las plazas de soberanía del norte de Africa, con excepción de las ciudades de Ceuta y Melilla y sus respectivos términos municipales, se considerarán en constante estado de guerra, y, en tal concepto, los Tribunales y Autoridades militares conocerán de todos los delitos cometidos en las mismas, cualquiera que sea la persona del delincuente, con sujeción a las reglas establecidas en esta ley».

Es tan claro y meridiano este precepto, es tan necesaria y tan imprescindible su supresión, que con la simple lectura sería suficiente, pero no me resisto a hacer alguna apostilla. La declaración de que «se considerarán en constante estado de guerra» podría llevar incluso desde el punto de vista teórico, aunque sea una declaración efectivamente retórica, a la posibilidad de aplicar la pena de muerte. Incluso creo que este artículo se podría calificar como colonialista, cosa que hoy carece totalmente de sentido.

Por estas razones pedimos su supresión y en esta ocasión creo que, siendo unas razones tan normales y lógicas, el partido del Gobierno votará a favor del Grupo Socialista para que consigamos la supresión de este precepto.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno a favor o en contra? (Pausa.) ¿Portavoces? (Pausa.)

El señor Martín Villa, por el Grupo de UCD, tiene la palabra.

El señor MARTIN VILLA: Apelo a la buena memoria del Senador señor Ojeda. Esta enmienda fue aceptada en Ponencia y no sé por qué no figura en el dictamen de la Comisión, pero lo hemos recordado así y, si hay que subsanar votando, nos dará la alegría de poder votar con el Senador señor Ojeda.

El señor PRESIDENTE: A continuación, el Grupo Socialista tiene reservados votos particulares, en correlación o correspondencia con sus enmiendas números 46, 48, 50 y 51; dejando aparte la número 52, que es coincidente con otra de idéntico texto del Grupo Cataluña, Democracia y Socialismo, que quizá tenga otro tratamiento distinto, si el Senador señor Irizar me da la razón.

El señor IRIZAR ORTEGA: Pensaba agrupar, si el señor Presidente no tiene inconveniente, las números 46, 48 y 51.

El señor PRESIDENTE: ¿La enmienda número 50, no?

El señor IRIZAR ORTEGA: La número 50 está admitida.

El señor PRESIDENTE: Aquí figura como voto particular reservado.

El señor IRIZAR ORTEGA: Debe ser un error, porque está suprimido del todo. La supresión del artículo 190 fue admitida por la Ponencia.

El señor PRESIDENTE: Aquí se habla de la supresión del artículo 239, párrafo primero.

El señor MARTIN VILLA: Pido la palabra para una cuestión de orden, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: La tiene S. S.

El señor MARTIN VILLA: Con la venia, señor Presidente. Creo que en un orden más sistemático, podrían agruparse las enmiendas

número 46 y 48 y después la 50 y 51 quizá, pero la 46 y 48 son las que debieran agruparse, según nuestro criterio.

El señor PRESIDENTE: En cualquier caso, que tome la decisión el portavoz del Grupo, que tiene hecha la reserva.

El señor IRIZAR ORTEGA: Pienso que, como la argumentación va a ser idéntica, puedo defender las cuatro conjuntamente, sin perjuicio de que la contestación pueda ser diferenciada.

A estas alturas del debate, el repetir las argumentaciones que se han venido diciendo todo el día de hoy podría llegar a cansar a la Cámara. La petición de supresión de los artículos que se citan en estas enmiendas obedece, en definitiva, a la filosofía que ya ha sido expuesta por el Senador en el uso de la palabra, por los Senadores que han intervenido en nombre de los otros Grupos Socialistas al principio, en su primera intervención de carácter general.

Nuestra solicitud de retirada de una serie de artículos que en estas enmiendas pedimos se debe, una vez más, a que consideramos que estos artículos tratan de cuestiones ajenas a la propia jurisdicción militar, tratan de cuestiones que deben ser enjuiciadas por los órganos de la jurisdicción ordinaria, que rebasan, una vez más, el ámbito estrictamente castrense del ya tan manoseado esta tarde artículo 117, 5, de la Constitución.

Los artículos 38 a 44 cuya supresión expresa se propone, tratan de competencias civiles del Consejo Supremo de Justicia Militar.

Realmente, el Consejo no puede tener ninguna competencia civil, y los artículos 38 a 44 se refieren a competencias puramente civiles, como la asignación de pensiones, etc., que, en definitiva, deben de ir a los órganos, no sólo jurisdiccionales, sino en muchos casos administrativos de la Administración del Estado.

La asignación de pensiones para todos los funcionarios del Estado se viene haciendo por el Ministerio de Hacienda y no vemos inconveniente alguno, sino todo lo contrario, nos parece que es más lógico que este Ministerio, el de Hacienda, sea el que, en definitiva, asig-

ne las pensiones también a los funcionarios militares.

En cuanto al artículo 194, creo que ya ha sido glosado varias veces, y por cierto negativamente, por el Grupo Socialista durante el día de hoy. Se refiere, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, a delitos civiles que deben ser enjuiciados por la jurisdicción ordinaria y no por la militar. Y en la misma línea van las enmiendas 50 y 51, que hablan de delitos tipificados, también, en el Código Penal común, en el ordinario, como pueden ser concretamente los artículos 443 y siguientes del Código Penal.

En esta misma postura se han mantenido otras enmiendas que no han tenido ya el acogimiento favorable por parte del Grupo de UCD y, por tanto, inútil sería insistir en los argumentos que, en definitiva, son todos los expuestos tantas veces en el día de hoy y que nos cansamos ya un poco de repetir.

Creo que, no obstante, ha sido largo el debate, ha sido el más largo de esta legislatura para un solo proyecto de ley en esta Cámara, pero puede ser que hayamos alcanzado una altura importante y, por lo menos, hemos discutido en profundidad y hemos esclarecido bastantes cosas para ese futuro proyecto de ley que el señor Ministro nos ha prometido enviar en el plazo que fija esta ley. Esperamos que si aquí no se nos han admitido muchas cosas, se nos admitan en ese futuro proyecto que va a enviarse en el plazo que este proyecto de ley ordena al Gobierno.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿Turnos en contra? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Villar Arregui, por el Grupo de UCD, para un turno en contra.

El señor VILLAR ARREGUI: Con la brevedad que a estas horas del debate es obligada cortesía, voy simplemente a contestar el contenido de los votos particulares a que han dado origen las enmiendas números 50 y 51.

Por lo que toca a la enmienda número 50, se pide la supresión del párrafo primero del artículo 239 del Código. Ese artículo 239 del Código de Justicia Militar tiene un contenido análogo al de su artículo 380 y en ambos lo que hay es la explicitación de cómo se acce-

de a la pena superior y en virtud de qué concurso de circunstancias.

Por la economía interna del Código de Justicia Militar ahora resultaría discordante suprimir el elemento contenido en el artículo 239, como se pretende, del conjunto constituido por él con el 194 y con el 380.

En la enmienda número 51 se persigue la supresión de los artículos 453 y 454 del Código de Justicia Militar, y se razona por motivos de armonizar sus preceptos con los del Código Penal común.

En aras de la brevedad debo decir al señor Irizar que he examinado atentamente el contenido de la Ley 46/1978, de 7 de octubre, por la que se modificaron los artículos 443 y concordantes del Código Penal común, y puedo asegurarle que hay una perfecta armonía entre lo que dicen los artículos 453 y 454 del Código de Justicia Militar y el contenido de aquella reforma. No hay ningún punto de incongruencia entre unos y otros. (Al advertir los amables gestos de asentimiento por parte del señor Irizar, no sé si me paso al pensar que se propone retirar la enmienda de supresión de estos dos artículos.)

Ciertamente, no hay contradicción. Se produce el efecto de la extinción de la pena en el caso del perdón por la parte ofendida. Son los mismos los que han otorgado el perdón en un caso y en otro. La congruencia es absoluta. Lo que ocurre es que al no definir el Código Penal Militar los delitos de violación, estupro, rapto y abusos deshonestos, entre otros, hay que estar a la definición contenida en el Código Penal común, que ha sido modificado. Pero como hay un reenvío al Código Penal, hay que entender hecho ese reenvío a la nueva tipificación de esos delitos dada por la citada ley de 1978.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno de portavoces? (Pausa.)

El señor Sánchez Torres, por el Grupo de UCD, tiene la palabra.

El señor SANCHEZ TORRES: Simplemente para fijar la postura de nuestro Grupo en relación con los votos particulares números 46 y 48, ya que a los demás que ha defendido el Senador Irizar ha hecho un turno en contra el Senador Villar Arregui.

En cuanto al voto particular número 46, que pretende la supresión de los artículos 38 a 44 del Código de Justicia Militar, quiero decir simplemente que siento un cierto temor con respecto a esta supresión así, no voy a decir que precipitada, pero, a lo mejor, no debida y reflexivamente estudiada. Piense el Senador Irizar que en el número 2 del artículo 38 se dice que la Jurisdicción Militar es competente para conocer en materia civil de los testamentos especiales otorgados con arreglo a los artículos 716 a 731 del Código Civil, y que en el número 3 se otorga también la posibilidad de que sean competentes de las responsabilidades civiles declaradas en sentencia firme o en decreto de sobreseimiento definitivo por los Tribunales o autoridades judiciales militares, mientras el procedimiento se limite a la vía de apremio contra los sentenciados y sus bienes. Es decir, estamos casi privando de las posibilidades de ejecución de sentencia a unos Tribunales que han intervenido en ella.

Como consecuencia de todo ello, anunciamos nuestro voto en contra. Recuerden que estamos ante una reforma parcial, concreta y limitada del Código de Justicia Militar y, sin querer, podemos modificar hasta el Código Civil, y tenemos que tener mucho cuidado en este punto.

Respecto al voto particular número 48, que pretende la supresión del artículo 194, diría al Senador Irizar que es uno de los principios que filosóficamente nos separan. Además, esta mañana hemos aprobado el artículo 6.º, en el cual, precisamente, se hace una mención expresa al artículo 194, que justifique debidamente en aquella intervención, y sería totalmente contradictorio que ahora mismo pudiéramos aceptar este voto particular.

Por las razones expuestas, mi Grupo votará en contra también de este voto particular. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Cataluña, Democracia y Socialismo reservó, respecto de este artículo 5.º del dictamen, los votos particulares correspondientes a las enmiendas números 20 y 49, independientemente de la número 53, que coincide con la 52 del Grupo Socialista. ¿Se pueden

agrupar para su defensa conjunta estas dos enmiendas números 20 y 49? (Pausa.)

El Senador señor Nadal tiene la palabra, si es que va a ser el portavoz nada más el que va a intervenir.

El señor NADAL COMPANYY: La enmienda número 20 está renunciada, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Me doy por notificado y acepto la renuncia.

El señor NADAL COMPANYY: Entonces, voy a defender la enmienda número 49.

El señor PRESIDENTE: S. S. tiene la palabra.

El señor NADAL COMPANYY: Pienso que es de una sencillez extraordinaria. De lo que se trata es de que de ninguna manera una pena canónica se transforme en una pena laica. Esto, verdaderamente, es un absurdo, que si la palabra absurdo tiene su traducción en contrario a la razón, sería una cosa irrazonable el que una pena canónica, casi de contenido espiritual, pudiera tener su repercusión en el orden material.

He dicho esta mañana —lo que yo he titulado exordio— que esta ley crea una serie de situaciones confusas, crea problemas de competencia, de inconstitucionalidad, etc.,

Pero, particularmente en este caso, lo que crea es una situación verdaderamente confusa, técnicamente confusa y jurídicamente inaceptable. En todo caso —y tampoco creo que es el tratamiento adecuado— podría resolverse en el orden administrativo, pero de ninguna manera en los términos que se postula en el proyecto de ley que ahora nos ocupa.

Creo que lo dicho es suficiente y, como ya he dicho en otra ocasión, cuando se tiene la razón, sobran las razones. Ser más exhaustivo sería introducir confusión en la exposición; la exposición es bastante clara, habla por sí misma y se argumenta por sí misma.

Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor y en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.)

El Senador Villar Arregui, del Grupo Parlamentario de UCD, tiene la palabra.

El señor VILLAR ARREGUI: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, ruego al Senador señor Nadal, quien suele decir que cuando se tiene razón sobran las razones, que antes de juzgar sobre su propia razón lea el contenido de sus enmiendas.

El capítulo VII del Código de Justicia Militar, que contiene los artículos 234 y 235, cuya supresión él postula, tiene como rúbrica «De los efectos especiales que producen las penas canónicas en los individuos de los Cuerpos Eclesiásticos de los Ejércitos».

Primero. Subsiste el Cuerpo Castrense en las plantillas orgánicas del Ejército.

Segundo. La persistencia del Cuerpo Castrense es hoy efecto de un acuerdo bilateral suscrito por el Estado español con la Santa Sede y ratificado entre otros ilustres legisladores por tal vez el más ilustre de todos ellos, el Senador señor Nadal. Se trata del Acuerdo celebrado con la Santa Sede sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas.

Tercero. En aquel acuerdo se establecía una prelatura no territorial, de ámbito personal, el Vicariato General Castrense que, evidentemente, no va a aplicar el Código Penal Común, sino que en el ámbito de su específica competencia, dentro de los Cuerpos Eclesiásticos afectos al Ejército, tiene que aplicar el Derecho que es propio de la Iglesia. No se cuestionó entonces por nadie el Acuerdo sobre Asistencia Religiosa a los Cuerpos y Fuerzas Armadas. En coherencia con eso habrá que reconocer la jurisdicción propia al Vicariato General Castrense, que tendrá que aplicar por fuerza el ordenamiento jurídico canónico.

Cuarto. En este concreto supuesto, que no es inconstitucional —y aquí sí aludo a una autoridad de razón, sino a una razón de autoridad—, el Senador Nadal confirmó con su voto ese Acuerdo, luego no es inconstitucional. Por tanto, como ese Acuerdo no es inconstitucional y en él se estableció el Vicariato General Castrense, la consecuencia lógica que de ahí se infiere es que hay que prestar el auxilio debido para la ejecución de las penas canónicas que el Vicario General Castrense o el Tribunal independiente puedan im-

poner a los miembros eclesiásticos de los Ejércitos.

Quinto. Si se impone a un Capellán castrense la pena de suspensión «a divinis», pregunto al Senador señor Nadal qué es lo que puede hacer ese Capellán castrense en el ámbito del Ejército si está privado de oír a los que están bajo su cuidado pastoral en confesión, y de celebrar la Eucaristía.

Parece, pues, Senador señor Nadal, que esa razón que excluía las razones no está tan clara, y que en este caso un «excursus» por actos propios de esta Cámara, puede inducir la razón que asiste a este Grupo Parlamentario para mantener, mientras no se denuncien los acuerdos con la Santa Sede, los artículos 234 y 235 del Código de Justicia Militar.

El señor PRESIDENTE: Finalmente existen dos votos particulares, uno del Grupo Parlamentario Socialista (enmienda número 52) y otro del Grupo Parlamentario Cataluna, Democracia i Socialisme (enmienda número 53), con idéntico contenido. Corresponde el turno de defensa a uno de los firmantes y serán debatidos y votados como si fueran una sola enmienda. Ambos proponen la supresión del Tratado III, título XXV, capítulo III, artículos 1.025 a 1.046 del dictamen, referentes a los Tribunales de Honor.

El Senador Prat tiene la palabra para defender los votos particulares de idéntico contenido.

El señor PRAT GARCIA: Asunto considerable es este de los Tribunales de Honor. Todos los tribunales son de honor. El derecho y el deber a la honra van inscritos en la esencia humana.

Sin poderlo evitar, me viene a la memoria un episodio de nuestras letras clásicas, que todas SS. SS. deben recordar bien. Decía Pedro Crespo: «Al Rey la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma sólo es de Dios».

Todos los tribunales son de honor. Hay dos concepciones del honor que también están enseñadas por nuestras letras clásicas: una concepción calderoniana un poco exterior, y una concepción cervantina interior y entrañable. ¿El honor depende de los demás? ¿Del concepto que los demás tengan del hombre? ¿O

el honor depende de la lealtad a la propia conciencia? Aquí está la raíz de ese sentimiento del honor que Pedro Crespo, labriego, que no tenía los privilegios, los fueros señoriales ni mucho menos, reclamaba como patrimonio del alma.

¿Cómo puede entonces pensarse que hay unos tribunales de honor que se distinguen de todos los demás? Yo no creo que sean muy antiguos en el Derecho español, al menos no los recuerdos anteriores al siglo XIX. La Auditoría y los Consejos de Guerra sí existían y había auditores eminentes, como uno de los fundadores del Derecho Internacional, Baltasar de Ayala, auditor de Alejandro Farnesio, o ya más cerca, ese ingenioso y sutil malagueño Serafín Estébanez Calderón, que fue auditor del Ejército del Norte, y los Consejos de Guerra, que son jurados que tienen el sentido humano con todos sus errores y aciertos posibles.

Esta institución es reciente e infortunada. No sé por qué recuerdo otra institución, que por fortuna ha ido pasando, y que se me aparece en la memoria al andar por estos pasillos y contemplar en un famoso lienzo la escena de la coronación del poeta Quintana, y en ésta la figura insigne de doña Gertrudis Gómez de Avellaneda, «la décima musa», cuyo esposo murió en un «lance de honor». También los «lances de honor» son ahora un recuerdo histórico y no por eso ha desaparecido el honor; al contrario, cada uno va pensando que el honor depende de la lealtad a su propia conciencia. Nuestros Tribunales de Honor no tienen sentido. Cuando la Constitución de la II República española declaraba en el artículo 95 «quedan abolidos todos los Tribunales de Honor, tanto civiles como militares», con sobriedad, con exactitud, me recordaba alguna de aquellas magníficas declaraciones de la primera de nuestras Constituciones, la de 1812, que, por fortuna, figura en el despacho oficial de nuestro Presidente, donde se declara, por ejemplo, «quedan abolidos los señoríos territoriales», o se declara algo que, quizá, hace innecesarios muchos artículos de todas las Constituciones, como, por ejemplo, aquel artículo según el cual «el amor a la patria es el deber de todos los españoles, que deben ser justos y benéficos».

Creo que con estos preceptos el honor mi-

litar no exige; al contrario, rechaza los Tribunales de Honor. Hay muchas razones. Es la primera de conciencia. Hay que pensar que el militar es, por propia selección, por dedicación al sacrificio, una persona leal hasta el máximo sacrificio de su propia vida, al mandato de su conciencia moral. Y si no actúa dentro del mandato de su conciencia moral, debe ser juzgado con arreglo a las leyes. Para eso existen las leyes. La disciplina militar no es más que obediencia a la ley, fundamental obediencia a la ley. Y son las ordenanzas ejemplo de obediencia a la ley y de mandato de obedecer la ley, y de la ley que, incluso, puede ser injusta, según aquel mandato socrático que «la dura ley es también ley y debe ser obedecida».

Sí, señores Senadores, no hacen falta, no deben existir los Tribunales de Honor, porque el honor está por encima de una decisión momentánea, apasionada o no, irresponsable en el sentido legal de la palabra, ausente de garantías y denegatoria de esa lealtad a la propia conciencia que debe tener todo ciudadano y más aún el militar, que es ciudadano por excelencia.

Porque podrá hablarse de poder civil y poder militar, pero lo que es indudable es que la civilidad es la que imponen los deberes del Ejército y la civilidad es lo que ha hecho nacer el sacrificio máximo del ciudadano en defensa de su patria.

Cuando los Tribunales de Honor surgen es que no hay fe en las leyes, es que no hay el sentido de que las autoridades son personas de honor, como deben ser siempre, como lo son mientras no se demuestre lo contrario.

En nuestra legislación actualmente vigente hay principios fundamentales que son conquistas fundamentales del Derecho: ningún delito si no está previamente definido por la ley; ninguna pena si no está definida por la ley; son las conquistas del siglo XVIII que están en todas las Constituciones.

¿Cómo puede juzgarse sin tener en cuenta la existencia de un delito o de una pena definida por la ley? Incluso acabamos de aprobar un artículo del Código de Justicia Militar que yo no lo conocía, porque aunque la ignorancia del Derecho a nadie excusa, a mí me debe excusar muchas veces. Es el artículo 1.011, en su apartado quinto, donde dice

que se puede formar expediente gubernativo por cualquier acto contra el honor militar que no constituya delito ni haya sido enjuiciado por algún tribunal. Entonces, los actos contra el honor militar, o constituyen delito, o pueden ser juzgados por expediente gubernativo con todas las garantías que da la ley adecuada y el recurso ante los tribunales competentes.

Es innecesario, por tanto, el Tribunal de Honor, pero es peligroso, es sumamente peligroso porque obedece el Tribunal de Honor a presiones sociales, a esa concepción exterior del honor que no es la cervantina, que es a algún caso solamente, la calderoniana; yo tengo mucho respeto por Calderón, aunque no sea más que por su definición del honor como patrimonio del alma.

Cuando nosotros pensamos que el Tribunal de Honor puede estar constituido bajo una idea apasionada, de momento; ideas y sentimientos apasionados que surgen con facilidad en las corporaciones reducidas, en cualquier corporación, y con estímulos en sí mismo respetables porque son honestos y sinceros, pero emocionales e injustos, entonces debemos tener mucho miedo a los Tribunales de Honor.

Recuerdo, por ejemplo, a don Francisco Maciá, que fue una especie de caballero andante de su idea política, de su concepción de Cataluña, que tenía incluso físicamente parecido con mi paisano don Quijote —también Sancho es paisano mío— (Risas), y que fue el primer Presidente de la Generalidad de Cataluña —que hay que reconocer que está dando muestras muy significativas de lo que es la construcción de nuestro nuevo Estado, de nuestro Estado actual—, que fue Coronel de Ingenieros, separado por un Tribunal de Honor; a don Francisco Maciá, que hizo aquellas valerosas y quijotescas aventuras, y luego consolidó la autonomía catalana en la Generalidad naciente, se le hace luego unánime homenaje en el Congreso, al que yo asistí como miembro de la Cámara, con ocasión de su muerte. ¡Son tan transitorias las pasiones humanas!

Y recuerdo también el caso de unos jóvenes oficiales de la Escuela Superior de Guerra que en los años del General Primo de Rivera, me parece que fueron separados por Tri-

bunales de Honor y no fueron restaurados en su derecho hasta que se proclamó la II República.

Porque los Tribunales de Honor tienen ese gran riesgo que reconocen todos: que son tribunales que obedecen a un momento de pasión, a un momento de prejuicio, a una indignación, y, sobre todo, que no tienen las garantías de serenidad y de responsabilidad que dan los tribunales de justicia, que también son tribunales de honor, pero tribunales de honor de cada uno de los que guardan su conciencia en su «almario».

Naturalmente que la Constitución es incompatible con los Tribunales de Honor. En nuestra enmienda citamos varios artículos: el de la seguridad y la libertad, el de la publicidad, el de la igualdad ante la ley, los principios famosos de ningún delito sin previa declaración en la ley, ninguna pena sin previa declaración en la ley, las sentencias públicas y motivadas... ¿Por qué? ¿Por qué hay que tener miedo a la publicidad? Cuando se tiene el sentido de la rectitud de la propia conciencia, no tengamos miedo a que actúen los Tribunales competentes.

No tiene, pues, justificación, la existencia actual de los Tribunales de Honor. Es un poco la rutina, es la costumbre que no nos atrevemos a interrumpir y que se puede interrumpir porque los propios defensores de los Tribunales de Honor, en cuanto creen de buena fe que son necesarios para mantener el honor del Ejército se tienen que dar cuenta de que el honor del Ejército está, ha estado siempre, en el servicio austero, valeroso y sacrificado de las leyes.

Por eso, porque creo que es innecesaria, que es injusta esta Institución, pido a la Cámara su derogación. Además, otra consecuencia penosa: el carácter infamante. Una de las grandes conquistas de la «época de las luces» en el Derecho Penal fue la desaparición de las penas infamantes. Son los sambenitos con que se solía ver a algunos condenados inquisitoriales y que reproducen algunas de aquellas impresionantes figuras de los grabados y de las pinturas de Goya: el sambenito es tremendo; el haber sido expulsado del Ejército por un Tribunal de Honor, y por razones misteriosas que no pueden decirse, no porque sean inefables como las relaciones místicas,

sino que son inefables porque no tenemos quizá decisión, quizá ímpetu para decirlo, no porque falte el valor físico, pero sí falta el valor frente al prejuicio, frente a la coacción social, frente a la rutina, frente a lo que parece una opinión colectiva que no tiene una responsabilidad detrás.

No podemos mantener los Tribunales de Honor, que en nada favorecen ni al Ejército ni a los funcionarios civiles ni a nadie; es una vuelta a una concepción un poco primitiva de los fueros. Cada uno tiene quizá —imitando a un gran poeta— sus gotas de sangre jacobina. Yo no lo disimulo, y creo que las gotas de sangre jacobina nos hacen recabar la igualdad ante la ley; el respeto a las manifestaciones responsables de los Tribunales públicos; el respeto a la Constitución, con esa Constitución que todavía debe exigir, aunque no lo diga, el amor a la Patria y la condición de honrados y benéficos a los ciudadanos españoles. Gracias, señoras y señores Senadores. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿Turnos en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? Tiene la palabra el señor Nadal Company, del Grupo Parlamentario Cataluña, Democracia y Socialismo.

El señor NADAL COMPANY: Muy brevemente, señoras y señores Senadores; don José Prat ha dicho exactamente todo lo que tenía que decir sobre este problema. Y lo ha dicho de una forma maravillosa. Añadir algunas palabras a lo que ha dicho el señor Prat sería tanto como estropear esta magnífica pieza parlamentaria. Solamente me queda agradecer emocionadamente su recuerdo a nuestro venerado Presidente Francesc Maciá, un hombre de honor, con un sentimiento tan extraordinario de su propia dignidad y que paradójicamente fue separado del Ejército por un Tribunal de Honor.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Villar Arregui.

El señor VILLAR ARREGUI: Señor Presidente, señoras y señores Senadores; a nadie oculto que en mi vida parlamentaria nunca he pasado un trance tan difícil ni tan amar-

go como el presente: honor calderoniano, honor cervantino, se interrogaba el ilustre Senador don José Prat, para quien, una vez más, desde esta tribuna rindo el tributo y el homenaje de mi respeto y de mi admiración. Ha rechazado el concepto calderoniano, pero ha citado aquel verso en que Pedro Crespo dice: «Al Rey la hacienda y la vida se han de dar / pero el honor es patrimonio del alma / y el alma sólo es de Dios».

Me permitirá el señor Prat que vuelva a reiterar algunas ideas vertidas en la intervención que tuve en la mañana de hoy; ideas que no son mías, ideas que son de los constituyentes. Los constituyentes dedicaron en el Título Preliminar de la Constitución un artículo 8.º a las Fuerzas Armadas, y al abolir los Tribunales de Honor, en el artículo 22, tuvieron el cuidado de referir aquella abolición sólo a la Administración Civil. ¿Qué es lo que ocurre a la luz de estos dos preceptos, el 8.º y el 22?

Lo que ocurre, Senador Prats, es que el Estado se caracteriza, entre otras cosas, por una burocracia, por una Hacienda y por el legítimo monopolio de la violencia cuando la violencia es no tanto para agredir cuando para defender (no es un azar que se haya cambiado de nombre al Ministerio de la Guerra para llamarle ahora Ministerio de Defensa), cuando quienes legítimamente tienen el uso de las armas para el ejercicio del monopolio de la violencia, que corresponde al Estado, componen las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Armadas, contempladas en el artículo 8.º de la Constitución, hay algo más que en ninguna otra de las instituciones del Estado.

No estoy ahora en busca de ficciones jurídicas para decir que las Fuerzas Armadas tienen personalidad jurídica. No es eso lo que importa. Yo pasé con más pena que gloria (por cierto, con un Consejo de Guerra en el intervalo) por las Fuerzas Armadas, y soy Oficial de Complemento de ellas. No sintonicé con el Ejército, pero advertí que el Ejército tiene alma, y que uno de los pilares en que el Ejército se sustenta es el alma que alienta en el Ejército, es el llamado espíritu militar.

Junto al honor personal, ese honor que es patrimonio nel alma «y el alma sólo es de Dios», cabe hablar concretamente en el caso

de los Ejércitos de un honor institucional, el honor inherente a ese espíritu militar, honor que es patrimonio de los Ejércitos, y los Ejércitos, parodiando el verso de Pedro Crespo, sólo son de la Patria.

Por eso es por lo que nuestros constituyentes, que abolieron los Tribunales de honor del ámbito de la Administración Civil, «a sensu contrario», no excluyeron la posibilidad de su subsistencia en el ámbito de la Administración Militar.

Se ha despejado toda duda en la Disposición adicional de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial al decir que se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la jurisdicción, y quedó abolida una ley del año 1940 que los había creado respecto de las Magistraturas de Trabajo. No se habla de espíritu judicial, no se habla de espíritu funcional, no se habla de espíritu institucional; en cambio, las ideas espíritu militar y disciplina castrense son los pilares que sirven de fundamento para una vocación extraña a mí, pero inteligible no ya por mí, que sería lo de menos, sino por los propios constituyentes.

¿Qué es un Tribunal de Honor en el ámbito castrense? Es un jurado que enjuicia los hechos desde la óptica del honor de los Ejércitos, del honor del espíritu militar; en definitiva, de ese honor que, por pertenecer al espíritu militar, es patrimonio de la Patria, y eso no es susceptible de codificación alguna, eso está más allá de la tipificación delictiva, eso juega en el ámbito de las conductas o de los actos personales, cuya compatibilidad o no con el espíritu que alienta y hace posible la vida de la institución sólo la institución puede enjuiciar, a través de unos prudentes parámetros que el Código de Justicia Militar establece para el nombramiento y la constitución de los Tribunales de Honor, sobre la base de que sean más antiguos, inmediatamente más antiguos que aquel cuya conducta en relación con el honor militar, no con su propio honor, ha de ser enjuiciado.

Comprendo que mis argumentos pueden ser débiles. Sólo desde esta perspectiva intento explicar no mi criterio, el criterio que está en el artículo 22 de la Constitución, donde no hace falta demasiada hermenéutica.

Si se incluye la prohibición de los Tribu-

nales de Honor respecto de la Administración Civil del Estado, es porque nuestra Constitución quiere mantener los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración Militar.

He tratado de explicar un precepto constitucional, he tratado de entender un precepto constitucional; por eso me atrevo a decir que la abolición o la derogación de los preceptos que regulan en el Código de Justicia Militar los Tribunales de Honor podría ser una ley inconstitucional, por violar en su contrario el artículo 22 de nuestro código fundamental. Entiéndase ese espíritu abnegado militar, y sólo a esa luz y a la luz del honor de quienes componen nuestras Fuerzas Armadas, puede comprenderse que subsista en ellas una institución con arraigo y con tradición en ellas mismas.

Por eso, señores Senadores, porque tenemos la grave duda —para mí la certeza, en virtud de la hermenéutica a la que acabo de hacer mención— de que la derogación de esos preceptos, además de contradecir un valor que está en la base misma de las instituciones militares, podría ser inconstitucional, es por lo que, lamentándolo con toda el alma, no podremos estar con el Senador Prat en la votación que ahora vamos a celebrar.

El señor PRESIDENTE: El Senador Prat pide la palabra. ¿A efectos...?

El señor PRAT GARCIA: A efectos de rectificación, si es posible.

El señor PRESIDENTE: No es posible, señor Prat; cuánto lo lamento, no lo permite el Reglamento.

El señor PRAT GARCIA: Es para alusiones a Pedro Crespo. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: El Senador Prat sabe cuánto me agradecería concederle la palabra, no para alusiones de don Pedro Crespo, sino solamente para volver a oírle.

Vamos a someter a votación los votos particulares que han sido objeto de debate, todos ellos referidos al artículo 5.º del dictamen de la Comisión.

En primer lugar, el voto particular del Gru-

po Parlamentario Socialista Andaluz, que se corresponde con la enmienda número 45.

Señores Senadores que votan a favor. (Pausa.) Recuerdo al Grupo de UCD que manifestó que estaba aceptado el voto particular del Grupo Socialista Andaluz relativo a la enmienda número 45. No parece muy prudente que la Presidencia tenga que impulsar a que se vote en un sentido o en otro. (Pausa.) Pueden sentarse.

Queda aprobado por asentimiento el voto particular correspondiente a la enmienda número 45, y en tal sentido incorporado al texto del artículo 5.º del dictamen.

Se pone a votación el voto particular del Grupo Socialista que se corresponde con la enmienda número 46. (Pausa.)

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 58.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Socialista correspondiente a la enmienda número 46.

Retirado el voto particular del Grupo Cataluña, Democracia y Socialismo, correspondiente a la enmienda número 20, procede votar el del Grupo Socialista, que se corresponde con la enmienda número 48. (Pausa.)

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 57, y una abstención.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Socialista, correspondiente a la enmienda número 48.

Votamos ahora el voto del Grupo Cataluña, Democracia y Socialismo, que se corresponde con la enmienda número 49. (Pausa.)

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 58.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Cataluña, Democracia y Socialismo, correspondiente con la enmienda número 49.

Se pone a votación el voto particular del Grupo Socialista, que se corresponde con la enmienda número 50. (Pausa.)

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 58.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Socialista, correspondiente con la enmienda número 50.

Pasamos al voto particular del Grupo Socialista, que se corresponde con la enmienda número 51. *(Pausa.)*

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 58.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Socialista, correspondiente con la enmienda número 51.

Voto particular conjunto correspondiente con la enmienda número 52 del Grupo Socialista y del Grupo Cataluña, Democracia y Socialismo, que se corresponde con la enmienda número 53, referidos ambos a los Tribunales de Honor. *(El señor Nadal Company pide la palabra.)*

El señor PRESIDENTE: No hemos terminado de votar, señor Nadal.

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 58.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los votos particulares del Grupo Socialista, enmienda número 52, y del Grupo Cataluña, Democracia y Socialismo, enmienda número 53, de idéntico contenido.

El señor Nadal tiene la palabra, ahora sí.

El señor NADAL COMPANYY: Cuestión de orden, señor Presidente. No he renunciado a la enmienda número 53.

El señor PRESIDENTE: ¿Quién ha dicho la enmienda 53 renunciada? He dicho voto particular conjunto correspondiente a las enmiendas 52 y 53, de idéntico contenido, se ponen a votación.

El señor NADAL COMPANYY: Es que voy a sostenerla.

El señor PRESIDENTE: Es que ya la sostuvo. Es la referida a los Tribunales de Honor.

El señor NADAL COMPANYY: No la he sostenido, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Hay la enmienda del Grupo de que Su Señoría es portavoz y que es de idéntico contenido a la del Grupo Socialista.

El señor NADAL COMPANYY: En apariencia, pero no en el fondo; y, además, en el texto se diferencia.

Yo he intervenido en turno de portavoces en la enmienda número 52 para sostener la enmienda del Grupo Socialista. Pero esto no quiere decir que renuncio a la 53. Es decir, en el curso de mi intervención en ningún momento he empleado la palabra «renunciar».

El señor PRESIDENTE: Ni yo la he entendido. Lo que he entendido, y así me pasa una nota el Secretario General, es que son dos enmiendas de idéntico contenido y que, por consiguiente, al ser de idéntico contenido, uno de los dos Grupos opta por la defensa conjunta. Levantó la mano el Senador Prat y le concedí la palabra, sin ninguna objeción por parte de Su Señoría.

El señor NADAL COMPANYY: No, no, si es que...

El señor PRESIDENTE: Perdón. No vamos a entrar en diálogo. Siéntese, por favor, siéntese.

La enmienda 52, del Grupo Parlamentario Socialista, propone la siguiente enmienda al artículo 5.º: Tratado III, Título XXV, capítulo III, artículos 1.025 a 1.046 referentes a los Tribunales de Honor. Se propone su supresión.

Enmienda 53, del Grupo Parlamentario Cataluña, Democracia y Socialismo. Artículos 1.025 a 1.046, se propone la supresión de todos ellos, que tratan de los Tribunales de Honor.

Señor Senador: la enmienda ha sido discutida, debatida, votada y rechazada.

A votación el texto del artículo 5.º, según el dictamen de la Comisión. *(Pausa.)*

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 58; abstenciones, 32.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del artículo 5.º del proyecto de ley en el texto del dictamen.

Señor Nadal Company, para no incurrir en nuevos errores, cuando anteriormente S. S. hizo constar expresamente que renunciaba a la enmienda número 20, ¿hay que entender que también está renunciado el párrafo de la enmienda número 20, que alude al artículo 8.º del dictamen?

El señor NADAL COMPANYY: Sí, igualmente.

Artículos
6.º a 13
del dictamen

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. En ese caso, los artículos 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10, 11, 12 y 13 del dictamen quedan sin votos particulares. ¿Se pueden tratar conjuntamente? (Asentimiento.) ¿Se pueden estimar aprobados por asentimiento de la Cámara? (Pausa.) Así se acuerda.

Creo que es necesario un descanso de un cuarto de hora y así se proclama.

Se suspende la sesión por quince minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión con el voto particular del Grupo Socialista correspondiente a su enmienda número 56, que postula la introducción de un artículo 13 bis en el proyecto de ley que estamos debatiendo.

El señor Prat, portavoz del Grupo Socialista, tiene la palabra.

El señor PRAT GARCIA: Nuestra enmienda tiende a articular alguna relación útil entre el Fiscal General del Estado y la Fiscalía del Consejo Supremo de Defensa.

Yo he sido, perdónenme SS. SS. mi recuerdo personal, funcionario fiscal en la Fiscalía de la Primera División en Madrid, y dependíamos del Fiscal General del Estado, de la República, y había auditores de guerra, tanto del Ejército como de la Marina, adscritos a esa Fiscalía, y es que la Fiscalía, el Ministerio Fiscal, debe tener unidad en cualquier régimen. La prueba está en que es el propio proyecto de ley del Gobierno quien establecía esta manera de relacionarse entre el Fiscal General del Estado y el Fiscal To-

gado del Consejo Supremo de Justicia Militar.

No es que esté bien que nosotros, la oposición, defendamos al Gobierno, pero, de hecho, estamos defendiendo al Gobierno al sostener esta enmienda. Que nos perdone el Gobierno este atrevimiento.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿Turnos en contra? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Martín Villa.

El señor MARTIN VILLA (don Emilio): Senador Prat, S. S. puede darme lecciones en todo, y seguro que en Derecho Político y Administrativo también, sin embargo, me va a permitir una humilde discrepancia.

Me parece que esta mañana decíamos que latía en el fondo alguna discrepancia, alguna idea filosófica distinta, porque, en definitiva, tiene que ser así con dos partidos que tienen filosofías distintas, que tienen un proyecto distinto de sociedad y que tienen un proyecto distinto de Estado, de la construcción del Estado y de la administración de justicia, y, además, de las jurisdicciones.

Me parece que la Constitución habla de la jurisdicción ordinaria y habla de la jurisdicción militar —vuelvo a repetir, me parece que lo he dicho dos o tres veces esta mañana—, no como una especialidad de la jurisdicción, sino con una jurisdicción separada, que no es regresiva, que no es residual, que es una jurisdicción especial, que es la jurisdicción militar.

Entendiendo así las cosas y aplicando esta tajante separación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial, no entendemos que deba haber vasos de comunicación entre el Fiscal General del Reino, Fiscal General del Estado y el Fiscal que hoy hemos convertido en togado, el Fiscal Jefe del Ministerio Fiscal —llamémoslo así— del Consejo Supremo de Justicia Militar. Son dos Cuerpos totalmente distintos, único en su orden y único en su orden el otro.

No vamos a aplicar aquí, ni siquiera, la teoría de la separación de los poderes, puesto que uno está incardinado, aunque ejerza jurisdicción, dentro de uno de los poderes. De todas suertes, el Gobierno tiene la comunicación; la del Ministerio de Justicia, en la uni-

dad del Gobierno, con el Fiscal General del Reino, y la del Ministro de Defensa, dentro de la unidad del Gobierno, con el Fiscal Militar.

Estas son las razones que abundan en el anuncio de que no podemos admitir —y bien que lo sentimos, a título personal sobre todo— la enmienda que ha presentado mi admirado amigo el Senador Prat. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, enmienda número 56, que propone la introducción de un nuevo artículo en el texto articulado del proyecto de ley. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 45.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, enmienda número 56.

Un nuevo voto particular defiende el Grupo Parlamentario Cataluña, Democracia y Socialismo, en correspondencia con la enmienda número 55, también para intentar la introducción de un nuevo artículo en el proyecto.

Tiene la palabra el señor Nadal.

El señor NADAL COMPANYY: Gracias, señor Presidente. Se trata de la introducción del siguiente texto: «Todos los procedimientos seguidos por accidentes de circulación de vehículos que no pertenezcan al Ministerio de Defensa, aunque sean propiedad de militares o conducidos por los mismos, pasarán a la jurisdicción ordinaria». De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, que reduce la jurisdicción militar al ámbito de lo estrictamente castrense.

Esta es la síntesis de nuestra motivación, que podría ampliar en otros términos, incluso, en el aspecto práctico, toda vez que son muchas las ocasiones y oportunidades en que ha sido la propia autoridad militar la que se ha inhibido en favor de la jurisdicción ordinaria en accidentes de circulación.

Se trata de legalizar estas situaciones, porque es indudable que cuando un militar conduce un automóvil para ir de excursión con su familia o para un asunto particular privado, no presta ningún servicio al Ejército. Por

consiguiente, en aquel momento está descartado de la disciplina militar propiamente dicha, que es lo que en realidad trata de amparar la reforma y el propio Código de Justicia Militar. Creo que la introducción de este artículo nuevo serviría para clarificar estas situaciones y, desde luego, beneficiaría el orden general, la seguridad jurídica en todos los aspectos, toda vez que los involucrados en accidentes de circulación, cuando se encontraran frente a otro conductor militar, no tendrían que seguir la serie de complicaciones que supone el ver las consecuencias del accidente, la sentencia y los enjuiciamientos a través del Código de Justicia Militar.

Si desde el partido del Gobierno encuentran otra solución viable a los problemas que puedan sucederse en este orden de cosas, entonces naturalmente no tendría sentido, pero hasta tanto yo no vea una solución de orden práctico, tengo que sostener esta enmienda, porque creo que es lo suficientemente razonable.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor o en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.)

El Senador Martín Villa, del Grupo de UCD, tiene la palabra.

El señor MARTIN VILLA: Realmente, Senador Nadal, esto sí que no lo podemos votar por innecesario, porque aquello que el Senador Nadal no veía está en el artículo 16. Me voy a permitir, como recordatorio, leer al Senador Nadal lo que dice el artículo 16, causas de desafuero, que esta mañana hemos traído, hemos llevado, hemos repetido hasta la saciedad. Dice el artículo 16: «Los militares y demás **personas enumeradas** en los artículos 13 y 14 **serán sometidos** a los Tribunales de la jurisdicción ordinaria y en su caso de las autoridades civiles competentes, en los procedimientos que se den las siguientes circunstancias: primera, los delitos que tengan naturaleza común, cometidos por militares, cuando los hechos no afecten al buen régimen y servicio de las Fuerzas Armadas. Asimismo, los que cometan en el ejercicio de funciones propias de destinos o cargos civiles, o con ocasión de ellos».

Los ejemplos que el Senador Nadal ha ci-

tado se subsumen en el supuesto que contempla el número 1; se excluyen de la jurisdicción especial y los conocerá la jurisdicción civil. «Per se», yo creo que con la simple lectura de esto nos ahorramos de dar explicaciones de por qué, por innecesaria, tenemos que votar en contra de la enmienda que ha presentado el Senador Nadal.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el voto particular del Grupo Parlamentario Catalunya, Democracia i Socialisme, enmienda número 55. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 47; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Rechazado el voto particular del Grupo Parlamentario Catalunya, Democracia i Socialisme, enmienda número 55, por 23 votos a favor, 47 en contra y dos abstenciones.

Ahora es el Grupo Socialista Andaluz el que en plena correspondencia con su enmienda número 54, postula la adición de un nuevo artículo al proyecto.

El Senador Ojeda tiene la palabra.

El señor OJEDA ESCOBAR: Señor Presidente, Señorías, nuestra enmienda pretende introducir un nuevo artículo 14, cuyo texto dice lo siguiente: «Se suprime la llamada Sala de Pensiones del Consejo Supremo de Justicia Militar, debiendo realizarse el señalamiento de haberes pasivos del personal militar en el Ministerio de Hacienda. Para ello, el Gobierno aprobará el correspondiente decreto, a propuesta conjunta de los Ministerios de Defensa y de Hacienda».

Punto de partida de esta enmienda es la consideración de que el Consejo Supremo de Justicia Militar es el máximo organismo, la cúspide de la jurisdicción militar, y que debe dedicarse única y exclusivamente a cumplir su función jurisdiccional.

Hasta ahora, en el seno del Consejo existía lo que se llamaba Sala de Pensiones, con unas facultades muy concretas. Nosotros pretendemos que el Consejo Supremo se dedique exclusivamente a su función jurisdiccional y que estas funciones o competencias que ve-

nía ejerciendo pasen al Ministerio de Hacienda.

Esta enmienda que queremos introducir está avalada por un ilustre jurista militar que ha publicado ya unas bases para el futuro Código de Justicia Militar, bases que hasta ahora tienen la simple autoridad de su autor, y en ellas se contempla este supuesto concreto de la supresión de la Sala de Pensiones.

Se puede argumentar en contra que la supresión inmediata, la supresión rápida de esta Sala de Pensiones, puede generar, puede provocar un estado caótico y puede incluso producir una paralización en la concesión de la tramitación de estas pensiones. Sin embargo, nosotros creemos que se puede arbitrar una situación de transitoriedad; se puede acudir a normas de derecho transitorio, y los Ministerios de Hacienda y de Defensa cuentan con los medios legales pertinentes para dictar en conjunto un decreto que arbitre los medios personales y materiales necesarios para que la concesión de pensiones no sufra paralización, ni tampoco sufra un retraso.

Por tanto, creemos que es una enmienda puramente técnica que va en prestigio y en beneficio del Consejo Supremo de Justicia Militar y pediríamos —por mi parte ya por última vez, porque es mi última intervención— que los compañeros de UCD la apoyen y den su voto favorable.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿Turnos en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.)

El señor Sánchez Torres, del Grupo de UCD, tiene la palabra.

El señor SANCHEZ TORRES: Señor Presidente, Señorías, ésta también es mi última intervención, creo, y me toca tenerla en contestación a mi querido amigo y compañero de profesión y de Cámara el Senador Ojeda.

Pienso, y lo hemos repetido esta mañana muchas veces, que nos encontramos ante una reforma parcial, limitada y concreta del Código de Justicia Militar. Si efectivamente este voto se admitiera y se hubieran admitido otros, a estas alturas habríamos modificado no sólo el Código de Justicia Militar, sino también el Código Penal, que en cierto modo

se ha modificado con un voto particular defendido por el señor Irizar, el Código Civil, y en este momento podríamos modificar el Estatuto de Clases Pasivas y a mí me parece ya un poco fuerte.

Quiero decir que el Código de Justicia Militar no regula la competencia para la declaración y reconocimiento de pensiones a las clases pasivas del Estado; la competencia está regulada en el artículo 93 del Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de octubre de 1926; convalidado con fuerza de ley el 9 de septiembre de 1931, que atribuía dichas competencias a la entonces Dirección General de Deuda Pública y Clases Pasivas, hoy Dirección General del Tesoro del Ministerio de Hacienda, para las pensiones de los empleados civiles, y al Consejo Supremo de Justicia Militar para los individuos de los tres Ejércitos, Guardia Civil y Policía Armada, hoy Policía Nacional.

Es un hecho cierto que existe, dentro del concepto unitario de la Administración Pública, dos esferas perfectamente diferenciadas y delimitadas: la Administración Civil y la Administración Militar, con sus normas específicas, y dentro de las mismas existe una legislación de las clases pasivas del Estado de los funcionarios de la Administración Civil, y otra legislación de las clases pasivas del Estado de los funcionarios militares y asimilados, legislaciones que son complejas y distintas por los matices de su propia naturaleza y que es principio general aceptado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo que los Tribunales Económico-Administrativos y cualesquiera otros órganos que ejerzan jurisdicción económico-administrativa, se reputan como formando parte de la Administración.

En el deseo de convencer a mi querido compañero, yo quiero decirle que esta modificación no debe tener aquí su encaje, el encaje no es en el Código de Justicia Militar, el encaje sería a través de una modificación del Estatuto de Clases Pasivas y de ese artículo 93.

Esta es una razón de fondo que podría excluir todas las demás, pero existen, además, circunstancias que, por ser práctica, también obligan a considerar reflexivamente esta enmienda. Desde un punto de vista práctico, pa-

ra el reconocimiento de las pensiones civiles existe un organismo técnico, altamente cualificado, que es la Subdirección General de Clases Pasivas, y para el reconocimiento de las pensiones militares existe otro organismo, que es la Sala de Pensiones del Consejo Supremo de Justicia Militar, con sus específicos asesores, los miembros del Cuerpo Jurídico Militar.

Si por competencia entendemos la basada en la propia esencia del concepto, es decir, capacidad para conocer una autoridad u organismo administrativo, según la materia, en orden a su especial idoneidad y aptitud; si tenemos en cuenta esto, tendríamos que tener presente que esta reforma que se pretende produciría que pasara de las manos de unos especialistas a manos de otros, que son muy especialistas y muy preparados también, pero que, indudablemente, dada esta legislación compleja, de carácter militar, en cuanto a las clases pasivas, puede que para ello en este momento no estén preparados; como consecuencia de este argumento de excepción —no es éste el lugar adecuado— se podría producir un cierto colapso administrativo si millones de expedientes pasaran —ya he oído que el Senador ha dicho que no precipitadamente—, pero si pasaran, como consecuencia de esta enmienda en un plazo más o menos breve o medio plazo, ocurriría eso. En fin, éste es un tema que debe ser estudiado; es un tema que no debe ser tratado en esta reforma parcial del Código de Justicia Militar, y por todas estas razones, Señorías, nuestro Grupo votará en contra de este voto particular.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar el voto particular del Grupo Socialista Andaluz, enmienda número 54.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 48.

El señor PRESIDENTE: Rechazado el voto particular del Grupo Socialista Andaluz, enmienda número 54.

Disposición adicional del dictamen. Existe un solo voto particular del Grupo Catalunya, Democracia i Socialisme, enmienda número 58, que postula la inclusión de un apartado primero, nuevo. El Senador Subirats tiene la palabra.

**Disposicio-
nes adicional
y transitorias
primera a
quinta del
dictamen**

El señor SUBIRATS PIÑANA: Señor Presidente, a pesar del indudable interés de esta enmienda, la retiramos.

El señor PRESIDENTE: Se da por retirada.

Se somete a votación el texto de la Disposición adicional del dictamen y, si no hay inconveniente, se puede agrupar con las Disposiciones transitorias primera, segunda, tercera, cuarta y quinta del propio dictamen, que no tienen votos particulares. ¿Algún inconveniente? ¿Se las da tratamiento conjunto? ¿Se aprueban por asentimiento? (Pausa.) Así se declara. Por consiguiente, quedan aprobadas por asentimiento la Disposición adicional y las transitorias primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Con ello llegamos al voto particular, también del Grupo Parlamentario Catalunya, Democracia i Socialisme, enmienda número 59, que postula la inclusión de una Disposición transitoria nueva, que sería, en todo caso, la quinta bis.

El Senador Subirats tiene la palabra.

El señor SUBIRATS PIÑANA: También la retiramos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Se da por retirada.

Ahora es el Grupo Parlamentario Socialista el que expone el voto particular, correlativo a la enmienda número 60. También pretende la inclusión de una Disposición transitoria nueva, quinta bis, vuelvo a repetir, en caso de que fuera aprobada.

El Senador Laborda tiene la palabra.

El señor LABORDA MARTIN: Señor Presidente, Señorías, vamos a hablar en esta enmienda (que reconocemos de entrada la no pertinencia de su inclusión aquí) de filosofía, puesto que de filosofía distinta se ha estado hablando. En esta enmienda sospecho que quizá no va a haber en el fondo de lo que se pretende demasiadas diferencias, o creo yo que no puede haberlas.

La enmienda parte de una situación de discriminación, que nosotros quisiéramos que se viera superada. Esta situación de discriminación parte de la Ley de Amnistía que esta Cámara aprobó, allá por el mes de octubre de 1977, y quizá, examinando lo que fue el fondo

de aquella Ley de Amnistía, podamos entender no sólo el espíritu de esta enmienda, de este voto particular, sino también la intencionalidad, el espíritu que subyace en esta intervención mía y después, al final, intentaré explicar la posición definitiva de mi Grupo.

La Ley de Amnistía creemos nosotros, y creo que ustedes también lo comparten, que tuvo un alcance superior al que en la estricta lógica política, en la estricta lógica jurídica pudiera darse. La Ley de Amnistía no sólo amnistió aquellos delitos que, justificados por la teoría de la resistencia a la Dictadura, fueron cometidos con el propósito de defender los principios democráticos o combatir la Dictadura; ése era el estricto sentido político de la amnistía, ésa era su justificación; la amnistía de 1977 tuvo un alcance superior, porque fue más generosa que ese estricto sentido político. Fue más generosa, porque, de acuerdo con lo que había sido la filosofía de la izquierda democrática, la amnistía pretendió olvidar todo aquello que había separado de manera irreconciliable a los ciudadanos o a los españoles en aquel momento todavía no ciudadanos. Es decir, no se amnistió sólo a los combatientes contra el franquismo, sino que los demócratas olvidaron con ella todo lo que había pasado antes. Renunciaron a exigir responsabilidades, mirando hacia el pasado, y así no solamente hubo justicia con la amnistía, sino que se fue más allá y hubo perdón; los demócratas no quisieron, repito, mirar hacia atrás, exigiendo responsabilidades, y se aceptó la sinceridad del paso hacia posiciones democráticas de aquellos que habían estado contra la democracia en épocas anteriores.

Por lo tanto, hubo generosidad, y prueba de aquella generosidad fue que la oposición democrática en 1977, entendiendo las dificultades del momento —y el Senador Martín Villa ha citado al Cardenal Richelieu esta mañana, señalando que a veces se obedece a los acontecimientos—, obedeció a los acontecimientos y, tal vez atendiendo a lo que en la terminología de la época se llamaban los poderes fácticos, hubo en aquella Ley de Amnistía algo que contrariaba su justicia y que exigía un más allá de generosidad a una gran parte, al menos, de los que en aquel momento aprobamos aquella ley.

Hubo discriminación, porque mientras la

Ley de Amnistía posibilitaba el reingreso a sus Cuerpos a aquellos funcionarios civiles que como consecuencia de las penas accesorias habían sido expulsados de ellos, sin embargo no ocurría lo mismo para aquellos funcionarios de las Fuerzas Armadas que, como consecuencia de penas accesorias, quedaron separados del cargo, aunque la pena principal fue amnistiada.

También la Ley de Amnistía tenía un segundo elemento incompleto, y es que los combatientes del Ejército republicano, a efectos de acreditar su antigüedad en el servicio para pasar a la situación de retiro, y mediante un desarrollo posterior en decretos, solamente pudieron acreditarla con la fecha límite del 17 de julio de 1936, entendiéndose que antes eran militares profesionales y después militares de la guerra civil.

Ha existido una discriminación que en las circunstancias de aquel momento pudo entenderse, pero que en las circunstancias de hoy es más difícil de entender. Por eso está esta enmienda aquí. Esta enmienda obedece a las circunstancias y a los acontecimientos, porque creemos que la democracia tiene hoy ya pilares que en 1977 no tenía, y uno de ellos, el principal, es la Constitución, que en aquel momento queríamos todos que surgiera sin tensiones.

Sabemos que no es su lugar éste para reparar aquella discriminación, pero también es verdad que, reiteradamente, desde los bancos de la mayoría, se nos ha señalado esta tarde que ésta es una ley de excepción, que es una ley provisional, y, por tanto, en ese carácter de urgencia y de provisionalidad tal vez cabría introducir esto, que yo pienso que se comparte como una filosofía general en toda esta Cámara.

Entendemos que nuestra enmienda es incompleta; es incompleta, porque pretende reparar el problema de aquellos militares que fueron procesados en los años finales del régimen anterior, y, sin embargo, nada pretende resolver respecto de los militares del Ejército republicano. Estos momentos, nosotros, aquí representados por mi persona, los estamos aprovechando fundamentalmente para traer este tema a la Cámara, aprovechando también la presencia de los dos responsables de la Defensa en el Gobierno. Es incompleta, repi-

to, nuestra enmienda. Además, existe en el Congreso de los Diputados la expresión de esa filosofía Común, que yo acabo de señalar; es decir, existe una proposición de ley, suscrita por todos los Grupos Parlamentarios, que están representados en esta Cámara, que se refiere a la desaparición de la discriminación en el trato que reciben por la Ley 46/1977, de 15 de octubre, Ley de Amnistía, los militares profesionales y los funcionarios civiles comprendidos en ella, con perjuicio de los primeros.

Por eso, nosotros vamos a retirar nuestra enmienda, pero hemos aprovechado este turno porque queremos que este tema no se olvide, y porque, además, teníamos la intención que, con más o menos fortuna, pretendo lograr hoy en esta tribuna, de que esa voluntad que se expresó en la suscripción de esta proposición no de ley, en fecha 26 de junio de 1980, se mantenga hoy, porque todos conocemos que ha habido —creo yo— un exceso de tensión, en torno de esta proposición de ley suscrita por una cantidad inusitada de Grupos Parlamentarios del Congreso, y, evidentemente —no vamos a ocultar tampoco nada—, ha creado cierto malestar en sectores de las Fuerzas Armadas, porque estos sectores de las Fuerzas Armadas han entendido que era una actitud del Congreso de los Diputados que excedía, tal vez, lo que debiera ser el respeto y el lógico entendimiento entre las Cámaras y el Ejército.

Pero, dejando de lado esa capacidad por sí mismo del Congreso de tomar nuevas iniciativas, yo creo que hay un argumento muy importante para llevar la tranquilidad a los sectores militares que han manifestado ciertas reservas o cierto distanciamiento respecto de esta iniciativa, porque en el propio Código de Justicia Militar, en el artículo 213, se señala que las penas militares de pérdida de empleo y separación de servicio, impuestas como principales o como accesorias de otras penas, y la pena accesoria de degradación militar son siempre de carácter permanente; mas añade que los que las sufran no podrán ser rehabilitados, sino en virtud de una ley.

La iniciativa de los Grupos Parlamentarios tiene bastantes precedentes. Yo diría que nuestra historia contemporánea, salpicada, evidentemente, de tensiones, en las que, por

desgracia para nuestro país, el Ejército ha sido protagonista, está llena de decisiones legislativas en las que se ha repuesto en el Cuerpo a militares que, por circunstancias de las que todos somos corresponsables, fueron apartados. Nosotros entendemos que éste es un deber de las Cámaras.

La Constitución descansa en el principio de la no discriminación. También, y esta mañana se ha señalado, el artículo 8.º de la Constitución indica que los militares, las Fuerzas Armadas, son garantes de este orden constitucional. ¡Qué menos, pues, que pedir el máximo esfuerzo que todos seamos capaces de dar! A lo largo de esta sesión creo que los Grupos de la oposición, como el Grupo que sustenta al Gobierno, en la defensa de las enmiendas, en las diferentes intervenciones sobre un tema tan importante como éste, hemos dado buena prueba de ese sentido de la responsabilidad y del acercamiento hacia los problemas que afectan a nuestra historia pasada, y, evidentemente, muchos de ellos pasan por el Ejército.

Creemos, una vez más, que ese principio de no discriminación que está en la Constitución, de la que las Fuerzas Armadas son sus garantes, debe estar, en el momento en que esta proposición se vea en el Congreso, en el espíritu de los Grupos Parlamentarios, porque creemos que hubo una discriminación que, obedeciendo a los acontecimientos, hoy puede ser superada.

Nosotros, con esta voluntad, retiramos esta enmienda.

Quisiéramos, en cualquier caso, que estas palabras se entendieran como lo que son, como un enorme esfuerzo por solucionar todo un problema presente, pero que quizá ponga punto final al largo problema de más de cuarenta años.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El señor Ministro de Defensa, que ha pedido la palabra, puede usar de ella.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Rodríguez Sahagún): Señor Presidente, señoras y señores Senadores, muy brevemente, me gustaría puntualizar algunos extremos, en rela-

ción con la intervención del Senador Laborda, que me ha precedido en el uso de la palabra.

En primer lugar, matizar que yo nunca dije esta mañana que hay que obedecer a los acontecimientos. Me refería a que los acontecimientos son tercos, están ahí, en relación con sucesos totalmente diferentes, y cité una frase del Cardenal Mazarino en relación con el servicio de los acontecimientos.

Pero el motivo de mi intervención es simplemente un motivo de precisión. Esta mañana, en una brillantísima intervención del Senador Villar Arregui, se ha hablado de cómo no se puede interpretar como discriminación lo que es un tratamiento diferencial de algo que es distinto, que no se puede interpretar como discriminación lo que es la consideración específica de las características peculiares y totalmente diferentes del funcionario militar o del funcionario civil y del ejercicio de la función pública en el ámbito castrense.

Por tanto, sólo quiero señalar que en el punto de partida de la intervención del Senador Laborda hace permanentemente alusiones a acabar con situaciones de discriminación, que yo entiendo que no son tales, sino simplemente la consideración específica de las características de un estamento y otro estamento, consideración específica que está reiterada hasta la saciedad en la Constitución y en las Reales Ordenanzas, que fueron aprobadas, absolutamente por unanimidad, en las dos Cámaras en fechas posteriores a la aprobación de la Constitución.

Así, por ejemplo, citando sólo una cosa, el artículo 28 de la Constitución —que hoy tenía el gusto de aclarar para tranquilizar, y no lo he hecho públicamente por no estar interviniendo continuamente el Ministro, pero lo he hecho en privado a su compañero el Senador Ojeda—, que establece la libertad de sindicación (y, por tanto, reconozco públicamente, para su tranquilidad, que esa libertad se aplicará totalmente al personal civil tratado como funcionario), señala, sin embargo, una limitación clara a la posibilidad de sindicación para las Fuerzas Armadas. ¿Eso es discriminación, o simplemente la consideración de las características específicas de uno y otro estamento?

Y otra precisión, para no entrar ahora en un debate, puesto que, además, se ha retira-

do la enmienda: las personas a las que alude la enmienda fueron objeto de una sentencia en Consejo de Guerra, no por profesar unas ideas, sino por el hecho de llevar adelante una organización clandestina en el seno de los Ejércitos. Buena prueba de ello es que otras muchas personas, simpatizantes, allegadas, que profesaban las mismas ideas, pero que por espíritu militar —el espíritu militar de que se ha hablado esta tarde aquí— no se integraron en esa organización clandestina, no tuvieron ninguna sentencia de Consejo de Guerra, y algunos que fueron procesados no tuvieron la pena de separación del servicio.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Enmienda retirada; no ha lugar, por consiguiente, a su votación.

Disposición transitoria sexta del dictamen

Disposición transitoria sexta del dictamen. No tiene votos particulares. Procede, por tanto, someterla a votación, y, si no hay inconveniente, se estimará aprobada por asentimiento de la Cámara. (Asentimiento.) Así pues, se declara.

Disposición final primera del dictamen

Disposición final primera del dictamen. Hay un voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, en correspondencia con la enmienda número 61, que afecta al apartado 2 de esta Disposición.

El señor LABORDA MARTIN: Que se pase a votación, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Se pone a votación el voto particular del Grupo Socialista, en correspondencia con la enmienda número 61. (Pausa.)

El señor LABORDA MARTIN: Señor Presidente, yo creo que está admitida en Ponencia.

El señor PRESIDENTE: El texto que aquí se me da dice: «El citado proyecto articulado deberá tener entrada en las Cortes antes de cumplirse un año y cuatro meses desde la fecha de publicación de esta ley».

El señor LABORDA MARTIN: Se retira, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Retirado.

Entonces, resta por votar el texto de la Disposición final primera del dictamen. Al quedar sin voto particular, ¿se acepta la propuesta de la Presidencia de que se entienda aprobada por asentimiento? (Asentimiento.) Así se declara.

Y quedan las Disposiciones finales segunda y tercera (nueva) del dictamen, que no tienen votos particulares. ¿Tratamiento conjunto? (Asentimiento.) ¿Aprobadas por asentimiento? (Asentimiento.) Así se proclama.

Disposiciones finales segunda y tercera (nueva) del dictamen

Con ello se llega al final del debate y, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas propuestas por el Senado al Congreso de los Diputados, para que éste se pronuncie sobre las mismas en los términos que procedan, en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.

Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Rodríguez Sahagún): Señor Presidente, señoras y señores Senadores, no sería agradecido por mi parte ni correcto si, aunque sea con la mayor brevedad para no robar ni un minuto siquiera a SS. SS., no dejara constancia pública de mi satisfacción, profunda satisfacción, por la altura parlamentaria que entiendo que han tenido los debates del día de hoy. Tengo que decir que he asistido a una sesión parlamentaria que recordaré toda mi vida.

Quiero agradecer una vez más a SS. SS. la colaboración recibida, y decir que yo pensaba haber aceptado la enmienda en cuanto al período de compromiso del Ministro, pero ya que en el toma y daca no nos hemos entendido, quisiera dejar claro que el espíritu del compromiso del Gobierno es que se remitirá en ese plazo que está aquí establecido a las Cortes el proyecto de ley.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Anuncio a SS. SS. que los respectivos titulares, como primeros firmantes, de las proposiciones no de ley que integran el punto octavo del orden del día, Senadores Toledo y Matutes, han dirigido a esta Presidencia sendos escritos, que tuvieron entrada uno en el día de ayer y otro en el día de hoy, por los que ambos solicitan,

ante la necesidad de hacer un nuevo acopio de datos que les permitan defender las proposiciones no de ley con mayor rigor, el aplazamiento del debate respecto de ambos actos parlamentarios.

TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO:

— SOBRE MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 5.º Y 6.º Y DISPOSICION ADICIONAL (NUEVA) DEL REAL DECRETO-LEY 11/1978, DE 27 DE ABRIL.

El señor PRESIDENTE: Sólo nos queda para concluir el orden del día el punto sexto, «Toma en consideración de proposiciones de ley del Senado», que versa sobre la proposición de ley sobre modificación de los artículos 5.º y 6.º y Disposición adicional (nueva) del Real Decreto-ley 11/1978, de 27 de abril, que fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» de fecha 6 de mayo de 1980.

No se han formulado votos particulares a este dictamen de la Comisión, que, por otra parte, y a efectos sólo del tiempo de intervenciones, se regula por el procedimiento de urgencia, según lo acordó la Cámara.

Procede, en primer lugar, que el señor Presidente de la Comisión me indique si hay designado portavoz que haga la defensa o exposición del dictamen de la Comisión. ¿Señor López Henares?

El señor LOPEZ HENARES: Señor Presidente, la Comisión designó al Senador Ojeda para que defendiera el dictamen de la Comisión.

El señor PRESIDENTE: El señor Laborda tiene la palabra.

El señor LABORDA MARTIN: Señor Presidente, le pido excusas porque mi compañero el señor Ojeda ha salido un momento llamado, creo que ha sido para hacer unas declaraciones a la radio... Veo que está aquí ya

El señor PRESIDENTE: Senador Ojeda, le corresponde cubrir su turno de defensor o expositor del dictamen de la proposición de ley que figura como punto sexto del orden del día. Tiene, a tal efecto, la palabra por tiempo de diez minutos.

El señor OJEDA ESCOBAR: Señor Presidente, Señorías, pido perdón a la Cámara, pero el cumplimiento de los deberes con los medios de comunicación me han impedido encontrarme oportunamente en el lugar que me correspondía.

Comparezco ante SS. SS. para presentar la proposición de ley sobre modificación de los artículos 5.º y 6.º y Disposición adicional (nueva) del Real Decreto-ley 11/1978, de 27 de abril. Y debo este honor, en primer lugar, a haber sido mi Grupo, el Grupo Socialista Andaluz, el que presentó esta proposición de ley, y en segundo lugar, a la generosidad, a la caballerosidad de los ponentes del Grupo Parlamentario de UCD, que delegaron en este Senador la presentación de esta proposición de ley.

Muy brevemente, porque la Cámara está cansada, el día ha sido duro, el trabajo ha sido complicado, y me voy a limitar, como decía esta mañana el señor Martín Villa, en este caso coincidiendo mi labor de parlamentario con casi —aunque estoy fuera de jurisdicción— mi profesión, a ser mero relator, mero fedatario del «iter» legislativo que ha seguido esta proposición de ley en esta Alta Cámara.

El objetivo y la finalidad fundamental que perseguía la proposición de ley quedaban limitados a la Junta de Andalucía, y perseguía fundamentalmente que los miembros del Consejo Permanente y del Pleno de la Junta de Andalucía, que procedían del Parlamento, que tenían que tener necesariamente la condición de parlamentarios para ser miembros del plenario y del Consejo Permanente, pudieran serlo sin tener inexcusablemente, necesariamente, la condición de parlamentarios.

Este era el objetivo fundamental, y por eso la proposición de ley inicial se limitaba exclusivamente a Andalucía.

Como recuerdan SS. SS., en el mes de junio, al hacerse la proposición, fue aprobada,

creo que por asentimiento o por unanimidad, y pasó a la Comisión correspondiente, Comisión de Presidencia del Gobierno.

A la proposición de ley se presentaron, creo recordar, tres enmiendas, una de ellas, por el Grupo de UCD, a la totalidad; otra firmada por el Senador de UCD don Fernando Arenas del Buey, y otra por el Senador don Manuel Sevilla Corella.

En los últimos días de junio, y ante la terminación de la etapa legislativa, se reunió la Comisión, se designó una Ponencia y ésta trabajó con un espíritu abierto. Desestimó, en un primer momento, la enmienda presentada por el señor Sevilla Corella; estimó como muy positiva, si no la redacción sí el espíritu que inspiraba la enmienda del señor Arenas del Buey, y admitió casi en su totalidad, con algunas correcciones de estilo, la enmienda que había presentado UCD y cuyo objetivo fundamental era extender la proposición de ley, que inicialmente quedaba reducida a Andalucía, a todos los entes preautonómicos.

Como digo, la Ponencia trabajó con ese carácter abierto que se reflejó en el propio informe de la misma, donde se dejaba incluso abierta la posibilidad de que, al reunirse la Comisión, si se estimaba necesario, si se creía conveniente, se volviera al espíritu primitivo, a las ideas que primitivamente informaron esta proposición de ley. A pesar de ser una proposición de ley que tiene muy pocos artículos, aunque va precedida de la necesaria exposición de motivos, aclaratoria y justificadora de sus objetivos, dio lugar a que en Comisión se discutiera arduamente, porque tropezábamos con grandes dificultades, por una razón muy sencilla. Como saben SS. SS., los distintos entes preautonómicos fueron instituidos a través de Reales Decretos-leyes y de decretos que desarrollaban estos Reales Decretos-leyes. Y teniendo en cuenta la etapa y el momento en que se formaron los entes preautonómicos, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada comunidad preautonómica, el régimen jurídico que se establecía para cada una de ellas era distinto, no sólo en cuanto al órgano y a su denominación, sino también en cuanto a su composición, si bien no en cuanto a sus competencias y a sus cometidos.

Por ello, como digo, tras arduas dificultades, tras discusiones difíciles, se llegó a un acuerdo de todos los Grupos, y la Comisión dictaminó la proposición de ley que hoy se presenta a esta Cámara y para la que, como andaluz, como presentador y como defensor de la proposición de ley anunciada, pido el voto favorable de SS. SS. Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Procede la intervención de un portavoz por cada uno de los Grupos Parlamentarios por el tiempo máximo de diez minutos. Los señores portavoces que vayan a cubrir estas intervenciones pueden pedir la palabra. *(Pausa.)*

Le corresponde otra vez hacer uso de la palabra al señor Ojeda, ahora como portavoz del Grupo Socialista Andaluz.

El señor OJEDA ESCOBAR: Señor Presidente, Señorías, muy poco tengo que decir después de la intervención que como presentador de la proposición de ley he hecho. Quizá, al hilo de esa intervención y de la hora en que nos encontramos, me gustaría hacer sólo dos observaciones; una de ellas guarda relación con esta proposición de ley y la otra no.

La primera, que encuentre un cauce rápido, una pronta solución esta proposición de ley en el Congreso, porque en su exposición de motivos se dice que el tener que compartir los parlamentarios la doble condición de Senador o Diputado y de miembro del órgano de Gobierno del plenario del ente preautonómico, dificulta la actividad, el trabajo a desarrollar, tanto en el Parlamento como en la Comunidad preautonómica.

Por tanto, es de esperar que esta proposición de ley que vamos a votar favorablemente, según tengo entendido, todos los Grupos, encuentre pronto luz verde en el Congreso de los Diputados y sea realidad, para bien de los entes preautonómicos y para que los parlamentarios puedan desplegar y desarrollar su actividad más tranquilos y más reposadamente, ya que a veces nos vemos sometidos a un ritmo excesivo, a un ritmo que llega casi hasta el agotamiento físico.

En segundo lugar, por lo que afecta a Andalucía, a mí me gustaría que esta proposi-

ción de ley tuviese los menores tropiezos posibles en cuanto al tiempo, y digo esto porque el proceso andaluz se ha desbloqueado, y dentro de unos meses Andalucía dejará de ser un ente preautonómico para ser una comunidad autónoma, con todos sus derechos.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista del Senado, tiene la palabra el señor Arévalo.

El señor AREVALO SANTIAGO: Para anunciar que el Grupo Socialista, naturalmente, va a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley.

Ciertamente, esta proposición de ley está limitada en el tiempo, puesto que se reduce lo menos posible en todos los casos, especialmente para el caso de Andalucía, como ha sido expuesto por el Grupo proponente; y limitada en el tiempo también porque se refiere a los entes preautonómicos, y una vez terminados los períodos preautonómicos en cada una de las entidades, se pasará entonces a la situación siguiente, que es la de la autonomía y, por tanto, habrá terminado la eficacia de esta ley.

Esta ley no intenta eliminar a los parlamentarios de los organismos regionales, sino que posibilita a los partidos para que los parlamentarios puedan ser sustituidos por personas que no tengan ese carácter, con el fin de facilitar y agilizar el trabajo en los entes preautonómicos.

Creo que es importante que esto sea así, puesto que se puede dar sagacidad a la política regional, se puede dar agilidad al propio trabajo dentro de cada una de las regiones y se puede facilitar que dentro de los procesos preautonómicos, que están llenos de dificultades muchas veces, se logren pasos importantes en la organización territorial del Estado en el logro del Estado de las Autonomías. Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Villodres.

El señor VILLODRES GARCIA: Señor Presidente, señor Vicepresidente, Señorías; telegráficamente para determinar nuestra posición en este tema.

He oído con toda atención la intervención del señor Ojeda en la exposición del dictamen de la Comisión, pero previamente, en este mismo Pleno, esta mañana, el señor Ojeda parecía que se lamentaba de que siempre eran los Senadores de UCD los que exponían los dictámenes. Yo recuerdo, sin embargo, por ejemplo, al Senador Prat, quien con mucha brillantez expuso el proyecto sobre el Consejo de Estado; al Senador Subirats, que defendió el proyecto de los ex combatientes, y creo que hay algunos otros ejemplos.

También se ha hecho una referencia a que la exposición debe ser un mero relato. Nuestro Reglamento distingue, en su artículo 57, que la persona que designe la Comisión puede exponer o defender. Nosotros hemos aceptado, con toda amplitud, el continuar siempre exponiendo o relatando sin valoración alguna.

Esta proposición viene acompañada de determinadas circunstancias y presenta unas características determinadas que voy a enumerar telegráficamente. Se trata de un tema autonómico. Surge en esta Cámara, denominada de representación territorial, conforme al artículo 69 de la Constitución. Se da el supuesto de iniciativa legislativa de esta Cámara, conforme al artículo 87 de la Constitución y conforme a nuestro propio Reglamento. En Comisión se ha llegado a aprobar un texto por unanimidad, y ocurre esto en un momento en el que la política autonómica es muy importante, y muy especialmente —como se ha referido el Senador Ojeda— en el tema de la autonomía andaluza.

El tema es autonómico; más exactamente, preautonómico. La iniciativa corresponde al Grupo Socialista Andaluz. No obstante, nosotros, de acuerdo con el principio espíritu-oportunidad, consideramos oportuno también en esta materia que el Grupo Socialista extienda su objetivo a otros Grupos; es decir, el tema de no ser necesaria la condición de parlamentario, que surge en esta Cámara de representación territorial.

En el último debate sobre política autonómica, con la intervención del Ministro de Administración Territorial, señor Martín Villa, y diversos señores Senadores, se planteaba aquí la necesidad de encontrar un sitio para el Senado como Cámara de representación te-

territorial, pero nosotros, como Cámara colegisladora, utilizando el artículo 87, 1, de la Constitución, consideramos que ahora no estamos buscando un espacio, sino que estamos ejerciendo lo que establece la Constitución, no como Cámara de representación territorial que ha de encontrar un espacio.

Es muy importante, en cuanto a la iniciativa legislativa de la Cámara, observar esta proposición, porque es una auténtica prueba de que el procedimiento actual que tenemos en las proposiciones es el correcto. Recortar los procedimientos en las proposiciones de ley, es decir, limitar éstos a un acto único: decir sí o no a su envío al Congreso sería grave, especialmente para los Grupos minoritarios, porque la alternativa que queda es que se acepta todo o nada.

Con una proposición socialista, con un plazo de enmiendas, con reuniones en Ponencia y en Comisión hemos llegado a un texto de total conformidad. Reducir esta iniciativa supondría que únicamente prosperasen en esta Cámara las proposiciones de UCD, porque basta que se tenga el menor reparo a la proposición para oponerse a ello.

Insistimos en que esto es malo, que esto no es positivo para la Cámara, pero muy especialmente para los Grupos minoritarios.

Por último, el momento en que llega es el momento de las autonomías. En el pasado Pleno, el señor Montero nos explicó muy bien que las autonomías no eran una cuestión de mayoría parlamentaria, sino de to-

das las fuerzas políticas. Responde a unos acuerdos tomados por unanimidad, por todas las fuerzas políticas representadas en la Junta de Andalucía. Esto puede constituir una esperanza, puede ser un símbolo, para que pueda conseguirse, como decía el Senador señor Ojeda, una autonomía en Andalucía, respetando la voluntad del pueblo andaluz, y, a ser posible —como creo que se va a hacer en esta proposición de ley—, por unanimidad, por asentimiento.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Espero que no haya inconveniente en que la toma en consideración de esta proposición de ley se haga en su totalidad. No tendrá, por consiguiente, que votarse artículo por artículo.

Doy por seguro que la Cámara aceptará por unanimidad que se admita la propuesta de la Presidencia de aprobar la toma en consideración de esta proposición de ley. (*Asentimiento.*) Así se declara. Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89, 2, de la Constitución, esta proposición de ley será remitida al Congreso de los Diputados para su tramitación ulterior.

Señorías, la próxima semana no habrá Pleno. Por consiguiente, en su momento, serán convocados para el Pleno que se iniciará en la tarde del martes día 21. Se levanta la sesión.

Eran las nueve y cuarenta minutos de la noche.

Precio del ejemplar 50 ptas.

Venta de ejemplares:

SUCESORES DE RIVADENEYRA, S. A.

Cuesta de San Vicente, 36

Teléfono 247-23-00. Madrid (8)

Depósito legal: M. 12.590 - 1961

Imprime: RIVADENEYRA, S. A.-MADRID